



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de Asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

No. expediente: 517/2011

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia: PENAL

QUEJOSO:

RECURRENTE: QUEJOSA

TERCERO PERJUDICADO:

SUJETO RELACIONADO:

Reclamado: LA SENTENCIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2009, DICTADA EN EL
PROCESO DE APELACIÓN NÚMERO

Acto recurrido:

Motivo del conflicto:

Autoridad responsable: PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO

Autoridad emisora del acto:

Garantías violadas:

Tema: DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA; PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, PORTACIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL
EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA; POSESIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO
DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA Y POSESIÓN DE CARTUCHOS DE USO
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA.
EL TRIBUNAL COLEGIADO REALIZA LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21,
CUARTO PÁRRAFO CONSTITUCIONAL.
EN VÍA DE AGRAVIOS ADUCE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21, CUARTO
PÁRRAFO CONSTITUCIONAL.

F. turno a ponencia: 22/03/2012

Ministro: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO

Secretario proyectista: BEATRÍZ JOAQUINA JAIMES RAMOS

Sentido de la resolución: SE REVOCA LA SENTENCIA.

LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, EN CONTRA
DE LA AUTORIDAD Y EL ACTO PRECISADOS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA

SIN TEXTO





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION

Constancia de captura de engrose en la red de informática Jurídica

SENTENCIA.

A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ, COMUNÍQUESELE A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA EL SENTIDO DE ESTE FALLO Y ORDÉNESE LA LIBERTAD ABSOLUTA E INMEDIATA DE LA QUEJOSA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN DE VIENA DE RELACIONES CONSULARES, COMUNÍQUESE AL CONSULADO DE LA REPÚBLICA FRANCESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL SENTIDO DE ESTE FALLO.

Resolución: 23/01/2013

F. ingreso engrose: 27/02/2013

Votos a favor: 3

Votos en contra: 2

LA QUE SUSCRIBE LIC. BEATRÍZ JOAQUINA JAIMES RAMOS, SECRETARIO DE ESTUDIOS Y CUENTA ADSCRITA A LA PONENCIA DE LA MINISTRA OLGA MARÍA DEL CAMINO SÁNCHEZ CORDERO, HAGO CONSTAR QUE EN ESTA FECHA, SE PROCEDE A CAPTURAR EN LA RED DE INFORMÁTICA JURÍDICA, EL ENGROSE DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 23 DE ENERO DE 2013, DICTADA POR LA PRIMERA SALA EN EL PRESENTE ASUNTO, PREVIO COTEJO DE SU ORIGINAL DEL CUAL FUE TOMADO.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A 27 DE FEBRERO DE 2013

FIRMA

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Constancia de actualización de engrose en la red de informática Jurídica

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN

No. expediente: 517/2011

Pertenece: PRIMERA SALA

Materia: PENAL

QUEJOSO

RECURRENTE: QUEJOSA

TERCERO PERJUDICADO:

SUJETO RELACIONADO:

Acto reclamado: LA SENTENCIA DE FECHA 02 DE MARZO DE 2009, DICTADA EN EL
AULA DE APELACIÓN NÚMERO;

Autoridad responsable: PRIMER TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO

Tema: DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD
EN LA MODALIDAD DE SECUESTRO, PORTACIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO DEL
EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA; POSESIÓN DE ARMA DE USO EXCLUSIVO
DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA Y POSESIÓN DE CARTUCHOS DE USO
EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA.
EL TRIBUNAL COLEGIADO REALIZA LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21,
CUARTO PÁRRAFO CONSTITUCIONAL.
EN VÍA DE AGRAVIOS ADUCE LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21, CUARTO
PÁRRAFO CONSTITUCIONAL.

F. turno a ponencia: 22/03/2012

Ministro: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ CORDERO

Secretario proyectista: BEATRÍZ JOAQUINA JAIMES RAMOS

Sentido de la resolución: SE REVOCA LA SENTENCIA.
LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A LA PARTE QUEJOSA, EN CONTRA
DE LA AUTORIDAD Y EL ACTO PRECISADOS EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA
SENTENCIA.

A TRAVÉS DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS EFICAZ, COMUNÍQUESELE A LA
AUTORIDAD PENITENCIARIA EL SENTIDO DE ESTE FALLO Y ORDÉNESE LA
LIBERTAD ABSOLUTA E INMEDIATA DE LA QUEJOSA.

EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN DE VIENA DE
RELACIONES CONSULARES, COMUNÍQUESE AL CONSULADO DE LA REPÚBLICA
FRANCESA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL SENTIDO DE ESTE FALLO.

F. resolución: 23/01/2013

F. ingreso engrose: 27/02/2013

Votos a favor: 3

758
612

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACION
SECRETARIA DE JUSTICIA
DE LA FEDERACION



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

927
FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA

A. D. R. 517/2011

20 ANEXOS:

18 CUADERNOS

J.A.D. (USB)

TOMO PENAL

LA CAUSA PENAL
EN TOMOS

1 EXPEDIENTILLO DEL
RECURSO DE REVISIÓN

1 LEGAJO EN COPIA
CERTIFICADA
DEL TOMO XXX DE LA
CAUSA PENAL

En el amparo directo en revisión, cuyo número se anota al margen,
promovido por

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
dictó sentencia con fecha veintitrés de enero del presente año, por lo que se le
remiten los autos correspondientes al juicio de amparo directo número en
1018 fojas, engrapado al mismo un sobre conteniendo un USB, expedientillo del
recurso de revisión en 37 fojas, el tomo penal en 797 fojas y la causa penal
en: Tomo I en 768 fojas; Tomo II en 222 fojas; Tomo III en 492 fojas; Tomo
IV en 283 fojas; Tomo V en 492 fojas; Tomo VI en 22 fojas, en las cuales se
encuentran 16 audio casetes, dos video casetes VHS y una grabadora; Tomo VII en
930 fojas, en la foja 793 se encuentra un disco compacto; Tomo VIII en 806 fojas, en
la foja 299 se encuentran dos video casetes; Tomo IX en 716 fojas; en la foja 669 se
encuentra una gorra y en la 670 una gorra pasamontañas; Tomo X en 721 fojas;
Tomo XI en 842 fojas; Tomo XII en 732 fojas, en la foja 182 se encuentra un disco
compacto y en la 222 dos discos compactos; Tomo XIII en 872 fojas; Tomo XIII-A en
949 fojas y Tomo XIII-B en 577 fojas; un anexo original de la causa penal
en 330 fojas según sus últimos folios y un legajo en copia certificada del Tomo XXX
de la causa penal en 226 fojas según su certificación. Además se le
informa que una vez concluido el trámite del engrosé del citado asunto, se le remitirá
el testimonio correspondiente.

He de agradecer, se sirva ordenar se acuse el recibo
correspondiente.

Protesto a usted mi atenta consideración.

México, D. F., a 8 de febrero de 2013.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

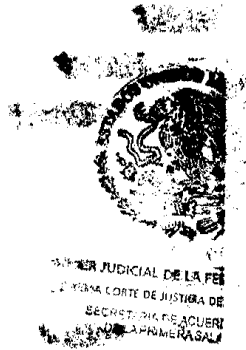
LIC. HERIBERTO PÉREZ REYES

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

[Firma]

*Se recibe
con los
anexos descritos*

**SIN
TEXT
O**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

928

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
P R E S E N T E .

PRIMERA SALA

A.D.R. 517/2011

1 ANE
1 COP
CERTIFICADA CON
VOTO
CONCURRENTE

ERACIO
LA NACIÓN

ANTECEDENTE:
J.A.D.

En alcance al oficio número 341 de fecha ocho de febrero del presente año, enviado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión, cuyo número se anota al margen, promovido por

remito a usted copia certificada del testimonio de la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil trece con voto concurrente que formula el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, como complemento de la misma, en un total de 155 fojas.

He de agradecer, se sirva ordenar se acuse el recibo correspondiente.

Protesto a usted mi atenta consideración

México, D.F., a 4 de marzo de 2013.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

LIC. HERIBERTO PÉREZ PÉREZ.



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

M
Gasp.

PRIMER CIRCUITO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

2013 MAR -5 AM 11: 27

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL

350
350

SIN TEXTO





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

929

FORMA A - 52

AL REFERIRSE A ESTE OFICIO MENCIONE
EL NÚMERO Y LA OFICINA QUE LO GIRÓ

PRESIDENTE DEL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
P R E S E N T E.

PRIMERA SALA

A.D.R. 517/2011

1 ANEXO:

1
CERTIFICADA DE
VOTO PARTICULAR

DE LA FEDERACIÓN
ANTECEDENTE:
J. A. D.

En alcance al oficio número 492 de fecha cuatro de marzo del presente año, enviado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo directo en revisión, cuyo número se anota, al margen, promovido por

remite a usted copia certificada del voto particular que formula el Ministro José Ramón Cossío Díaz, como complemento de la resolución de fecha veintitrés de enero de dos mil trece, en un total de 13 fojas.

He de agradecer, se sirva ordenar se açuse el recibo correspondiente.

Protesto a usted mi atenta consideración

México, D.F., a 6 de marzo de 2013.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA.

LIC. HERIBERTO RÍREZ RIVERA



SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SALA

Mgisp.

DE PRIMERA CIRCUITO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

2013 MAR - 7 PM 1:24

SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA PENAL

SIN TEXTO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE ACUERDOS
PRIMERA SALA



* * *

CUADERNILLO RELATIVO AL
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

Oficio DGCVS/UE/0164/2013
México, D. F., a 16 de enero de 2013.

Licenciada
Renata Denisse Bueron Valenzuela
Secretaría de Actas y Seguimiento de Acuerdos
del Comité de Acceso a la Información
y de Protección de Datos Personales
Presente

Con base en la solicitud con Folio [redacted] presentada mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, en la que se solicita la información relativa a **"El proyecto de resolución que propone la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas respecto al caso de [redacted]"** y conforme a lo previsto en el artículo 137 del Acuerdo General de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del nueve de julio de dos mil once, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este Tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el artículo 6o. Constitucional, respetuosamente le remito el expediente

En este tenor, y considerando que se ha recibido la respuesta del órgano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinado competente para conocer de la presente solicitud, el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala, mediante [redacted] señala:

"Me pongo a hacer de su conocimiento que el amparo directo en revisión 517/2011, se clasifica por el momento como información reservada, lo anterior por encuadrar en el supuesto que prevé el artículo 14, fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que a la letra dice:

"Artículo 14. También se considera como información reservada:

[...]

IV. Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado."

Ya que al recibir su petición, el referido amparo directo en revisión, se encuentra en estudio en la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, por lo que cuando se dicte la resolución correspondiente se estará en posibilidad de proporcionar la información solicitada."

Por lo anterior, solicito a usted de la manera más atenta se dé el turno correspondiente a fin de que se elabore el proyecto de resolución que debe emitir el Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 fracción III, 149, 153 y 154 del Acuerdo antes mencionado y el artículo 30 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, **considerando que la información solicitada fue clasificada como reservada por la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala**, toda vez que el amparo directo en revisión 517/2011 se encuentra en estudio ante la Ponencia de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

18-enero-13
12:09 pm
Leticia-
13-enero-23-enero-

931
916



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN Y VINCULACIÓN SOCIAL

No omito manifestarle que se deberá dar respuesta al solicitante a más tardar el día 31 de enero de 2013.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

Licenciado Jorge Camargo Zurita
Director General

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

2013 ENE 17 PM 1 26

PRIMERA SALA
SECRETARÍA DE ACUERDOS



C.c.p.- Lic. Heriberto Pérez Reyes.- Secretario de Acuerdos de la Primera Sala.- Para su conocimiento y en su caso atención.
Minutario D.G.C.V.S.
Archivo

JCZ/CAGC/RA/10/ma

23.32



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011,

QUEJOSA:

ASUNTO: AMICUS CURIAE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA HARREA

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Distrito Federal (CDHDF)¹ comparezco ante esta SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente
documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión.

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PAGINA |
|--|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | 5 |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | 24 |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | 24 |
| V. PETITORIO | 30 |



23.52



[Handwritten signature]

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL

10/18/23
21/24/13
947

PRESIDENCIA

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011,

QUEJOSA:

ASUNTO: AMICUS CURIAE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA LARREA

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

| LISTADA | |
|-----------------|------------------------------|
| EXPEDIENTE: | <u>A.D.R. 517/2011</u> |
| MINISTRO: | <u>M. Oleg</u> |
| SRIO. PONENCIA: | <u>Lic. Beatriz Tociguna</u> |
| FECHA LISTADO: | <u>10/01/13</u> |
| FECHA SESIÓN: | <u>23/01/13</u> |
| SRIO AUXILIAR: | <u>Lic. Lelia</u> |

[Handwritten signature]
Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)¹, comparezco ante esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión. *[Handwritten signature]*

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PAGINA |
|--|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | 24 |
| V. PETITORIO | 30 |

I. JUSTIFICACIÓN

El *amicus curiae* (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En nuestro sistema jurídico existen precedentes sobre la recepción y admisión de escritos de *amicus curiae* por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal. Asimismo, diversos tribunales internacionales reconocen esta figura jurídica como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares relevantes para la resolución de un caso, entre ellos se encuentra la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA LA EX YUGOSLAVIA y RUANDA, así como por la CORTE ESPECIAL PARA SIERRA LEONA.

En tal virtud, en nuestra actuación como *Amicus Curiae* se ofrecerán argumentos con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para el inminente fallo en relación con el caso al rubro citado.

Por último, se reitera que esta actuación tiene como interés la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, cuya labor permanente nos corresponde a todos y todas.

II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE

El principal interés de esta representación es mostrar a las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución del caso en estudio conlleva la necesidad de analizar los siguientes aspectos relacionados con la necesidad de asegurar que el juicio de amparo posibilite, en caso de advertir violaciones a los derechos humanos, la plena protección de éstos, asegurando la mayor protección de la persona, y en contrapartida, la falta de efectividad de una

sentencia dictada *sólo para determinados efectos* en el marco del juicio de amparo directo en revisión. En específico, se sostiene que:

- El otorgamiento de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* contraviene la naturaleza del juicio de amparo en tanto reduce los alcances de un recurso concebido para la protección de derechos humanos a la salvaguarda normativa del orden Constitucional.
- La concesión del amparo *sólo para determinados efectos* podría atentar contra la teleología e impedir la máxima realización del recurso, puesto que únicamente atendería a enmendar violaciones procesales sin ordenar la total reparación de los derechos violentados.
- La sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide a la quejosa el acceso a un recurso efectivo para reparar las violaciones a sus derechos humanos.
- La concesión de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* es contraria a la función jurisdiccional que las y los Ministros de esta Honorable Corte deben desempeñar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
- En caso de que el tribunal constitucional advierta violaciones a los derechos humanos, debe otorgar la mayor protección constitucional posible, resolviendo el fondo de la cuestión, más allá de las formalidades propias del amparo *sólo para determinados efectos*.



III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Los debates planteados en medios de comunicación especializados, en foros de la sociedad civil, así como las discusiones suscitadas en el seno de este Máximo Tribunal en torno al presente caso, evidencian como uno de los principales temas para la resolución del presente asunto, la determinación de los alcances de la posible sentencia que

conceda el amparo a partir de la naturaleza de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa. Es decir, se ha identificado que el alcance de una posible sentencia que conceda el amparo está sujeto a la determinación de si las violaciones que se alegan son de carácter procedimental o sustancial. Así, en un esquema tradicional de cuño formalista, cuando existen violaciones de naturaleza procesal, el amparo se concedería *sólo para efectos* de subsanar la incorrecta aplicación e interpretación de la norma, mientras que por violaciones de naturaleza sustancial la sentencia se concedería de manera plena para subsanar todas las violaciones a derechos humanos.

En el caso concreto, resulta relevante guardar las precauciones necesarias para no reducir el análisis del asunto a la mera comprobación de violaciones de carácter procedimental que deriven en la concesión de un amparo *sólo para efectos* de subsanar los errores de la autoridad. Esta Comisión sostiene que la sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* limita los alcances del recurso e impide su realización como máximo instrumento de protección de los derechos fundamentales. Además, contraviene los estándares internacionales relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso adecuado y efectivo para subsanar violaciones a derechos humanos, puesto que no garantiza una reparación integral de los derechos que se alegan violados. En este contexto, se presentan los argumentos que sostienen que la figura del *amparo para efectos* no debe ser considerada por las y los Ministros de este Honorable Tribunal Constitucional al momento de dictar sentencia del caso en estudio, y que en caso de advertir violaciones a los derechos humanos de la hoy quejosa, debe conceder la más amplia protección constitucional:

III.1 EL AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO

En primer lugar, y para sostener que la concesión del amparo *para determinados efectos* es contraria a la teleología del juicio de amparo, es necesario exponer de manera breve la naturaleza jurídica del recurso en conocimiento de este Honorable Tribunal.

El amparo directo es el medio de impugnación que tiene por objeto revisar las resoluciones de los Tribunales del Estado para determinar si las mismas han sido

dictadas conforme a derecho o si tienen vicios que impliquen contravenciones a algún mandato constitucional.²

Desde los primeros momentos de su configuración, el amparo directo se caracterizó por la enérgica oposición de los constituyentes respecto a su establecimiento, ya que consideraban que éste nulificaría la administración de justicia local y comprometería la soberanía de los Estados, así como el prestigio de sus órganos judiciales.³ Por tal motivo, las personas que participaron en los debates, decidieron que, a fin de garantizar que no cualquier sentencia emitida por los órganos judiciales locales fuese revisada por tribunales federales, resultaba necesario limitar el objeto del juicio de amparo directo.⁴

Esta limitación, consistió en que los tribunales federales conocerían de las sentencias dictadas en la justicia local, sólo cuando los tribunales locales en sentencias definitivas, hubieren incurrido en violaciones a las leyes del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y que trascendieran al resultado del fallo; o cuando éstos hubiesen cometido violaciones en las sentencias o laudos definitivos.⁵ En otras palabras, establecieron que – de manera similar al *recurso de casación* – el amparo directo cumpliría con una doble función, a saber: 1) permitiría realizar impugnaciones de fondo sobre violaciones a los derechos de las personas;⁶ y 2) realizar una función de control sobre la aplicación incorrecta de una norma procesal.⁷

En este orden de ideas, es posible afirmar que la finalidad y el objeto del juicio de amparo directo es condicionar la validez y sujetar el contenido de las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, al cumplimiento del orden jurídico constitucional, en particular al respeto de los derechos humanos.⁸ En tal sentido, la propia Ley de amparo establece que la sentencia que conceda el amparo «*tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al*

² CASTILLO DEL VALLE, Alberto. *Ley de Amparo comentada*. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

³ Exposición de motivos, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la constitución política de los estados unidos mexicanos*, Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta No. 352., México, D.F., a 19 de marzo de 2009, pp.6.

⁴ Ibid.

⁵ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

⁶ Idem.

⁷ León Dorantes, Romeo. *El Juicio de amparo*. Tercera Edición. Editorial José Caciña. México, 1957.

⁸ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija»⁹

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que el amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, cuando existen impugnaciones ya sea procesales o materiales que requieran de interpretación constitucional, la facultad que se otorgó al Poder Judicial Federal para conocer sobre sentencias definitivas es restringida, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer al respecto.¹⁰

Cuando de la resolución dictada en amparo directo se pudiese advertir que existió por parte del Tribunal Colegiado, ya sea, la interpretación directa de un precepto de la Constitución; que subiste un problema de constitucionalidad planteado desde la demanda inicial, o bien, que el propio Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre alguno de estos dos temas¹¹, se cuenta con la posibilidad de interponer el denominado amparo directo en revisión.

Este amparo directo en revisión, del cuál sólo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX de nuestra Constitución¹², así como en el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo¹³ y 21, fracción III, inciso a), de

⁹ Artículo 80 Ley de Amparo.

¹⁰ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión /2009, Sentencia del día 2 de mayo de 2010. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión /2007. Quejosos Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

¹³ Ley de Amparo. Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...)V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁴ como un medio de impugnación excepcional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo.¹⁵ De manera adicional, este recurso es considerado como un medio de impugnación excepcional, debido a que, por regla general, las resoluciones en juicios de amparo directo emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten ningún recurso, a menos que, como se ha señalado, se presenten las excepciones ya señaladas.¹⁶

Como es posible apreciar, los requisitos de procedencia del recurso de revisión persiguen como principal finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete definitivo de la Constitución, sea en última instancia quien determine si una norma se ajusta a la misma, o bien, quien fije el alcance y sentido jurídico de las disposiciones constitucionales.¹⁷

De esta manera, resulta evidente que el objeto con el que se promueve un recurso de revisión en el amparo directo estribaría en la búsqueda de obtener una sentencia que revoque o modifique la resolución recurrida, y que por tanto, los únicos efectos que debería llegar a producir, en caso de ser favorable para la parte quejosa, sería conceder la protección de la Justicia de la Unión en sentido pleno, tal y como lo establece la propia Ley de Amparo al mencionar la finalidad y efectos que debería tener una sentencia de amparo.

No obstante, a través de la práctica, el Poder Judicial desarrolló una fórmula ampliamente aceptada pero con un grave cuestionamiento estructural, que es el otorgamiento de esta protección *sólo para determinados efectos*. De esta manera, y dependiendo de si el amparo directo en revisión versa sobre impugnaciones de fondo o procesales, la sentencia dictada, bajo este esquema planteado, podría llegar a los siguientes resultados:

¹⁴ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)

¹⁵ AZUELA GÜITRON, Mariano. "Revisión en Amparo Directo". Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2009.

¹⁶ SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión. 2007. Quejosos

s. Ministro Ponente

Sergio Vals Hernández.

¹⁷ REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. *Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*. Tomo: III, febrero de 1996. -Tesis: 2a./J. 3/96. Página: 218

- 1) Si del análisis se desprende que existe una violación a un derecho fundamental, cuya trasgresión afectó de manera grave al quejoso, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión se tendría que conceder de **manera plena**.¹⁸ En este sentido, y tratándose de procesos penales, las violaciones graves a los derechos humanos del procesado, en especial, a la defensa adecuada y al debido proceso, llegaría a tener por efectos la inmediata libertad de la persona procesada.¹⁹
- 2) Sin embargo, cuando el análisis y la resolución versaran sobre impugnaciones procesales, la concesión del amparo se otorgaría solo **para efectos**, es decir, su alcance será únicamente decretar la nulidad de lo actuado y reenviar a la autoridad responsable para la reposición del procedimiento. Lo anterior, debido a que, en este esquema, se considera que un Tribunal Colegiado de Circuito —autoridad en principio competente para conocer del juicio de amparo directo— no tiene jurisdicción plena respecto a la controversia, por lo que la sentencia que otorgue la protección federal sería dictada para efectos de invalidar lo actuado por la autoridad responsable y para que en su caso, ésta dicte una nueva resolución en que se repare el error cometido.²⁰

El presente *amicus curiae*, aclarará precisamente cómo uno de los alcances que puede llegar a producir la sentencia dictada en el amparo directo en revisión —conceder el amparo para efectos— además de resultar contraria a la naturaleza propia del recurso de amparo y a los estándares internacionales de los recursos judiciales, no tiene cabida en las soluciones posibles que las y los juzgadores pueden adoptar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

III.2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

A continuación, y a efectos de exponer cómo el amparo para efectos no debería tener cabida en la conciencia de las y los juzgadores —en especial de un Tribunal

¹⁸ Algunos antecedentes sobre asuntos en que esta Primera Sala consideró que los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado son: amparo de amparo en revisión /2008, amparo directo en revisión /2009, amparo directo /2010, amparo directo /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo en revisión /2010, amparo en revisión /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo en revisión /2011, amparo en revisión /2011, amparo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011 y amparo directo en revisión 2 /2011.

¹⁹ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:

Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDIVAR LELO DE LARREA.

²⁰ CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

Constitucional—, es necesario referirnos al papel que desempeñan dentro del marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En el modelo tradicional del Estado de Derecho, el papel de las y los jueces como órganos sujetos a la primacía de la ley se limitaba a la realización de una función técnica de aplicación de la ley, sin importar cual hubiese sido su contenido.²¹ No obstante, como consecuencia de llamada *segunda revolución en la historia jurídica* —que transformó al Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derecho— esta idea evolucionó. Dicha «revolución» tuvo como principal característica el establecimiento de constituciones rígidas que permitieron la integración del Estado de Derecho a través de la sujeción de la ley por parte de todos los poderes al Derecho y a la Constitución.²²

Sin embargo, esta sujeción —a diferencia del modelo tradicional de Estado de Derecho—, pasó a fundarse no en las formas y procedimientos de creación de leyes, sino en el contenido de las mismas. Es decir, bajo el surgimiento de este nuevo modelo del constitucionalismo o garantismo, la sujeción a la ley se modificó siendo ahora una sujeción no a la letra de la misma (formal), sino que debe atenderse a que la ley sea válida conforme a la Constitución y tratados (material).²³

Desde esta perspectiva, la validez se concibe ya no como un concepto asociado a la mera existencia formal de una norma, sino como una sujeta al contenido de la misma, que debe estar ligado a la coherencia de sus significados con la Constitución, donde además la valoración de esta coherencia le corresponderá al propio juzgador.²⁴ De esta manera, la interpretación judicial se convierte precisamente en un juicio sobre la ley misma, ya que le corresponde a las y los juzgadores la responsabilidad de elegir cuáles son los significados válidos de la ley, esto es, significados compatibles con las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales.²⁵

21 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función Judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005.

22 FERRAJOLI, Luigi. *Sobre los Derechos Fundamentales*. Revista Cuestiones Constitucionales. Número 15. Diciembre, 2006. P. 114.

23 OROZCO Hernández, Jesus J. *La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* en "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2003, número 18. P. 45.

24 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 27.

25 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 26.

Así pues, el constitucionalismo se erige como un sistema de vínculos sustanciales, prohibiciones y obligaciones impuestas precisamente por los principios inscritos, por lo general, en la primera parte de las Constituciones,²⁶ donde las y los juzgadores no pueden sujetarse a la ley de manera incondicionada y acrítica, sino que como consecuencia de la sujeción *material*, tienen la obligación de interpretar en sentido constitucional todas aquellas leyes que consideren inválidas.²⁷

Aunado a lo anterior, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho reconoce los principios como un componente esencial del orden jurídico e incorpora a los derechos fundamentales como parte de los mismos, cambiando así la relación entre el juez y la ley, pues mediante la sujeción a la Constitución se le asigna a la jurisdicción una función de garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad por parte del poder público.²⁸

En este sentido, es evidente que la función jurisdiccional, si bien puede estar relacionada con aspectos de legalidad, en ningún momento puede desprenderse de su principal objeto, es decir, garantizar los derechos fundamentales como contenido *material* de las normas constitucionales. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho los derechos fundamentales se erigen como normas "*sustanciales*" que determinan el contenido y los límites del resto de normas y decisiones que integran un Estado; constituyen lo que Ferrajoli llama la *esfera de lo indecible*.²⁹

Bajo este orden de ideas, y a la luz de una visión del carácter garantista, se debe tener en cuenta que la interpretación de los preceptos constitucionales se desarrollará en el marco del juicio de amparo activado para la salvaguarda de los derechos de la persona, y no así para la protección exclusivamente normativa del orden constitucional. Es decir, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a establecer criterios unitarios sobre la interpretación de la Constitución, en su carácter de

26 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

27 OROZCO Hernández, Jesús J. Ob cit. P. 49.

28 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. P. 25.

29 FERRAJOLI, Luigi. *Teoría de la Democracia. Dos Perspectivas comparadas*. Primera Edición. México, 2001. P.16.

Tribunal Constitucional también tiene como principal función la de ser garante de los derechos las personas, especialmente, en el marco del juicio de amparo.³⁰

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no existe duda respecto a que la procedencia del recurso de revisión se determinó en atención a que la defensa de la quejosa cuestionó no sólo la interpretación del sentido y alcance que el Tribunal Colegiado realizó de los siguientes preceptos constitucionales, sino también las violaciones a derechos humanos que de ellas se derivaron:

| Rubro | Precepto Constitucional | Determinación del Tribunal Colegiado |
|--|---|---|
| Principio de buena fe ministerial | Artículo 21 constitucional | El Tribunal Colegiado consideró que el montaje televisivo no violó esta garantía, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención. |
| Significado del término "sin demora" para efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público | Artículo 16 constitucional | El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término "inmediatamente" o "sin demora", dicha situación debe evaluarse en cada caso. |
| Violación al derecho de notificación consular | Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares | La afectación a este precepto vició el procedimiento, el Tribunal desentendió el principio de supremacía Constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no está obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asesorado por su Consulado para tomarle su declaración. |
| Principio de Congruencia y Exhaustividad | Artículo 17 | En la valoración de la prueba no se tomaron en consideración aquellas que aportó la recurrente en las primeras instancias. |
| Principio de presunción de inocencia | Artículo 20 | Según el Tribunal Colegiado, no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su exposición en los medios ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible impedir que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. |

Fuente: elaboración propia.

Por tales motivos, esta Comisión solicita a las y los Ministros de esta Suprema Corte que el análisis de constitucionalidad no se limite a la protección del orden constitucional, sino que se realice con la finalidad de constatar las posibles afectaciones a los derechos humanos, en lo general, y al debido proceso en lo particular, para que en caso de determine la vulneración de derechos se otorgue la más amplia protección constitucional, rompiendo la sujeción formalista del amparo para efectos, el cual, a juicio de esta institución, debería ser eliminado de la conciencia de las y los juzgadores democráticos.

³⁰ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

En particular, resulta esencial que las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan en cuenta que la resolución del amparo para efectos no sólo es contraria a la naturaleza propia del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, sino también a los estándares establecidos en términos del artículo 25 de la Convención Americana relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso rápido, adecuado y efectivo sencillo para la protección de sus derechos.

III.3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO

El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades del Estado, incluyendo a esta Corte Suprema, a interpretar todas las normas relativas a los derechos humanos de conformidad no sólo con la Constitución, sino también de conformidad con los tratados internacionales de la materia y de los que México sea Estado Parte, en el sentido de otorgar en todo tiempo la protección más amplia al individuo. De igual manera, el párrafo primero de dicho artículo incorpora a nuestro máximo ordenamiento todas las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano.

En razón de lo anterior, y aun cuando esta Suprema Corte ha sentado algunos precedentes respecto la efectividad de los recursos, consideramos necesario recurrir a los estándares internacionales, particularmente a aquellos fijados en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a fin de garantizar la protección más amplia para la persona.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³¹, consagra el derecho de todas las personas a un recurso rápido, sencillo y efectivo:

Artículo 25. Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

³¹ Ratificada por México el 24 de marzo de 1981

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la noción de **efectividad del recurso** presenta dos aspectos: uno de carácter *normativo*, relacionado con la idoneidad del recurso y su capacidad para dar respuesta a la violación de derechos humanos; y el segundo de carácter *empírico*, relacionado con las condiciones que hacen posible que el recurso pueda cumplir con su objetivo.³²

En específico, la CoIDH se ha pronunciado sobre estas condiciones de la siguiente manera:

- a) **Adecuados:** implica que el recurso sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida.³³ El análisis de este requisito debe situarse en el plano del diseño normativo del recurso.
- b) **Efectivos:** un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir un resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.³⁴ La condición de **efectividad**, se correlaciona necesariamente con la rapidez y sencillez del recurso,³⁵ condiciones que deben de existir de manera copulativa en todos los recursos.³⁶

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *vs. México*, para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan

³² CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.LV/II.129. El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Septiembre, 2007.

³³ Corte IDH. Caso ' vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.

4.

³⁴ Corte IDH. (vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr.118.

³⁵ COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Año 2006, Número 5. Página 35.

³⁶ MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2003. P. 361

formalmente, sino que es preciso que tengan **efectividad** en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. Esta obligación implica que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.³⁷

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la interpretación del artículo 25 en relación con el artículo 8 de la Convención Americana deriva el derecho de acceso a la justicia que impone a los Estados la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), mismos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1).³⁸

Así las cosas, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano es constante al señalar que la garantía del acceso a la justicia implica suministrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos los recursos necesarios para alegar la afectación de sus derechos;³⁹ además, ha sido enfática al establecer que no basta con la sola existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.⁴⁰

En otras palabras, no resulta suficiente que un recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que es necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que tales recursos sean: 1) verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación y; 2) que puedan proporcionar una reparación.⁴¹

Ahora bien, en el caso concreto, las y los Ministros de esta Suprema Corte deben considerar que la *sentencia dictada para efectos* no cumpliría con los estándares anteriormente señalados, en tanto torna en ilusorio recurso de amparo directo en

³⁷ *Idem.*

³⁸ Corte IDH. Caso y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 21; Corte IDH. Caso vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2006. Serie C No 149., párr. 175.

³⁹ Corte IDH. Caso vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No 5.

⁴⁰ Corte IDH. Caso vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Junio de 2005. Serie C No 129. Párr. 93.

⁴¹ Corte IDH. Caso vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 129. Párr. 177.

revisión como instrumento de protección de derechos humanos.

Como indicamos, la **efectividad** de un recurso, implica la obligación de las autoridades de garantizar que el recurso sea realmente capaz de producir los resultados para los cuales fue creado, es decir, que pueda cumplir con su objeto.

En tal sentido, el amparo directo y el amparo directo en revisión fueron diseñados desde una perspectiva formalista propia de la época, como instrumentos capaces de producir dos resultados diferentes. Por una parte, ser concedidos sólo *para efectos* de subsanar los errores en el proceso o en un *sentido amplio de protección*, que se traduce en la total reparación de los derechos violentados por la autoridad.

El primero de estos resultados —amparo para efectos—, analizado bajo la lógica del juicio de amparo como máximo instrumento de protección de derechos humanos, convierte al amparo directo y máxime al amparo directo en revisión, en recursos ilusorios para proteger la situación jurídica infringida, es decir, para ~~proteger~~ los derechos fundamentales del quejoso.

En lo que respecta al amparo directo en revisión, esto sucede debido a que, la concesión del amparo **para efectos**, tiene como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia, tras el análisis de una violación procesal —relacionada con aspectos de constitucionalidad— y al declarar la misma como fundada, regrese el expediente a la autoridad responsable para efectos de que la misma repare las violaciones que existieron en el proceso.

Tal situación, en realidad se traduce en la posibilidad que dentro de aquellos juicios, que por lo general llevan varios años de litigarse en primera y segunda instancia y luego ante un Tribunal Colegiado, exista otra violación procesal que varios meses después haga retornar el expediente a la Justicia Federal, provocando así que del mismo asunto deriven un número incierto de juicios de amparo; esto es lo que el Ministro Zaldívar ha llamado como: *el amparo ping pong*.

⁴²Dicha situación, por supuesto, implica que el juicio de amparo no sea, en términos del artículo 25, un recurso **rápido y sencillo** para la protección de derechos.

En este sentido, no basta con que el recurso de amparo directo en revisión tenga dentro de sus posibilidades el otorgamiento del amparo en un sentido pleno, sino que es necesario que el Tribunal, en caso de comprobar la violación a derechos humanos, realmente otorgue esta protección. De lo contrario, el propio Tribunal estaría dando pie a una cadena indefinida de juicios de amparo derivados de violaciones procesales, situación que además, retrasa, dificulta y sobrecarga la impartición de justicia en nuestro país atentando contra lo señalado en los artículos 17 y 23 de nuestra Constitución en relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo breve y en el marco de tres instancias.

De igual manera, es necesario establecer que la tarea de garantizar la **efectividad** del recurso, —en términos del artículo 25 de la Convención Americana— recae en esta Suprema Corte de Justicia y se traduce en permitir la máxima realización del recurso mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en el sentido más amplio de protección.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo directo en revisión tiene como finalidad realizar un control respecto a interpretación de disposiciones constitucionales, lo cual inevitablemente se encuentra relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, toda vez que el conocimiento de este recurso se le reservó como una facultad exclusiva a la Suprema Corte para que, en su papel de Tribunal Constitucional, fuese el único que pudiese realizar un control de las normas constitucionales.

En el caso en concreto, y a juicio de esta institución de protección de los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional limitaría enormemente su papel como garante de derechos humanos si sólo se limita a realizar un análisis formal

⁴² ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. México, 2002.

respecto la interpretación de las normas por parte de la autoridad sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, máxime cuando la finalidad del propio recurso no es la obtención de un *control de constitucionalidad in abstracto*, sino conseguir la garantía y en su caso, la reparación, de los derechos humanos violentados por una errónea interpretación y aplicación de preceptos constitucionales.

Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que el principio del *efecto útil* (*effete utile*) conlleva la necesidad de aplicar e interpretar las disposiciones con su objeto y fin, lo cual no sólo aplica respecto a las normas sustantivas de derechos humanos, sino también en relación con normas procesales.⁴³ En tal sentido, ordenar la concesión del amparo **para efectos** implicaría también contravenir el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, en tanto no se estaría garantizando el cumplimiento del objeto y fin del recurso, es decir, la concesión de un amparo que sólo ordene la corrección de errores en la aplicación de la ley o la Constitución pero que no resulte en la adecuada reparación a los derechos fundamentales de una persona que ~~contraviene~~ el objeto y fin del juicio de amparo.

Por último, esta Comisión desea manifestar que esta Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente vinculada a ejercer un *control de convencionalidad*, que implica acatar y aplicar no sólo las disposiciones establecidas en dicha Convención, sino también las interpretaciones que de la misma, ha establecido la Corte Interamericana en los casos litigados contra el Estado mexicano.

En consecuencia, y debido a que el otorgamiento de un amparo para efectos no sólo contraviene el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, sino que también resulta incompatible con los estándares establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, en tanto convierte al juicio de amparo en un recurso ilusorio, es encargo de esta Suprema Corte de Justicia garantizar la mayor protección de la persona mediante el otorgamiento del amparo en el sentido más amplio posible.

⁴³ Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. Colombia*. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosas. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C. No. 134, Párr. 106

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL

A continuación, se procederá a realizar un análisis relacionado con elementos fundamentales que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tomar en consideración al momento de analizar las siguientes cuestiones de constitucionalidad que tuvieron como consecuencia la vulneración de los derechos de la parte quejosa.

IV.1. Valoración de Prueba Ilícita

En el presente caso, la valoración de la prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos constituye un elemento fundamental en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de última instancia dentro del Estado. En este sentido, una Corte Suprema desarrolla, entre otras, la función fundamental de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de carácter inferior, características que pueden ser extendidas a toda Corte Suprema.⁴⁴

La Suprema Corte es el órgano jurisdiccional supremo garante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, debe asegurar el máximo respeto posible a los derechos de toda persona procesada pues *«si se quiere una justicia eficiente, coherente, confiable y racionalmente orientada hacia el ordenado desarrollo del derecho, entonces, debe configurarse un modelo de corte suprema capaz de tender hacia estos valores y de realizar estas finalidades»*⁴⁵.

En tal entendido, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona sólo puede garantizarse en el marco del debido proceso legal. Dentro de dicho marco se ubica el derecho a la prueba que constituye una de las garantías fundamentales de toda persona pues forma parte esencial del derecho de acción y defensa, sin ella dentro de un proceso, los derechos humanos carecerían de sentido al no permitir a las partes acreditar por ningún medio disponible las

⁴⁴ Michelle Taruffo, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 205, disponible en <http://etrujil.files.wordpress.com/2012/01/a-prueba-michelle-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁵ Ibid, p. 225

aseveraciones fácticas que son el fundamento de sus pretensiones y defensas.⁴⁶ Así, debe considerarse que el derecho a la prueba abarca tanto el derecho de toda parte para ofrecer la prueba relevante que esté en su posesión como el derecho a que toda prueba sea debidamente considerada por el tribunal.⁴⁷

Ahora bien, el primer estándar de valoración de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, que traza los parámetros necesarios para que «la actividad probatoria respete cabalmente los derechos fundamentales, exigencia indispensable para aspirar a un Estado democrático de derecho»⁴⁸. Desde luego, en este punto hablamos del concepto de constitución en sentido amplio, reconocido por el artículo 1º, específicamente a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, de 2011.

En la Constitución se encuentra el derecho a probar y las directrices para determinar cuándo resulta necesaria la exclusión de medios de prueba que atentan contra los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, deban ser anulados o excluidos.⁴⁹ Por lo tanto, la prueba ilícita, al haberse obtenido en transgresión a diversos derechos fundamentales, conlleva su necesaria inutilización procesal. Es decir, la prohibición de su valoración en juicio por el tribunal sentenciador.⁵⁰

Desde esta perspectiva, este tribunal constitucional tiene el trabajo de analizar las pruebas que integran el presente caso, para advertir, en su caso, aquellas que fueron obtenidas violando derechos humanos y, bajo la lógica anteriormente expuesta. En caso de que la Primera Sala de este Tribunal Constitucional advierta una circunstancia como la relatada anteriormente, tiene la responsabilidad de dejar sin efectos toda aquella prueba que haya sido obtenida en el marco de violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, todos los sujetos del ordenamiento jurídico están obligados a respetar los derechos fundamentales de cualquier persona en todas sus actuaciones,

⁴⁶ Michelle Taruffo, La prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 79, disponible en <http://etrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Constancio Carrasco Daza, La prueba ilícita en material electoral. Reglas de exclusión diseñadas desde la Constitución, México, UNAM-IJ, p. 135

⁴⁹ Idem

⁵⁰ Manuel Miranda Estrampes, La Prueba Ilícita. La regla de exclusión probatoria y sus excepciones, Barcelona, Revista Catalana de Seguridad Pública, p. 138

incluyendo la búsqueda y ofrecimiento de pruebas.⁵¹ Ahora bien, el artículo 20 constitucional, apartado A fracción IX expresamente dispone que «Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula».

De lo anterior, se desprende un mandato constitucional directo, que como tal, debe ser aplicado por la Primera Sala de la SCJN. Ciertamente es que originariamente la admisión de la prueba compete a los jueces de instrucción; sin embargo, cuando un tribunal de amparo se pronuncia sobre el hecho de la existencia de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como aquellas reglas que integran el debido proceso legal, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros, dicha competencia originaria debe actuar de la manera más amplia bajo las directrices propias de un tribunal constitucional garantista.

Esto no significa que el tribunal de amparo pueda sustituir en cualquier caso la interpretación de los hechos que ha realizado el tribunal ordinario, sino que únicamente tiene el deber de hacerlo en los casos que el material probatorio para imputar responsabilidad a una persona se haya obtenido en un proceso desarrollado a través de violaciones a los derechos humanos, circunstancia en la cual, como se ha relatado con antelación, nada impide al mismo a resolver las cuestiones de fondo para asegurar la máxima protección de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que exigir la nulidad de una prueba ilícita constituye un derecho que se construye con base en la condición de que una sentencia debe ser la conclusión de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para que sea válida (art. 14 CPEUM), la obligación del juzgador de conducirse con imparcialidad (art. 17 CPEUM) y el derecho a una defensa adecuada (art. 20, B, f. VII CPEUM).⁵²

En caso de que se adviertan elementos que invaliden las pruebas de un caso, las mismas deben ser anuladas del proceso, pues es clara la transgresión de los

⁵¹ Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV de agosto de 2011, p. 226, Registro No. 161221. En adelante: Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA.

⁵² Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 10ª época, Jurisprudencia, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, Registro No. 160509. En adelante: Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO.

derechos fundamentales en este supuesto. Cuando las pruebas de cargo con las cuales se pretende imputar la responsabilidad de una persona carecen de licitud, un tribunal debe dejar sin efectos dichos medios probatorios, sin la necesidad de retornar el asunto al Tribunal Colegiado implicado. De no ser así, se pone en grave riesgo el derecho a la defensa, pues este Alto Tribunal podría transgredir el derecho a la prueba al no declarar nulos los elementos probatorios obtenidos en el marco de violaciones a los derechos humanos, con lo que este Tribunal Supremo podría estar evaluando de manera errónea las pruebas afectadas.

Reforzando lo anterior, uno de los principios rectores de nuestro sistema penal consagra que toda persona, en especial aquellas a las que se les ha imputado la comisión de algún delito, tienen derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente. Este derecho a que se presuma la inocencia se encuentra reconocido en los artículos 14 y 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La presunción de inocencia supone un estándar constitucional que necesariamente debe ser superado en el proceso mediante las pruebas para que el juzgador pueda llegar a dictar una sentencia en la que condene a una persona. Este derecho desde una perspectiva multifactorial "tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso."⁵³

Particularmente para este caso, debemos centrar la atención en dos de los tres elementos, la presunción de inocencia se compone de: la regla de trato y la regla de juicio. La regla de trato supone que el acusado no sea considerado culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra;⁵⁴ mandato aplicable tanto a las situaciones procesales como extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato y la consideración de no haber sido el autor de un delito mientras no

⁵³ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 124.

⁵⁴ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES, 19ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, XXV de enero de 2007, p. 2295, Registro No. 173507. En adelante: Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

se demuestre la culpabilidad a través de medios probatorios conformes con los principios fundamentales de todo Estado constitucional de derecho.⁵⁵ Por otro lado, la regla de juicio significa que deben respetarse los principios rectores del debido proceso y de los estándares más altos de prueba en materia penal en el devenir de todas las etapas procesales.⁵⁶

En consecuencia, como fue señalado anteriormente, este alto tribunal tiene la encomienda de garantizar que la totalidad de las pruebas que pretenden demostrar la responsabilidad penal de una persona acusada hayan sido suministradas por el órgano de acusación cumpliendo con los estándares constitucionales y legales que requiere la licitud de la misma,⁵⁷ pues toda aquella prueba viciada carece de la integridad necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y por ende debe resultar inutilizable, sin necesidad de turnar el caso al Tribunal Colegiado implicado.

En el caso en comento, es fundamental que el tribunal constitucional analice el material probatorio para advertir aquél que ha sido afectado por violaciones a los derechos humanos de la persona acusada, y que por tanto provoque la falta de fiabilidad de estos medios de prueba. Esta cuestión impacta directamente en los derechos de la persona acusada, pues toda persona tiene el derecho a que en caso de ser condenada, su condena esté basada en evidencia sólida.

En otras palabras, la cuestión en el presente caso en lo referente a la prueba no solamente estriba en dilucidar si las pruebas son o no suficientes para condenar a la recurrente sino también en el hecho de que las violaciones previas a la valoración de las pruebas puedan tornar éstas nulas, y en consecuencia, inutilizables. En particular, las pruebas impugnadas por la parte quejosa fueron:⁵⁸

| PRUEBA | FECHA | COMENTARIOS |
|---|--|---|
| Victima Testigo 1 Hombre que fue rescatado en el el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: | Durante la primera declaración este testigo identificó a como participe en su secuestro y quien le había dado de comer durante su cautiverio. Dichas |

⁵⁵ Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, XXY de mayo de 2007, p. 1186, Registro No. 172433. En adelante: Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁶ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁷ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁸ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 140.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 de marzo de 2006 • 30 de mayo de 2006 | manifestaciones fueron reiteradas en diversas ampliaciones de la declaración inicial. |
| <p>Victima Testigo 2</p> <p>Mujer madre de testigo víctima 3 que fue rescatada en el día del montaje televisivo.</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de diciembre de 2005 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 de febrero de 2006 • 15 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Respecto a las declaraciones y ampliaciones rendidas por este testigo es importante señalar que durante la primera declaración la testigo no identificó a como una de las personas que participaron en su secuestro, sino que fue hasta 3 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo que la testigo afirmó reconocer la voz de la inculpada. |
| <p>Victima Testigo 3</p> <p>Hijo menor de edad de víctima testigo 2 que fue rescatado en el día del montaje televisivo</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de febrero de 2006 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Durante la primera declaración, el menor no reconoció ni la voz ni el físico de y narró que quien le había acoso sangre había sido un hombre identificado como. No fue sino hasta después de la publicación de los videos y de pláticas con su madre que el menor de edad modificó sus declaraciones señalando el reconocimiento de una mujer con acento raro y piel |
| <p>Testigo 4</p> <p>Mujer que comparece días después de exhibidos los videos señalando que reconoce a como la mujer que acechaba en el mercado a Víctima testigo 2</p> | <p>Declaraciones ministeriales de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 de febrero de 2006 • 1 de marzo de 2006 | | En relación con esta testimonial vale la pena señalar que la mujer acudió voluntariamente a rendir su declaración 5 días después de que las autoridades reconocieran la existencia de un montaje televisivo. Nunca participó en el momento en que fue detenida. |
| <p>Parte Informativo</p> <p>Parte Informativo</p> | <p>Documentos de fecha 9 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006.</p> | | Las propias autoridades reconocieron que habían existido errores en las fechas y horas de la detención de |

En caso de descartar el material probatorio, y si el tribunal constitucional advierte que el órgano de acusación carece de elementos para superar el estándar que significa la presunción de inocencia, debe actuar de manera garantista, resolviendo el fondo de la cuestión. Por tanto, los derechos que protegen al acusado (presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e imparcialidad del juzgador) tienen que prevalecer frente a las violaciones cometidas por la autoridad en la construcción de su acusación. Es necesario enfatizar que la evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales y bajo los lineamientos que establece la Constitución debe ser el sustento de cualquier acusación que tenga por finalidad la restricción a los derechos y libertades de toda persona.

En el caso motivo del presente *Amicus Curiae*, es fundamental que el tribunal constitucional analice si de la lectura del material probatorio del caso, es posible advertir vicios y violaciones a los derechos humanos de la hoy acusada (tales como el testimonio de personas que fueron parte de una escenificación ajena a la realidad y que pudiesen haber contaminado irremediablemente tales pruebas) a la luz de los lineamientos establecidos en la Constitución y diversos tratados internacionales.

Por todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, tiene en sus manos el resarcimiento de las graves violaciones a los derechos humanos a través del cumplimiento del mandato directo de la Constitución de declarar nula y por ende, inutilizable toda prueba obtenida en violación a los derechos humanos.

Tal como en casos anteriores de violaciones que producen una afectación total al derecho de defensa y al debido proceso de la persona inculpada,⁵⁹ y una vez adoptada la postura garantista del Amparo Directo en Revisión referida en el primer apartado de este documento, el tribunal constitucional tiene la responsabilidad de resolver en consecuencia.

IV. 2. El derecho a la notificación consular

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante "Convención de Viena")⁶⁰ en su artículo 36 impone a los Estados diversas obligaciones en caso de arrestar, detener o mantener en prisión preventiva a un extranjero. La principal de estas obligaciones es que se notifique a la representación consular de donde sea nacional el detenido o la detenida.

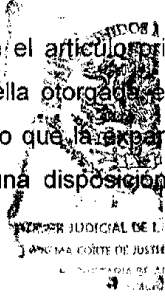
Además, tal instrumento señala que deberá informarse al detenido sin dilación que tiene derecho a que se le comunique a su consulado de su detención, y que pueden asistirlo legalmente. La notificación realizada debe hacerse sin demora, y

⁵⁹ Amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar.

⁶⁰ Ratificado por el Estado mexicano el 19 de marzo de 1967

luego de ello existe la obligación de permitir al funcionario consular comunicarse libremente con su nacional.

Si bien, la Convención de Viena no es un tratado de derechos humanos, ya que su función principal de acuerdo a su preámbulo "no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos"⁶¹. Lo cierto es que, el contenido del artículo 36 si consagra una norma de derechos humanos, ya que como lo ha considerado la Corte Interamericana, la titularidad del derecho a la notificación consular corresponde al individuo.⁶²

Lo anterior rompe con el esquema tradicional del Derecho Internacional consistente en derechos y obligaciones recíprocas entre Estados⁶³. Acorde con ello, la Corte Internacional de Justicia en el caso  refirió que el contenido del artículo 36 de la Convención de Viena concede derechos a los individuos⁶⁴.

En estas circunstancias, resultan de especial relevancia con el artículo primero constitucional, cuya redacción no limita la protección a aquella otorgada en los tratados que tradicionalmente son de derechos humanos, sino que la expande a todos los tratados que sin importar su materia tengan alguna disposición que reconozca derechos humanos.

Por lo tanto, el derecho a la notificación consular es un derecho humano del que gozan todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, ya que está contenido en un tratado del que es parte el Estado.

Contenido del derecho a la notificación consular.

Es necesario identificar los diferentes momentos a que hace referencia el artículo

⁶¹ Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - adoptada el 24 de abril de 1963, entró en vigor el 19 de marzo de 1967 y fue ratificada por México el 16 de junio de 1965. Preámbulo, párrafo 4. Párr. 80.

⁶² Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶⁴ International Court of Justice, *Case (Germany v. United States of America)*, I.C.J. Reports 2001, Judgment of 27 June 2001, párr. 77.

36 de la Convención de Viena con la finalidad de especificar los derechos del individuo. En primer lugar, no importa cuál sea la situación en que se encuentre una persona, la representación consular del Estado que envía (Estado del cual es nacional la persona privada de libertad) tiene el derecho de comunicarse con su nacional en cualquier momento.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) al establecer que de analizar el artículo 36.1.a de la Convención de Viena, a la luz del artículo 5, incisos a, e, i, de la misma Convención se desprende el derecho a la comunicación consular.⁶⁵ Para la Corte IDH el derecho a la comunicación consular tiene la siguiente finalidad:

[...] la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia⁶⁶.

El tercer derecho, y de especial importancia en el presente caso, es la notificación consular que se desprende de los incisos b) y c) del artículo 36 de la Convención de Viena y consiste en avisar al Estado que envía que un nacional fue detenido, arrestado o puesto en prisión preventiva. La realización de este derecho exige el cumplimiento de tres prerrogativas a favor del individuo⁶⁷:

- a) A que se le notifiquen sus derechos, que son la notificación consular y la asistencia consular. Esta obligación ha sido interpretada como parte de los derechos que deben hacerse conocer al inculcado en caso de ser detenido conforme al artículo 7.4 de la Convención Americana⁶⁸.
- b) El acceso efectivo a la notificación consular.

65 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 79.

66 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 80.

67 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 153.

68 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

c) El derecho a la asistencia consular. Al respecto, este derecho puede ser renunciado por el interesado.

El derecho a la notificación consular protege diferentes bienes jurídicos, ya que garantiza el acceso a la justicia. Es fundamental que ante las condiciones de desigualdad a las que se enfrenta un extranjero y el desconocimiento del sistema jurídico del país, se le permita a la representación consular de su Estado prestarle auxilio a fin de eliminar esas diferencias y tener un trato justo y equitativo ante los Tribunales en los que se encuentre.

Al respecto la Corte Interamericana ha resaltado que «el cónsul puede asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de libertad»⁶⁹

Resulta relevante aclarar que el derecho a la libertad personal no es un derecho que únicamente se refiera a la libertad física, por lo que la notificación consular también forma parte del derecho a la libertad personal, lo anterior queda asentado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que versa sobre la necesidad de dar a conocer los derechos que tienen las y los detenidos, lo que constituye una prevención de conductas ilegales o arbitrarias⁷⁰.

En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que la obligación de informar al detenido de sus derechos sin demora no recae en que el extranjero lo solicite; así como tampoco se cumple si las autoridades del Estado que envía se enteran de la detención por otros medios⁷¹. Esta comunicación entre el detenido y la representación consular deberá hacerse sin demora; lo cual es

69 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

70 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 154; Corte IDH. Caso de los Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr.

92.

⁷¹ International Court of Justice, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, párr. 95.

congruente con el derecho de comunicarse con una tercera persona para que se le brinde apoyo.

Aunado a todo lo anterior, el derecho a la notificación consular debe ser útil, lo que a criterio de la Comisión de Derecho Internacional, quien preparó el texto final de la Convención de Viena, significa que no debe nulificarse por las leyes o regulación del Estado que recibe⁷². Este efecto útil debe traducirse en que la notificación consular, debe hacerse desde el mismo momento de la detención, y hasta antes de que el detenido rinda su primera declaración⁷³.

Por todo lo anterior, el acceso efectivo al derecho a la notificación consular constituye uno de los pilares del debido proceso, ya que de acuerdo al artículo 8.2.d de la Convención Americana toda persona tiene derecho a "ser asistida por un defensor". Es claro que la inobservancia u obstrucción del detenido para ejercer o informarse de sus derechos dentro de un proceso legal afecta gravemente sus garantías judiciales y en consecuencia es una violación a sus derechos humanos.⁷⁴

En el caso de estudio, es necesario tomar en consideración todas las posibles afectaciones que puedan producirse a la quejosa, como consecuencia de la afectación a tales derechos.

Independientemente del momento de la detención, las autoridades mexicanas tienen la obligación de comunicarse por todos los medios disponibles y sin dilación con el consulado antes de tomar la primera declaración. En el caso concreto, la parte quejosa se niega a reconocer su primera declaración --del 9 de diciembre de 2005-- pues aunque reconoce la firma que plasmó en esa declaración, sostiene

⁷² International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission*, 1961, vol. II, pág. 113.

⁷³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 106; así como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución /08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Principio V.

⁷⁴ Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 157; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 129.

que fue presionada y forzada a firmar y a poner su huella, además de que no le permitieron leer su propia declaración, afectaciones derivadas de la omisión del Ministerio Público de obtener esta primera declaración de sin que ésta hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular⁷⁵

Es evidente que la falta de este requisito hace ilusoria la protección otorgada por la Convención de Viena. En este sentido, es fundamental reconocer que en virtud de las consideraciones anteriormente planteadas, el derecho a la notificación consular debe ser considerado como una obligación de resultado, y no de medio o comportamiento, por lo que las autoridades, tienen la obligación de asegurar el pleno cumplimiento del mismo en todo proceso penal en donde esté involucrada una persona que sea nacional de un Estado distinto al de la nacionalidad de dicha persona.

Por tanto, es necesario tener en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de reparaciones al debido proceso, la cuál ha determinado que todos los actos procesales guardan una estrecha relación cronológica, lógica y teleológica, estos actos están encaminados a la solución de una controversia por medio de una sentencia; sin embargo la validez de los actos procesales afecta la validez misma de la sentencia.⁷⁶ Es por ello que *"si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá"*⁷⁷

Las graves violaciones al debido proceso legal y a la libertad personal causadas por la negación y la falta de efectividad del derecho a la notificación consular deberían ser motivos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la nulidad de un procedimiento penal en contra de una persona, ya que el carácter inmediato y la importancia de contar con la representación

⁷⁵ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:

¹ Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

⁷⁶ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 218.

⁷⁷ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 219; Corte IDH. Caso Vs. Perú, Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de agosto de 2010, considerando 14.

consular de su país de origen afectan de forma definitiva la sentencia en contra de esa persona.

Como ha quedado establecido, es de crucial importancia que la o el funcionario consular pueda comunicarse libremente con el acusado antes de la primera declaración de éste, con el objetivo de salvaguardar sus intereses. En otras palabras, este acto previene las detenciones arbitrarias.

En consecuencia, la detención y posterior declaración de una persona carece de la validez necesaria para motivar una sentencia condenatoria en su contra particularmente cuando se torna ilusoria la notificación consular y en consecuencia se vulneran tanto el debido proceso como la libertad personal.



❖
PETITORIO

Con base en todo lo expuesto, a esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respetuosamente solicitamos que:

PRIMERO: Tenga por recibido el presente escrito en calidad de *amicus curiae*

SEGUNDO: Considere los razonamientos antes expuestos a fin de garantizar la máxima protección de los derechos humanos de la persona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

OFICINA DE CERTIFICACIÓN
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

DR.

Recibido de interesado
con (4) copias del presente.

c.c.p.: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para su conocimiento.
Ministro José Ramón Cossío Díaz. Para su conocimiento
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para su conocimiento
Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Para su conocimiento

LGP/MJM/R/S/gbs



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011

QUEJOSA:

ASUNTO: AMICUS CURIAE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA LARREA

SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)¹, comparezco ante esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión.

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIAS DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | |
| | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | 24 |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | |
| | |
| V. PETITORIO | 30 |



JUDICIAL
A CORTE
#CER
#CER

I. JUSTIFICACIÓN

El *amicus curiae* (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En nuestro sistema jurídico existen precedentes sobre la recepción y admisión de escritos de *amicus curiae* por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal. Asimismo, diversos tribunales internacionales reconocen esta figura jurídica como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares relevantes para la resolución de un caso, entre ellos se encuentra la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA LA EX YUGOSLAVIA y RUANDA, así como por la CORTE ESPECIAL PARA SIERRA LEONA.

En tal virtud, en nuestra actuación como *Amicus Curiae* se ofrecerán argumentos con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para su inminente fallo en relación con el caso al rubro citado.

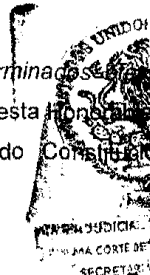
Por último, se reitera que esta actuación tiene como interés la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, cuya labor permanente nos corresponde a todos y todas.

II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE

El principal interés de esta representación es mostrar a las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución del caso en estudio conlleva la necesidad de analizar los siguientes aspectos relacionados con la necesidad de asegurar que el juicio de amparo posibilite, en caso de advertir violaciones a los derechos humanos, la plena protección de éstos, asegurando la mayor protección de la persona, y en contrapartida, la falta de efectividad de una

sentencia dictada *sólo para determinados efectos* en el marco del juicio de amparo directo en revisión. En específico, se sostiene que:

- El otorgamiento de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* contraviene la naturaleza del juicio de amparo en tanto reduce los alcances de un recurso concebido para la protección de derechos humanos a la salvaguarda normativa del orden Constitucional.
- La concesión del amparo *sólo para determinados efectos* podría atentar contra la teleología e impedir la máxima realización del recurso, puesto que únicamente atendería a enmendar violaciones procesales sin ordenar la total reparación de los derechos violentados.
- La sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide a la quejosa el acceso a un recurso efectivo para reparar las violaciones a sus derechos humanos.
- La concesión de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* es contraria a la función jurisdiccional que las y los Ministros de esta Honorable Corte deben desempeñar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
- En caso de que el tribunal constitucional advierta violaciones a los derechos humanos, debe otorgar la mayor protección constitucional posible, resolviendo el fondo de la cuestión, más allá de las formalidades propias del amparo *sólo para determinados efectos*.



❖

III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Los debates planteados en medios de comunicación especializados, en foros de la sociedad civil, así como las discusiones suscitadas en el seno de este Máximo Tribunal en torno al presente caso, evidencian como uno de los principales temas para la resolución del presente asunto, la determinación de los alcances de la posible sentencia que

conceda el amparo a partir de la naturaleza de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa. Es decir, se ha identificado que el alcance de una posible sentencia que conceda el amparo está sujeto a la determinación de si las violaciones que se alegan son de carácter procedimental o sustancial. Así, en un esquema tradicional de cuño formalista, cuando existen violaciones de naturaleza procesal, el amparo se concedería *sólo para efectos* de subsanar la incorrecta aplicación e interpretación de la norma, mientras que por violaciones de naturaleza sustancial la sentencia se concedería de manera plena para subsanar todas las violaciones a derechos humanos.

En el caso concreto, resulta relevante guardar las precauciones necesarias para no reducir el análisis del asunto a la mera comprobación de violaciones de carácter procedimental que deriven en la concesión de un amparo *sólo para efectos* de subsanar los errores de la autoridad. Esta Comisión sostiene que la sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* limita los alcances del recurso e impide su realización como máximo instrumento de protección de los derechos fundamentales. Además, contraviene los estándares internacionales relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso adecuado y efectivo para subsanar violaciones a derechos humanos, puesto que no garantiza una reparación integral de los derechos que se alegan violados. En este contexto, se presentan los argumentos que sostienen que la figura del *amparo para efectos* no debe ser considerada por las y los Ministros de este Honorable Tribunal Constitucional al momento de dictar sentencia del caso en estudio, y que en caso de advertir violaciones a los derechos humanos de la hoy quejosa, debe concederla *en su* más amplia protección constitucional:

III.1 EL AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO

En primer lugar, y para sostener que la concesión del amparo *para determinados efectos* es contraria a la teleología del juicio de amparo, es necesario exponer de manera breve la naturaleza jurídica del recurso en conocimiento de este Honorable Tribunal.

El amparo directo es el medio de impugnación que tiene por objeto revisar las resoluciones de los Tribunales del Estado para determinar si las mismas han sido

dictadas conforme a derecho o si tienen vicios que impliquen contravenciones a algún mandato constitucional.²

Desde los primeros momentos de su configuración, el amparo directo se caracterizó por la enérgica oposición de los constituyentes respecto a su establecimiento, ya que consideraban que éste nulificaría la administración de justicia local y comprometería la soberanía de los Estados, así como el prestigio de sus órganos judiciales.³ Por tal motivo, las personas que participaron en los debates, decidieron que, a fin de garantizar que no cualquier sentencia emitida por los órganos judiciales locales fuese revisada por tribunales federales, resultaba necesario limitar el objeto del juicio de amparo directo.⁴

Esta limitación, consistió en que los tribunales federales conocerían de las sentencias dictadas en la justicia local, sólo cuando los tribunales locales en sentencias definitivas, hubieren incurrido en violaciones a las leyes del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y que trascendieran al resultado del fallo; o cuando éstos hubiesen cometido violaciones en las sentencias o laudos definitivos.⁵ En otras palabras, establecieron que — de manera similar al *recurso de casación* — el amparo directo cumpliría con una doble función, a saber: 1) permitiría realizar impugnaciones de fondo sobre violaciones a los derechos de las personas;⁶ y 2) realizar una función de control sobre la aplicación incorrecta de una norma procesal.⁷

En este orden de ideas, es posible afirmar que la finalidad y el objeto del juicio de amparo directo es condicionar la validez y sujetar el contenido de las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, al cumplimiento del orden jurídico constitucional, en particular al respeto de los derechos humanos.⁸ En tal sentido, la propia Ley de amparo establece que la sentencia que conceda el amparo «tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al

² CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

³ Exposición de motivos, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la constitución política de los estados unidos mexicanos*, Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta No. 352., México, D.F., a 19 de marzo de 2009. pp.6.

⁴ Ibid.

⁵ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

⁶ Idem.

⁷ León Dorantes, Romeo. *El Juicio de amparo*. Tercera Edición. Editorial José Cacia. México, 1957.

⁸ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 180 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija»⁹

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que el amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, cuando existen impugnaciones ya sea procesales o materiales que requieran de interpretación constitucional, la facultad que se otorgó al Poder Judicial Federal para conocer sobre sentencias definitivas es restringida, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer al respecto.¹⁰

Cuando de la resolución dictada en amparo directo se pudiese advertir que existió por parte del Tribunal Colegiado, ya sea, la interpretación directa de un precepto de la Constitución; que subyace un problema de constitucionalidad planteado desde la demanda inicial; o bien, que el propio Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre alguno de estos dos temas, se cuenta con la posibilidad de interponer el denominado amparo directo en

revisión.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
SECRETARÍA DE JUSTICIA
OFICINA DEL PROCURADOR GENERAL

Este amparo directo en revisión, del cual sólo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX de nuestra Constitución¹², así como en el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo¹³ y 21, fracción III, inciso a), de

⁹ Artículo 80 Ley de Amparo.

¹⁰ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 2009, Sentencia del día 2 de mayo de 2010. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión 2007. Quejosos. Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

¹³ Ley de Amparo. Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...)V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁴ como un medio de impugnación excepcional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo.¹⁵ De manera adicional, este recurso es considerado como un medio de impugnación excepcional, debido a que, por regla general, las resoluciones en juicios de amparo directo emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten ningún recurso, a menos que, como se ha señalado, se presenten las excepciones ya señaladas.¹⁶

Como es posible apreciar, los requisitos de procedencia del recurso de revisión persiguen como principal finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete definitivo de la Constitución, sea en última instancia quien determine si una norma se ajusta a la misma, o bien, quien fije el alcance y sentido jurídico de las disposiciones constitucionales.¹⁷

De esta manera, resulta evidente que el objeto con el que se promueve un recurso de revisión en el amparo directo estribaría en la búsqueda de obtener una sentencia que revoque o modifique la resolución recurrida, y que por tanto, los únicos efectos que debería llegar a producir, en caso de ser favorable para la parte quejosa, sería conceder la protección de la Justicia de la Unión en sentido pleno, tal y como lo establece la propia Ley de Amparo al mencionar la finalidad y efectos que debería tener una sentencia de amparo.

No obstante, a través de la práctica, el Poder Judicial desarrolló una fórmula ampliamente aceptada pero con un grave cuestionamiento estructural, que es el otorgamiento de esta protección sólo para determinados efectos. De esta manera, y dependiendo, si el amparo directo en revisión versa sobre impugnaciones de fondo o procesales, la sentencia dictada, bajo este esquema planteado, podría llegar a los siguientes resultados:

¹⁴ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)

¹⁵ AZUELA GÜITRON, Mariano. "Revisión en Amparo Directo". Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2009.

¹⁶ SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión. /2007. Quejosos Esteban Oyervides, Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹⁷ REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, febrero de 1996. -Tesis: 2a./J. 3/96. Página: 218

- 1) Si del análisis se desprende que existe una violación a un derecho fundamental, cuya trasgresión afectó de manera grave al quejoso, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión se tendría que conceder de **manera plena**.¹⁸ En este sentido, y tratándose de procesos penales, las violaciones graves a los derechos humanos del procesado, en especial, a la defensa adecuada y al debido proceso, llegaría a tener por efectos la inmediata libertad de la persona procesada.¹⁹
- 2) Sin embargo, cuando el análisis y la resolución versaran sobre impugnaciones procesales, la concesión del amparo se otorgaría solo **para efectos**, es decir, su alcance será únicamente decretar la nulidad de lo actuado y reenviar a la autoridad responsable para la reposición del procedimiento. Lo anterior, debido a que, en este esquema, se considera que un Tribunal Colegiado de Circuito — autoridad en principio competente para conocer del juicio de amparo directo— no tiene jurisdicción plena respecto a la controversia, por lo que la sentencia que otorgue la protección federal sería dictada para efectos de invalidar lo actuado por la autoridad responsable y para que en su caso, ésta dicte una nueva resolución en que se repare el error cometido.²⁰

El presente *amicus curiae*, aclarará precisamente cómo uno de los alcances que puede llegar a producir la sentencia dictada en el amparo directo en revisión —conceder el amparo *para efectos*— además de resultar contraria a la naturaleza propia del recurso de amparo y a los estándares internacionales de los recursos judiciales, no tiene cabida en las soluciones posibles que las y los juzgadores pueden adoptar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

III.2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

A continuación, y a efectos de exponer cómo el amparo para efectos no debería tener cabida en la conciencia de las y los juzgadores —en especial de un Tribunal

¹⁸ Algunos antecedentes sobre asuntos en que esta Primera Sala consideró que los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado son: amparo de amparo en revisión 3/2008, amparo directo en revisión 1/2009, amparo directo 1/2010, amparo directo 1/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo en revisión 3/2010, amparo en revisión 1/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo en revisión 3/2011, amparo en revisión 3/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011 y amparo directo en revisión 2/2011.

¹⁹ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE: I. Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

²⁰ CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

Constitucional—, es necesario referirnos al papel que desempeñan dentro del marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En el modelo tradicional del Estado de Derecho, el papel de las y los jueces como órganos sujetos a la primacía de la ley se limitaba a la realización de una función técnica de aplicación de la ley, sin importar cual hubiese sido su contenido.²¹ No obstante, como consecuencia de llamada *segunda revolución en la historia jurídica* —que transformó al Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derecho— esta idea evolucionó. Dicha «revolución» tuvo como principal característica el establecimiento de constituciones rígidas que permitieron la integración del Estado de Derecho a través de la sujeción de la ley por parte de todos los poderes al Derecho y a la Constitución.²²

Sin embargo, esta sujeción —a diferencia del modelo tradicional de Estado de Derecho—, pasó a fundarse no en las formas y procedimientos de creación de leyes, sino en el contenido de las mismas. Es decir, bajo el surgimiento de este nuevo modelo del constitucionalismo o garantismo, la sujeción a la ley se modificó siendo ahora una sujeción no a la letra de la misma (formal), sino que debe atenderse a que la ley sea válida conforme a la Constitución y tratados. (material).²³

Desde esta perspectiva, la validez se concibe ya no como un concepto asociado a la mera existencia formal de una norma, sino como una sujeta al contenido de la misma, que debe estar ligado a la coherencia de sus significados con la Constitución, donde además la valoración de esta coherencia le corresponderá al propio juzgador.²⁴ De esta manera, la interpretación judicial se convierte precisamente en un juicio sobre la ley misma, ya que le corresponde a las y los juzgadores la responsabilidad de elegir cuáles son los significados válidos de la ley, esto es, significados compatibles con las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales.²⁵

21 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

22 FERRAJOLI, Luigi. *Sobre los Derechos Fundamentales*. Revista Cuestiones Constitucionales. Número 15. Diciembre, 2006. P. 114.

23 OROZCO Hernández, Jesus J. *La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* en "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2003, número 18. P. 45.

24 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 27.

25 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 26.

Así pues, el constitucionalismo se erige como un sistema de vínculos sustanciales, prohibiciones y obligaciones impuestas precisamente por los principios inscritos, por lo general, en la primera parte de las Constituciones,²⁶ donde las y los juzgadores no pueden sujetarse a la ley de manera incondicionada y acrítica, sino que como consecuencia de la sujeción *material*, tienen la obligación de interpretar en sentido constitucional todas aquellas leyes que consideren inválidas.²⁷

Aunado a lo anterior, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho reconoce los principios como un componente esencial del orden jurídico e incorpora a los derechos fundamentales como parte de los mismos, cambiando así la relación entre el juez y la ley, pues mediante la sujeción a la Constitución se le asigna a la jurisdicción una función de garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad por parte del poder público.²⁸

En este sentido, es evidente que la función jurisdiccional, si bien puede estar relacionada con aspectos de legalidad, en ningún momento puede desprenderse de su principal objeto, es decir, garantizar los derechos fundamentales como contenido *material* de las normas constitucionales. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho los derechos fundamentales se erigen como normas "sustanciales" que determinan el contenido y los límites del resto de normas y decisiones que integran un Estado; constituyen lo que Ferrajoli llama la *esfera de lo indecible*.²⁹

Bajo este orden de ideas, y a la luz de una visión de carácter garantista, se debe tener en cuenta que la interpretación de los preceptos constitucionales se desarrollará en el marco del juicio de amparo activado para la salvaguarda de los derechos de la persona, y no así para la protección exclusivamente normativa del orden constitucional. Es decir, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a establecer criterios unitarios sobre la interpretación de la Constitución, en su carácter de

26 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

27 OROZCO Hernández, Jesús J. Ob cit. P. 49.

28 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. P. 25.

29 FERRAJOLI, Luigi. *Teoría de la Democracia. Dos Perspectivas comparadas*. Primera Edición. México, 2001. P.16.

Tribunal Constitucional también tiene como principal función la de ser garante de los derechos las personas, especialmente, en el marco del juicio de amparo.³⁰

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no existe duda respecto a que la procedencia del recurso de revisión se determinó en atención a que la defensa de la quejosa cuestionó no sólo la interpretación del sentido y alcance que el Tribunal Colegiado realizó de los siguientes preceptos constitucionales, sino también las violaciones a derechos humanos que de ellas se derivaron:

| Rubro | Precepto Constitucional | Determinación del Tribunal Colegiado |
|--|---|---|
| Principio de buena fe ministerial | Artículo 21 constitucional | El Tribunal Colegiado consideró que el montaje televisivo no violó esta garantía, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención. |
| Significado del término "sin demora" para efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público | Artículo 16 constitucional | El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término "inmediatamente" o "sin demora", dicha situación debe evaluarse en cada caso. |
| Violación al derecho de notificación consular | Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares | La afectación a este precepto vició el procedimiento, el Tribunal desentendió el principio de supremacía constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no esté obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asesorado por su Consulado para tomarle su declaración. |
| Principio de Congruencia y Exhaustividad | Artículo 17 | En la valoración de la prueba no se tomaron en consideración aquellas que aportó la recurrente en las primeras instancias. |
| Principio de presunción de inocencia | Artículo 20 | Según el Tribunal Colegiado, no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que esta exposición ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible impedir que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. |

Fuente: elaboración propia.

Por tales motivos, esta Comisión solicita a las y los Ministros de esta Suprema Corte que el análisis de constitucionalidad no se limite a la protección del orden constitucional, sino que se realice con la finalidad de constatar las posibles afectaciones a los derechos humanos, en lo general, y al debido proceso en lo particular, para que en caso de determine la vulneración de derechos se otorgue la más amplia protección constitucional, rompiendo la sujeción formalista del amparo para efectos, el cual, a juicio de esta institución, debería ser eliminado de la conciencia de las y los juzgadores democráticos.

³⁰ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

En particular, resulta esencial que las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan en cuenta que la resolución del amparo para efectos no sólo es contraria a la naturaleza propia del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, sino también a los estándares establecidos en términos del artículo 25 de la Convención Americana relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso rápido, adecuado y efectivo sencillo para la protección de sus derechos.

III.3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO

El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades del Estado, incluyendo a esta Corte Suprema, a interpretar todas las normas relativas a los derechos humanos de conformidad no sólo con la Constitución, sino también de conformidad con los tratados internacionales de la materia y de los que México sea Estado Parte, en el sentido de otorgar en todo tiempo la protección más amplia al individuo. De igual manera, el párrafo primero de dicho artículo incorpora a nuestro máximo ordenamiento todas las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano.

En razón de lo anterior, y aun cuando esta Suprema Corte ha sentado algunos precedentes respecto la efectividad de los recursos, consideramos necesario recurrir a los estándares internacionales, particularmente a aquellos fijados en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a fin de garantizar la protección más amplia para la persona.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³¹, consagra el derecho de todas las personas a un recurso rápido, sencillo y efectivo:

Artículo 25. Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

³¹ Ratificada por México el 24 de marzo de 1981

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH), la noción de **efectividad del recurso** presenta dos aspectos: uno de carácter *normativo*, relacionado con la idoneidad del recurso y su capacidad para dar respuesta a la violación de derechos humanos; y el segundo de carácter *empírico*, relacionado con las condiciones que hacen posible que el recurso pueda cumplir con su objetivo.³²

En específico, la CoiDH se ha pronunciado sobre estas condiciones de la siguiente manera:

- a) **Adecuados:** implica que el recurso sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida.³³ El análisis de este requisito debe situarse en el plano del diseño normativo del recurso.
- b) **Efectivos:** un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.³⁴ La condición de **efectividad**, se correlaciona necesariamente con la rapidez y sencillez del recurso,³⁵ condiciones que deben de existir de manera copulativa en todos los recursos.³⁶

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso **vs. México**, para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan

³² CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.LV/II.129. El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Septiembre, 2007.

³³ Corte IDH. Caso **vs. Honduras**. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.

³⁴ Corte IDH. Caso **vs. México**. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr.118.

³⁵ COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Año 2006, Número 5. Página 35.

³⁶ MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2003. P. 361

formalmente, sino que es preciso que tengan **efectividad** en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. Esta obligación implica que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.³⁷

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la interpretación del artículo 25 en relación con el artículo 8 de la Convención Americana deriva el derecho de acceso a la justicia que impone a los Estados la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), mismos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1).³⁸

Así las cosas, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano es constante al señalar que la garantía del acceso a la justicia implica suministrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos los recursos necesarios para alegar la afectación de sus derechos;³⁹ además, ha sido enfática al establecer que no basta con la sola existencia formal de recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.⁴⁰

En otras palabras, no resulta suficiente que un recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que es necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que tales recursos sean: 1) verdaderamente efectivos, para establecer si ha habido o no una violación y; 2) que puedan proporcionar una reparación.⁴¹

Ahora bien, en el caso concreto, las y los Ministros de esta Suprema Corte deben considerar que la *sentencia dictada para efectos* no cumpliría con los estándares anteriormente señalados, en tanto torna en ilusorio recurso de amparo directo en

³⁷ *Idem.*

³⁸ Corte IDH. Caso y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 21; Corte IDH. Caso vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2006. Serie C No 149., párr. 175.

³⁹ Corte IDH. Caso vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No 5.

⁴⁰ Corte IDH. Caso vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Junio de 2005. Serie C No 129. Párr. 93.

⁴¹ Corte IDH. Caso vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 129. Párr. 177.

revisión como instrumento de protección de derechos humanos.

Como indicamos, la **efectividad** de un recurso, implica la obligación de las autoridades de garantizar que el recurso sea realmente capaz de producir los resultados para los cuales fue creado, es decir, que pueda cumplir con su objeto.

En tal sentido, el amparo directo y el amparo directo en revisión fueron diseñados desde una perspectiva formalista propia de la época, como instrumentos capaces de producir dos resultados diferentes. Por una parte, ser concedidos sólo *para efectos* de subsanar los errores en el proceso o en un *sentido amplio de protección*, que se traduce en la total reparación de los derechos violentados por la autoridad.

El primero de estos resultados —amparo para efectos—, analizado bajo la lógica del juicio de amparo como máximo instrumento de protección de derechos humanos, convierte al amparo directo y máxime al amparo directo en revisión en recursos ilusorios para proteger la situación jurídica infringida, es decir, para proteger los derechos fundamentales del quejoso.

En lo que respecta al amparo directo en revisión, esto sucede debido a que, la concesión del amparo **para efectos**, tiene como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia, tras el análisis de una violación procesal —relacionada con aspectos de constitucionalidad— y al declarar la misma como fundada, regrese el expediente a la autoridad responsable para efectos de que la misma repare las violaciones que existieron en el proceso.

Tal situación, en realidad se traduce en la posibilidad que dentro de aquellos juicios, que por lo general llevan varios años de litigarse en primera y segunda instancia y luego ante un Tribunal Colegiado, exista otra violación procesal que varios meses después haga retornar el expediente a la Justicia Federal, provocando así que del mismo asunto deriven un número incierto de juicios de amparo; esto es lo que el Ministro Zaldívar ha llamado como: *el amparo ping pong*.

⁴²Dicha situación, por supuesto, implica que el juicio de amparo no sea, en términos del artículo 25, un recurso **rápido y sencillo** para la protección de derechos.

En este sentido, no basta con que el recurso de amparo directo en revisión tenga dentro de sus posibilidades el otorgamiento del amparo en un sentido pleno, sino que es necesario que el Tribunal, en caso de comprobar la violación a derechos humanos, realmente otorgue esta protección. De lo contrario, el propio Tribunal estaría dando pie a una cadena indefinida de juicios de amparo derivados de violaciones procesales, situación que además, retrasa, dificulta y sobrecarga la impartición de justicia en nuestro país atentando contra lo señalado en los artículos 17 y 23 de nuestra Constitución en relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo breve y en el marco de tres instancias.

De igual manera, es necesario establecer que la tarea de garantizar la **efectividad** del recurso —en términos del artículo 25 de la Convención Americana— recae en esta Suprema Corte de Justicia y se traduce en permitir la máxima realización del recurso mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en el sentido más amplio de protección.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo directo en revisión tiene como finalidad realizar un control respecto la interpretación de disposiciones constitucionales, lo cual inevitablemente se encuentra relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, toda vez que el conocimiento de este recurso se le reservó como una facultad exclusiva a la Suprema Corte para que, en su papel de Tribunal Constitucional, fuese el única que pudiese realizar un control de las normas constitucionales.

En el caso en concreto, y a juicio de esta institución de protección de los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional limitaría enormemente su papel como garante de derechos humanos si sólo se limita a realizar un análisis formal

⁴² ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Primera Edición. México, 2002.

respecto la interpretación de las normas por parte de la autoridad sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, máxime cuando la finalidad del propio recurso no es la obtención de un *control de constitucionalidad in abstracto*, sino conseguir la garantía y en su caso, la reparación, de los derechos humanos violentados por una errónea interpretación y aplicación de preceptos constitucionales.

Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que el principio del *efecto útil* (*effete utile*) conlleva la necesidad de aplicar e interpretar las disposiciones con su objeto y fin, lo cual no sólo aplica respecto a las normas sustantivas de derechos humanos, sino también en relación con normas procesales.⁴³ En tal sentido, ordenar la concesión del amparo **para efectos** implicaría también contravenir el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, en tanto no se estaría garantizando el cumplimiento del objeto y fin del recurso, es decir, la concesión de un amparo que sólo ordene la corrección de errores en la aplicación de la ley o la Constitución pero que no resulte en la adecuada reparación a los derechos fundamentales de una persona contraviene el objeto y fin del juicio de amparo.

Por último, esta Comisión desea manifestar que esta Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente vinculada a ejercer un *control de constitucionalidad*, que implica acatar y aplicar no sólo las disposiciones establecidas en dicha Convención, sino también las interpretaciones que de la misma, ha establecido la Corte Interamericana en los casos litigados contra el Estado mexicano.

En consecuencia, y debido a que el otorgamiento de un amparo para efectos no sólo contraviene el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, sino que también resulta incompatible con los estándares establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, en tanto convierte al juicio de amparo en un recurso ilusorio, es encargo de esta Suprema Corte de Justicia garantizar la mayor protección de la persona mediante el otorgamiento del amparo en el sentido más amplio posible.

⁴³ Corte IDH. Caso *vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosas*. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C. No. 134. Párr. 106

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL

A continuación, se procederá a realizar un análisis relacionado con elementos fundamentales que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tomar en consideración al momento de analizar las siguientes cuestiones de constitucionalidad que tuvieron como consecuencia la vulneración de los derechos de la parte quejosa.

IV.1. Valoración de Prueba Ilícita

En el presente caso, la valoración de la prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos constituye un elemento fundamental en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de última instancia dentro del Estado. En este sentido, una Corte Suprema desarrolla, entre otras, la función fundamental de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de carácter inferior, características que pueden ser extendidas a toda Corte Suprema.⁴⁴

La Corte, al ser el órgano jurisdiccional supremo garante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, debe asegurar el máximo respeto posible a los derechos de toda persona procesada pues *«si se quiere una justicia eficiente, coherente, confiable y racionalmente orientada hacia el ordenado desarrollo del derecho, entonces, debe configurarse un modelo de corte suprema capaz de tender hacia estos valores y de realizar estas finalidades»*⁴⁵.

En tal entendido, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona sólo puede garantizarse en el marco del debido proceso legal. Dentro de dicho marco se ubica el derecho a la prueba que constituye una de las garantías fundamentales de toda persona pues forma parte esencial del derecho de acción y defensa, sin ella dentro de un proceso, los derechos humanos carecerían de sentido al no permitir a las partes acreditar por ningún medio disponible las

⁴⁴ Michelle Taruffo, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 205, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michelle-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁵ Ibid, p. 225

aseveraciones fácticas que son el fundamento de sus pretensiones y defensas.⁴⁶ Así, debe considerarse que el derecho a la prueba abarca tanto el derecho de toda parte para ofrecer la prueba relevante que esté en su posesión como el derecho a que toda prueba sea debidamente considerada por el tribunal.⁴⁷

Ahora bien, el primer estándar de valoración de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, que traza los parámetros necesarios para que «la actividad probatoria respete cabalmente los derechos fundamentales, exigencia indispensable para aspirar a un Estado democrático de derecho»⁴⁸. Desde luego, en este punto hablamos del concepto de constitución en sentido amplio, reconocido por el artículo 1º específicamente a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, de 2011.

En la Constitución se encuentra el derecho a probar y las directrices para determinar cuándo resulta necesaria la exclusión de medios de prueba que atentan contra los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, deban ser anulados o excluidos.⁴⁹ Por lo tanto, la prueba ilícita, al haberse obtenido en transgresión a diversos derechos fundamentales, conlleva su necesaria inutilización procesal. Es decir, la prohibición de su valoración en juicio por el tribunal sentenciador.⁵⁰

Desde esta perspectiva, este tribunal constitucional tiene el trabajo de enfatizar las pruebas que integran el presente caso, para advertir, en su caso, aquellas que fueron obtenidas violando derechos humanos y, bajo la lógica ~~anteriormente~~ expuesta. En caso de que la Primera Sala de este Tribunal Constitucional advierta una circunstancia como la relatada anteriormente, tiene la responsabilidad de dejar sin efectos toda aquella prueba que haya sido obtenida en el marco de violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, todos los sujetos del ordenamiento jurídico están obligados a respetar los derechos fundamentales de cualquier persona en todas sus actuaciones,

⁴⁶ Michelle Taruffo, La prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 79, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Constancio Carrasco Daza, La prueba ilícita en material electoral. Reglas de exclusión diseñadas desde la Constitución, México, UNAM-IIJ, p. 135

⁴⁹ Idem

⁵⁰ Manuel Miranda Estrampes, La Prueba Ilícita. La regla de exclusión probatoria y sus excepciones, Barcelona, Revista Catalana de Seguridad Pública, p. 138

incluyendo la búsqueda y ofrecimiento de pruebas.⁵¹ Ahora bien, el artículo 20 constitucional, apartado A fracción IX expresamente dispone que «Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula».

De lo anterior, se desprende un mandato constitucional directo, que como tal, debe ser aplicado por la Primera Sala de la SCJN. Ciertamente es que originariamente la admisión de la prueba compete a los jueces de instrucción; sin embargo, cuando un tribunal de amparo se pronuncia sobre el hecho de la existencia de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como aquellas reglas que integran el debido proceso legal, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros, dicha competencia originaria debe actuar de la manera más amplia bajo las directrices propias de un tribunal constitucional garantista.

Esto no significa que el tribunal de amparo pueda sustituir en cualquier caso la interpretación de los hechos que ha realizado el tribunal ordinario, sino que únicamente tiene el deber de hacerlo en los casos que el material probatorio para imputar responsabilidad a una persona se haya obtenido en un proceso desarrollado a través de violaciones a los derechos humanos, circunstancia en la cual, como se ha relatado con antelación, nada impide al mismo a resolver las cuestiones de fondo para asegurar la máxima protección de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que exigir la nulidad de una prueba ilícita constituye un derecho que se construye con base en la condición de que una sentencia debe ser la conclusión de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para que sea válida (art. 14 CPEUM), la obligación del juzgador de conducirse con imparcialidad (art. 17 CPEUM) y el derecho a una defensa adecuada (art. 20, B, f. VIII CPEUM).⁵²

En caso de que se adviertan elementos que invaliden las pruebas de un caso, las mismas deben ser anuladas del proceso, pues es clara la transgresión de los

⁵¹ Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV de agosto de 2011, p. 226, Registro No. 161221. En adelante: Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA.

⁵² Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 10ª época, Jurisprudencia, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, Registro No. 160509. En adelante: Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO.

derechos fundamentales en este supuesto. Cuando las pruebas de cargo con las cuales se pretende imputar la responsabilidad de una persona carecen de licitud, un tribunal debe dejar sin efectos dichos medios probatorios, sin la necesidad de retornar el asunto al Tribunal Colegiado implicado. De no ser así, se pone en grave riesgo el derecho a la defensa, pues este Alto Tribunal podría transgredir el derecho a la prueba al no declarar nulos los elementos probatorios obtenidos en el marco de violaciones a los derechos humanos, con lo que este Tribunal Supremo podría estar evaluando de manera errónea las pruebas afectadas.

Reforzando lo anterior, uno de los principios rectores de nuestro sistema penal consagra que toda persona, en especial aquellas a las que se les ha imputado la comisión de algún delito, tienen derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente. Este derecho a que se presuma la inocencia se encuentra reconocido en los artículos 14 y 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La presunción de inocencia supone un estándar constitucional que necesariamente debe ser superado en el proceso mediante las pruebas para que el juzgador pueda llegar a dictar una sentencia en la que condene a una persona. Este derecho desde una perspectiva multifactorial "tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso."⁵³

Particularmente para este caso, debemos centrar la atención en dos de los tres elementos, la presunción de inocencia se compone de: la regla de trato y la regla de juicio. La regla de trato supone que el acusado no sea considerado culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra;⁵⁴ mandato aplicable tanto a las situaciones procesales como extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato y la consideración de no haber sido el autor de un delito mientras no

⁵³ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 124.

⁵⁴ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, XXV de enero de 2007, p. 2295, Registro No. 173507. En adelante: Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

se demuestre la culpabilidad a través de medios probatorios conformes con los principios fundamentales de todo Estado constitucional de derecho.⁵⁵ Por otro lado, la regla de juicio significa que deben respetarse los principios rectores del debido proceso y de los estándares más altos de prueba en materia penal en el devenir de todas las etapas procesales.⁵⁶

En consecuencia, como fue señalado anteriormente, este alto tribunal tiene la encomienda de garantizar que la totalidad de las pruebas que pretenden demostrar la responsabilidad penal de una persona acusada hayan sido suministradas por el órgano de acusación cumpliendo con los estándares constitucionales y legales que requiere la licitud de la misma,⁵⁷ pues toda aquella prueba viciada carece de la integridad necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y por ende debe resultar inutilizable, sin necesidad de turnar el caso al Tribunal Colegiado implicado.

En el caso en comento, es fundamental que el tribunal constitucional analice el material probatorio para advertir aquél que ha sido afectado por violaciones a los derechos humanos de la persona acusada, y que por tanto provoque la falta de fiabilidad de estos medios de prueba. Esta cuestión impacta directamente en los derechos de la persona acusada, pues toda persona tiene el derecho a que en caso de ser condenada, su condena esté basada en evidencia sólida.

En otras palabras, la cuestión en el presente caso en lo referente a la prueba no solamente estriba en dilucidar si las pruebas son o no suficientes para condenar a la recurrente sino también en el hecho de que las violaciones previas a la valoración de las pruebas puedan tomar éstas nulas, y en consecuencia, inutilizables. En particular, las pruebas impugnadas por la parte quejosa fueron:⁵⁸

| PRUEBA | FECHA | COMENTARIOS |
|---|--|--|
| Víctima Testigo 1 Hombre que fue rescatado en el el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: | Durante la primera declaración este testigo identificó a: como participe en su secuestro y quien le había dado de comer durante su cautiverio. Dichas |

⁵⁵ Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, XXY de mayo de 2007, p. 1186, Registro No. 172433. En adelante: Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁶ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁷ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁸ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 140.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 de marzo de 2006 • 30 de mayo de 2006 | manifestaciones fueron reiteradas en diversas ampliaciones de la declaración inicial. |
| <p>Victima Testigo 2</p> <p>Mujer madre de testigo victima 3 que fue rescatada en el el día del montaje televisivo.</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de diciembre de 2005 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 de febrero de 2006 • 15 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Respecto a las declaraciones y ampliaciones rendidas por este testigo es importante señalar que durante la primera declaración la testigo no identificó a como una de las personas que participaron en su secuestro, sino que fue hasta 3 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo que la testigo afirmó reconocer la voz de la inculpada. |
| <p>Victima Testigo 3</p> <p>Hijo menor de edad de victima testigo 2 que fue rescatado en el el día del montaje televisivo</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de febrero de 2006 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Durante la primera declaración, el menor no reconoció ni la voz ni el físico de y narró que quien le había acoso sangre había sido un hombre identificado como No fue sino hasta después de la publicación de los videos y de pláticas con su madre que el menor de edad modificó sus declaraciones señalando el reconocimiento de una mujer con acento raro y piel |
| <p>Testigo 4</p> <p>Mujer que comparece días después de exhibidos los videos señalando que reconoce a como la mujer que acechaba en el mercado a Victima testigo 2</p> | <p>Declaraciones ministeriales de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 de febrero de 2006 • 1 de marzo de 2006 | | En relación con esta testimonial vale la pena señalar que la mujer acudió voluntariamente a rendir su declaración 5 días después de que las autoridades reconocieran la existencia de un montaje televisivo. Nunca participó en el momento fue detenida. |
| Parte Informativo | Documentos de fecha 9 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006. | | Las propias autoridades reconocieron que habían existido errores en las fechas y horas de la detención de |
| Parte Informativo | | | |

En caso de descartar el material probatorio, y si el tribunal constitucional advierte que el órgano de acusación carece de elementos para superar el estándar que significa la presunción de inocencia, debe actuar de manera garantista, resolviendo el fondo de la cuestión. Por tanto, los derechos que protegen al acusado (presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e imparcialidad del juzgador) tienen que prevalecer frente a las violaciones cometidas por la autoridad en la construcción de su acusación. Es necesario enfatizar que la evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales y bajo los lineamientos que establece la Constitución debe ser el sustento de cualquier acusación que tenga por finalidad la restricción a los derechos y libertades de toda persona.

En el caso motivo del presente *Amicus Curiae*, es fundamental que el tribunal constitucional analice si de la lectura del material probatorio del caso, es posible advertir vicios y violaciones a los derechos humanos de la hoy acusada (tales como el testimonio de personas que fueron parte de una escenificación ajena a la realidad y que pudiesen haber contaminado irremediablemente tales pruebas) a la luz de los lineamientos establecidos en la Constitución y diversos tratados internacionales.

Por todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, tiene en sus manos el resarcimiento de las graves violaciones a los derechos humanos a través del cumplimiento del mandato directo de la Constitución de declarar nula y por ende, inutilizable toda prueba obtenida en violación a los derechos humanos.

Tal como en casos anteriores de violaciones que producen una afectación total al derecho de defensa y al debido proceso de la persona inculpada,⁵⁹ y una vez adoptada la postura garantista del Amparo Directo en Revisión referida en el primer apartado de este documento, el tribunal constitucional tiene la responsabilidad de resolver en consecuencia.

IV. 2. El derecho a la notificación consular

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante "Convención de Viena"),⁶⁰ en su artículo 36 impone a los Estados diversas obligaciones en caso de arrestar, detener o mantener en prisión preventiva a un extranjero. La principal de estas obligaciones es que se notifique a la representación consular de donde sea nacional el detenido o la detenida.

Además, tal instrumento señala que deberá informarse al detenido sin dilación que tiene derecho a que se le comunique a su consulado de su detención, y que pueden asistirlo legalmente. La notificación realizada debe hacerse sin demora, y

⁵⁹ Amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en revisión /2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar.

⁶⁰ Ratificado por el Estado mexicano el 19 de marzo de 1967

luego de ello existe la obligación de permitir al funcionario consular comunicarse libremente con su nacional.

Si bien, la Convención de Viena no es un tratado de derechos humanos, ya que su función principal de acuerdo a su preámbulo "no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos"⁶¹. Lo cierto es que, el contenido del artículo 36 si consagra una norma de derechos humanos, ya que como lo ha considerado la Corte Interamericana, la titularidad del derecho a la notificación consular corresponde al individuo.⁶²

Lo anterior rompe con el esquema tradicional del Derecho Internacional consistente en derechos y obligaciones recíprocas entre Estados⁶³. Acorde con ello, la Corte Internacional de Justicia en el caso refirió que el contenido del artículo 36 de la Convención de Viena concede derechos a los individuos⁶⁴.

En estas circunstancias, resultan de especial relevancia con el artículo primero constitucional, cuya redacción no limita la protección a aquélla otorgada en los tratados que tradicionalmente son de derechos humanos, sino que la expande a todos los tratados que sin importar su materia tengan alguna disposición que reconozca derechos humanos.

Por lo tanto, el derecho a la notificación consular es un derecho humano del que gozan todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, ya que está contenido en un tratado del que es parte el Estado.

Contenido del derecho a la notificación consular.

Es necesario identificar los diferentes momentos a que hace referencia el artículo

⁶¹ Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - adoptada el 24 de abril de 1963, entró en vigor el 19 de marzo de 1967 y fue ratificada por México el 16 de junio de 1965. Preámbulo, párrafo 4. Párr. 80.

⁶² Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 199 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 199 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶⁴ International Court of Justice, Case (Germany v. United States of America), I.C.J. Reports 2001, Judgment of 27 June 2001, párr. 77.

36 de la Convención de Viena con la finalidad de especificar los derechos del individuo. En primer lugar, no importa cuál sea la situación en que se encuentre una persona, la representación consular del Estado que envía (Estado del cual es nacional la persona privada de libertad) tiene el derecho de comunicarse con su nacional en cualquier momento.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) al establecer que de analizar el artículo 36.1.a de la Convención de Viena, a la luz del artículo 5, incisos a, e, i, de la misma Convención se desprende el derecho a la comunicación consular.⁶⁵ Para la Corte IDH el derecho a la comunicación consular tiene la siguiente finalidad:

[...] la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia⁶⁶.

El tercer derecho, y de especial importancia en el presente caso, es la notificación consular, que se desprende de los incisos b) y c) del artículo 36 de la Convención de Viena y, consiste en avisar al Estado que envía que un nacional fue detenido, arrestado o puesto en prisión preventiva. La realización de este derecho exige el cumplimiento de tres prerrogativas a favor del individuo⁶⁷:

- a) A que se le notifiquen sus derechos, que son la notificación consular y la asistencia consular. Esta obligación ha sido interpretada como parte de los derechos que deben hacerse conocer al inculcado en caso de ser detenido conforme al artículo 7.4 de la Convención Americana⁶⁸.
- b) El acceso efectivo a la notificación consular.

65 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 79.

66 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 80.

67 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 153.

68 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

c) El derecho a la asistencia consular. Al respecto, este derecho puede ser renunciado por el interesado.

El derecho a la notificación consular protege diferentes bienes jurídicos, ya que garantiza el acceso a la justicia. Es fundamental que ante las condiciones de desigualdad a las que se enfrenta un extranjero y el desconocimiento del sistema jurídico del país, se le permita a la representación consular de su Estado prestarle auxilio a fin de eliminar esas diferencias y tener un trato justo y equitativo ante los Tribunales en los que se encuentre.

Al respecto la Corte Interamericana ha resaltado que «el cónsul puede asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de libertad»⁶⁹

Resulta relevante aclarar que el derecho a la libertad personal no es un derecho que únicamente se refiera a la libertad física, por lo que la notificación consular también forma parte del derecho a la libertad personal, lo anterior queda asentado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que versa sobre la necesidad de dar a conocer los derechos que tienen las y los detenidos, lo que constituye una prevención de conductas ilegales o arbitrarias⁷⁰.

En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que la obligación de informar al detenido de sus derechos sin demora no recae en que el extranjero lo solicite; así como tampoco se cumple si las autoridades del Estado que envía se enteran de la detención por otros medios⁷¹. Esta comunicación entre el detenido y la representación consular deberá hacerse sin demora; lo cual es

69 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

70 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 154; Corte IDH. Caso de los Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr.

71 International Court of Justice, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, párr. 95.

congruente con el derecho de comunicarse con una tercera persona para que se le brinde apoyo.

Aunado a todo lo anterior, el derecho a la notificación consular debe ser útil, lo que a criterio de la Comisión de Derecho Internacional, quien preparó el texto final de la Convención de Viena, significa que no debe nulificarse por las leyes o regulación del Estado que recibe⁷². Este efecto útil debe traducirse en que la notificación consular, debe hacerse desde el mismo momento de la detención, y hasta antes de que el detenido rinda su primera declaración⁷³.

Por todo lo anterior, el acceso efectivo al derecho a la notificación consular constituye uno de los pilares del debido proceso, ya que de acuerdo al artículo 8.2.d de la Convención Americana toda persona tiene derecho a "ser asistida por un defensor". Es claro que la inobservancia u obstrucción del detenido para ejercer o informarse de sus derechos dentro de un proceso legal afecta gravemente sus garantías judiciales y en consecuencia es una violación a sus derechos humanos.⁷⁴

En el presente estudio, es necesario tomar en consideración todas las posibles afectaciones que puedan producirse a la quejosa, como consecuencia de la afectación a tales derechos.

Independientemente del momento de la detención, las autoridades mexicanas tienen la obligación de comunicarse por todos los medios disponibles y sin dilación con el consulado antes de tomar la primera declaración. En el caso concreto, la parte quejosa se niega a reconocer su primera declaración --del 9 de diciembre de 2005-- pues aunque reconoce la firma que plasmó en esa declaración, sostiene

⁷² International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission*, 1961, vol. II, pág. 113.

⁷³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 106; así como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 108 *Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, Principio V.

⁷⁴ Corte IDH. *Caso Vs. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 157; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 129.

que fue presionada y forzada a firmar y a poner su huella, además de que no le permitieron leer su propia declaración, afectaciones derivadas de la omisión del Ministerio Público de obtener esta primera declaración de sin que ésta hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular⁷⁵

Es evidente que la falta de este requisito hace ilusoria la protección otorgada por la Convención de Viena. En este sentido, es fundamental reconocer que en virtud de las consideraciones anteriormente planteadas, el derecho a la notificación consular debe ser considerado como una obligación de resultado, y no de medio o comportamiento, por lo que las autoridades, tienen la obligación de asegurar el pleno cumplimiento del mismo en todo proceso penal en donde esté involucrada una persona que sea nacional de un Estado distinto al de la nacionalidad de dicha persona.

Por tanto, es necesario tener en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de reparaciones al debido proceso, la cuál ha determinado que todos los actos procesales guardan una estrecha relación cronológica, lógica y teleológica, estos actos están encaminados a la solución de una controversia por medio de una sentencia; sin embargo la validez de los actos procesales afecta la validez misma de la sentencia.⁷⁶ Es por ello que *"si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá."*⁷⁷

Las graves violaciones al debido proceso legal y a la libertad personal causadas por la negación y la falta de efectividad del derecho a la notificación consular deberían ser motivos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la nulidad de un procedimiento penal en contra de una persona, ya que el carácter inmediato y la importancia de contar con la representación

⁷⁵ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:
Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

⁷⁶ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 218.

⁷⁷ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 219; Corte IDH. Caso Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de agosto de 2010, considerando 14.

consular de su país de origen afectan de forma definitiva la sentencia en contra de esa persona.

Como ha quedado establecido, es de crucial importancia que la o el funcionario consular pueda comunicarse libremente con el acusado antes de la primera declaración de éste, con el objetivo de salvaguardar sus intereses. En otras palabras, este acto previene las detenciones arbitrarias.

En consecuencia, la detención y posterior declaración de una persona carece de la validez necesaria para motivar una sentencia condenatoria en su contra particularmente cuando se torna ilusoria la notificación consular y en consecuencia se vulneran tanto el debido proceso como la libertad personal.



PETITORIO

Con base en todo lo expuesto, a esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respetuosamente solicitamos que:

PRIMERO: Tenga por recibido el presente escrito en calidad de *amicus curiae*

SEGUNDO: Considere los razonamientos antes expuestos a fin de garantizar la máxima protección de los derechos humanos de la persona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

DR.



c.c.p.: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para su conocimiento.
Ministro José Ramón Cossío Díaz. Para su conocimiento
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para su conocimiento
Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Para su conocimiento

LGP/MJMG/RBS/gbs



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011

QUEJOSA

ASUNTO: AMICUS CURIAE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA ARREA

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
ACUERDOS
PASAR

Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF)¹, comparezco ante esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión.

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIAS DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | |
| | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | 24 |
| V. PETITORIO | 30 |



I. JUSTIFICACIÓN

El *amicus curiae* (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En nuestro sistema jurídico existen precedentes sobre la recepción y admisión de escritos de *amicus curiae* por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal. Asimismo, diversos tribunales internacionales reconocen esta figura jurídica como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares relevantes para la resolución de un caso, entre ellos se encuentra la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA LA EX YUGOSLAVIA y RUANDA, así como por la CORTE ESPECIAL PARA SIERRA LEONA.

En tal virtud, en nuestra actuación como *Amicus Curiae* se ofrecerán argumentos con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para su inminente fallo en relación con el caso al rubro citado.

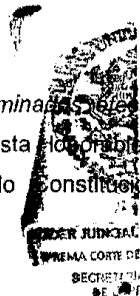
Por último, se reitera que esta actuación tiene como interés la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, cuya labor permanente nos corresponde a todos y todas.

II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE

El principal interés de esta representación es mostrar a las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución del caso en estudio conlleva la necesidad de analizar los siguientes aspectos relacionados con la necesidad de asegurar que el juicio de amparo posibilite, en caso de advertir violaciones a los derechos humanos, la plena protección de éstos, asegurando la mayor protección de la persona, y en contrapartida, la falta de efectividad de una

sentencia dictada *sólo para determinados efectos* en el marco del juicio de amparo directo en revisión. En específico, se sostiene que:

- El otorgamiento de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* contraviene la naturaleza del juicio de amparo en tanto reduce los alcances de un recurso concebido para la protección de derechos humanos a la salvaguarda normativa del orden Constitucional.
- La concesión del amparo *sólo para determinados efectos* podría atentar contra la teleología e impedir la máxima realización del recurso, puesto que únicamente atendería a enmendar violaciones procesales sin ordenar la total reparación de los derechos violentados.
- La sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide a la quejosa el acceso a un recurso efectivo para reparar las violaciones a sus derechos humanos.
- La concesión de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* es contraria a la función jurisdiccional que las y los Ministros de esta Honorable Corte deben desempeñar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
- En caso de que el tribunal constitucional advierta violaciones a los derechos humanos, debe otorgar la mayor protección constitucional posible, resolviendo el fondo de la cuestión, más allá de las formalidades propias del amparo *sólo para determinados efectos*.



❖

III. **LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO**

Los debates planteados en medios de comunicación especializados, en foros de la sociedad civil, así como las discusiones suscitadas en el seno de este Máximo Tribunal en torno al presente caso, evidencian como uno de los principales temas para la resolución del presente asunto, la determinación de los alcances de la posible sentencia que

conceda el amparo a partir de la naturaleza de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa. Es decir, se ha identificado que el alcance de una posible sentencia que conceda el amparo está sujeto a la determinación de si las violaciones que se alegan son de carácter procedimental o sustancial. Así, en un esquema tradicional de cuño formalista, cuando existen violaciones de naturaleza procesal, el amparo se concedería *sólo para efectos* de subsanar la incorrecta aplicación e interpretación de la norma, mientras que por violaciones de naturaleza sustancial la sentencia se concedería de manera plena para subsanar todas las violaciones a derechos humanos.

En el caso concreto, resulta relevante guardar las precauciones necesarias para no reducir el análisis del asunto a la mera comprobación de violaciones de carácter procedimental que deriven en la concesión de un amparo *sólo para efectos* de subsanar los errores de la autoridad. Esta Comisión sostiene que la sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* limita los alcances del recurso e impide su realización como máximo instrumento de protección de los derechos fundamentales. Además, contraviene los estándares internacionales relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso adecuado y efectivo para subsanar violaciones a derechos humanos, puesto que no garantiza una reparación integral de los derechos que se alegan violados. En este contexto, se presentan los argumentos que sostienen que la figura del *amparo para efectos* no debe ser considerada por las y los Ministros de este Honorable Tribunal Constitucional al momento de dictar sentencia del caso en estudio, y que en caso de advertir violaciones a los derechos humanos de la hoy quejosa, debe conceder la más amplia protección constitucional:

III.1 EL AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO

En primer lugar, y para sostener que la concesión del amparo *para determinados efectos* es contraria a la teleología del juicio de amparo, es necesario exponer de manera breve la naturaleza jurídica del recurso en conocimiento de este Honorable Tribunal.

El amparo directo es el medio de impugnación que tiene por objeto revisar las resoluciones de los Tribunales del Estado para determinar si las mismas han sido

dictadas conforme a derecho o si tienen vicios que impliquen contravenciones a algún mandato constitucional.²

Desde los primeros momentos de su configuración, el amparo directo se caracterizó por la enérgica oposición de los constituyentes respecto a su establecimiento, ya que consideraban que éste nulificaría la administración de justicia local y comprometería la soberanía de los Estados, así como el prestigio de sus órganos judiciales.³ Por tal motivo, las personas que participaron en los debates, decidieron que, a fin de garantizar que no cualquier sentencia emitida por los órganos judiciales locales fuese revisada por tribunales federales, resultaba necesario limitar el objeto del juicio de amparo directo.⁴

Esta limitación, consistió en que los tribunales federales conocerían de las sentencias dictadas en la justicia local, sólo cuando los tribunales locales en sentencias definitivas, hubieren incurrido en violaciones a las leyes del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y que trascendieran al resultado del fallo; o cuando éstos hubiesen cometido violaciones en las sentencias o laudos definitivos.⁵ En otras palabras, establecieron que – de manera similar al *recurso de casación* – el amparo directo cumpliría con una doble función, a saber: 1) permitiría realizar impugnaciones de fondo sobre violaciones a los derechos de las personas;⁶ y 2) realizar una función de control sobre la aplicación incorrecta de una norma procesal.⁷

En este orden de ideas, es posible afirmar que la finalidad y el objeto del juicio de amparo directo es condicionar la validez y sujetar el contenido de las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, al cumplimiento del orden jurídico constitucional, en particular al respeto de los derechos humanos.⁸ En tal sentido, la propia Ley de amparo establece que la sentencia que conceda el amparo «tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al

² CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

³ Exposición de motivos, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la constitución política de los estados unidos mexicanos*, Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta No. 352., México, D.F., a 19 de marzo de 2009, pp.6.

⁴ Ibid.

⁵ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zarnudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

⁶ Idem.

⁷ León Dorantes, Romeo. El Juicio de amparo. Tercera Edición. Editorial José Caciya. México, 1957.

⁸ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija»⁹

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que el amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, cuando existen impugnaciones ya sea procesales o materiales que requieran de interpretación constitucional, la facultad que se otorgó al Poder Judicial Federal para conocer sobre sentencias definitivas es restringida, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer al respecto.¹⁰

Cuando de la resolución dictada en amparo directo se pudiese advertir que existió por parte del Tribunal Colegiado, ya sea, la interpretación directa de un precepto de la Constitución; que subyace un problema de constitucionalidad planteado desde la demanda inicial, o bien, que el propio Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre alguno de estos dos temas, se cuenta con la posibilidad de interponer el denominado amparo directo en revisión.

Este amparo directo en revisión, del cual sólo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX de nuestra Constitución¹², así como en el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo¹³ y 21, fracción III, inciso a), de

⁹ Artículo 80 Ley de Amparo.

¹⁰ NATAREN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión. 2009, Sentencia del día 2 de mayo de 2010. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. SCJN, Primera Sala. Amparo Directo en Revisión. 2007. Quejosos. Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

¹³ Ley de Amparo. Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...)V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁴ como un medio de impugnación excepcional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo.¹⁵ De manera adicional, este recurso es considerado como un medio de impugnación excepcional, debido a que, por regla general, las resoluciones en juicios de amparo directo emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten ningún recurso, a menos que, como se ha señalado, se presenten las excepciones ya señaladas.¹⁶

Como es posible apreciar, los requisitos de procedencia del recurso de revisión persiguen como principal finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete definitivo de la Constitución, sea en última instancia quien determine si una norma se ajusta a la misma, o bien, quien fije el alcance y sentido jurídico de las disposiciones constitucionales.¹⁷

De esta manera, resulta evidente que el objeto con el que se promueve un recurso de revisión en el amparo directo estaría en la búsqueda de obtener una sentencia que revoque o modifique la resolución recurrida, y que por tanto, los únicos efectos que debería llegar a producir, en caso de ser favorable para la parte quejosa, sería conceder la protección de la Justicia de la Unión en sentido pleno, tal y como lo establece la propia Ley de Amparo al mencionar la finalidad y efectos que debería tener una sentencia de amparo.

No obstante, a través de la práctica, el Poder Judicial desarrolló una fórmula ampliamente aceptada pero con un grave cuestionamiento estructural, que es el otorgamiento de esta protección sólo para determinados efectos. De esta manera, y dependiendo, si el amparo directo en revisión versa sobre impugnaciones de fondo o procesales, la sentencia dictada, bajo este esquema planteado, podría llegar a los siguientes resultados:

¹⁴ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)

¹⁵ AZUELA GÚITRON, Mariano. "Revisión en Amparo Directo". Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2009.

¹⁶ SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión /2007. Quejosos Esteban Oyervides. Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹⁷ REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, febrero de 1996. -Tesis: 2a./J. 3/96. Página: 218

- 1) Si del análisis se desprende que existe una violación a un derecho fundamental, cuya trasgresión afectó de manera grave al quejoso, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión se tendría que conceder de **manera plena**.¹⁸ En este sentido, y tratándose de procesos penales, las violaciones graves a los derechos humanos del procesado, en especial, a la defensa adecuada y al debido proceso, llegaría a tener por efectos la inmediata libertad de la persona procesada.¹⁹
- 2) Sin embargo, cuando el análisis y la resolución versaran sobre impugnaciones procesales, la concesión del amparo se otorgaría solo **para efectos**, es decir, su alcance será únicamente decretar la nulidad de lo actuado y reenviar a la autoridad responsable para la reposición del procedimiento. Lo anterior, debido a que, en este esquema, se considera que un Tribunal Colegiado de Circuito —autoridad en principio competente para conocer del juicio de amparo directo— no tiene jurisdicción plena respecto a la controversia, por lo que la sentencia que otorgue la protección federal sería dictada para **efectos** de invalidar lo actuado por la autoridad responsable y para que en su caso, ésta dicte una nueva resolución en que se repare el error cometido.²⁰

El presente *amicus curiae*, aclarará precisamente cómo uno de los alcances que puede llegar a producir la sentencia dictada en el amparo directo en revisión —conceder el amparo **para efectos**— además de resultar contraria a la naturaleza propia del recurso de amparo, que los estándares internacionales de los recursos judiciales, no tiene cabida en las soluciones posibles que las y los juzgadores pueden adoptar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

III.2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

A continuación, y a efectos de exponer cómo el amparo para efectos no debería tener cabida en la conciencia de las y los juzgadores —en especial de un Tribunal

¹⁸ Algunos antecedentes sobre asuntos en que esta Primera Sala consideró que los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado son: amparo de amparo en revisión 1/2008, amparo directo en revisión 1/2009, amparo directo 1/2010, amparo directo 2/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo en revisión 1/2010, amparo en revisión 1/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo directo en revisión 1/2010, amparo en revisión 1/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011, amparo en revisión 1/2011, amparo directo en revisión 1/2011.

¹⁹ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE: Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

²⁰ CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

Constitucional—, es necesario referirnos al papel que desempeñan dentro del marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En el modelo tradicional del Estado de Derecho, el papel de las y los jueces como órganos sujetos a la primacía de la ley se limitaba a la realización de una función técnica de aplicación de la ley, sin importar cual hubiese sido su contenido.²¹ No obstante, como consecuencia de llamada *segunda revolución en la historia jurídica* —que transformó al Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derecho— esta idea evolucionó. Dicha «revolución» tuvo como principal característica el establecimiento de constituciones rígidas que permitieron la integración del Estado de Derecho a través de la sujeción de la ley por parte de todos los poderes al Derecho y a la Constitución.²²

Sin embargo, esta sujeción —a diferencia del modelo tradicional de Estado de Derecho—, pasó a fundarse no en las formas y procedimientos de creación de leyes, sino en el contenido de las mismas. Es decir, bajo el surgimiento de este nuevo modelo del constitucionalismo o garantismo, la sujeción a la ley se modificó siendo ahora una sujeción no a la letra de la misma (formal), sino que debe atenderse a que la ley sea válida conforme a la Constitución y tratados. (material).²³

Desde esta perspectiva, la validez se concibe ya no como un concepto asociado a la mera existencia formal de una norma, sino como una sujeta al contenido de la misma que debe estar ligado a la coherencia de sus significados con la Constitución, donde además la valoración de esta coherencia le corresponderá al propio juzgador.²⁴ De esta manera, la interpretación judicial se convierte precisamente en un juicio sobre la ley misma, ya que le corresponde a las y los juzgadores la responsabilidad de elegir cuáles son los significados válidos de la ley, esto es, significados compatibles con las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales.²⁵

21 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

22 FERRAJOLI, Luigi. *Sobre los Derechos Fundamentales*. Revista Cuestiones Constitucionales. Número 15. Diciembre, 2006. P. 114.

23 OROZCO Hernández, Jesus J. *La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* en "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2003, número 18, P. 45.

24 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 27.

25 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 26.

Así pues, el constitucionalismo se erige como un sistema de vínculos sustanciales, prohibiciones y obligaciones impuestas precisamente por los principios inscritos, por lo general, en la primera parte de las Constituciones,²⁶ donde las y los juzgadores no pueden sujetarse a la ley de manera incondicionada y acrítica, sino que como consecuencia de la sujeción *material*, tienen la obligación de interpretar en sentido constitucional todas aquellas leyes que consideren inválidas.²⁷

Aunado a lo anterior, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho reconoce los principios como un componente esencial del orden jurídico e incorpora a los derechos fundamentales como parte de los mismos, cambiando así la relación entre el juez y la ley, pues mediante la sujeción a la Constitución se le asigna a la jurisdicción una función de garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad por parte del poder público.²⁸

En este sentido, es evidente que la función jurisdiccional, si bien puede estar relacionada con aspectos de legalidad, en ningún momento puede desprenderse de su principal objeto: es decir, garantizar los derechos fundamentales como contenido *material* de las normas constitucionales. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho los derechos fundamentales se erigen como normas "*sustanciales*" que determinan el contenido y los límites del resto de normas y decisiones que integran un Estado; constituyen lo que Ferrajoli llama la *esfera de lo indecible*.²⁹

Bajo esta *esfera* de ideas, y a la luz de una visión de carácter garantista, se debe tener en cuenta que la interpretación de los preceptos constitucionales se desarrollará en el marco del juicio de amparo activado para la salvaguarda de los derechos de la persona, y no así para la protección exclusivamente normativa del orden constitucional. Es decir, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a establecer criterios unitarios sobre la interpretación de la Constitución, en su carácter de

26 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

27 OROZCO Hernández, Jesús J. Ob cit. P. 49.

28 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. P. 25.

29 FERRAJOLI, Luigi. *Teoría de la Democracia. Dos Perspectivas comparadas*. Primera Edición. México, 2001. P.16.

Tribunal Constitucional también tiene como principal función la de ser garante de los derechos las personas, especialmente, en el marco del juicio de amparo.³⁰

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no existe duda respecto a que la procedencia del recurso de revisión se determinó en atención a que la defensa de la quejosa cuestionó no sólo la interpretación del sentido y alcance que el Tribunal Colegiado realizó de los siguientes preceptos constitucionales, sino también las violaciones a derechos humanos que de ellas se derivaron:

| Rubro | Precepto Constitucional | Determinación del Tribunal Colegiado |
|--|---|---|
| Principio de buena fe ministerial | Artículo 21 constitucional | El Tribunal Colegiado consideró que el montaje televisivo no violó esta garantía, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención. |
| Significado del término "sin demora" para efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público | Artículo 16 constitucional | El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término "inmediatamente" o "sin demora", dicha situación debe evaluarse en cada caso. |
| Violación al derecho de notificación consular | Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares | La afectación a este precepto vició el procedimiento, el Tribunal desentendió el principio de supremacía constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no está obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asesorado por su Consulado para tomarle su declaración. |
| Principio de Congruencia y Exhaustividad | Artículo 17 | En la valoración de la prueba no se tomaron en consideración aquellas que aportó la recurrente en las primeras instancias. |
| Principio de presunción de inocencia | Artículo 20 | Según el Tribunal Colegiado, no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su exposición en los medios ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible impedir que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. |

Fuente: elaboración propia.

Por tales motivos, esta Comisión solicita a las y los Ministros de esta Suprema Corte que el análisis de constitucionalidad no se limite a la protección del orden constitucional, sino que se realice con la finalidad de constatar las posibles afectaciones a los derechos humanos, en lo general, y al debido proceso en lo particular, para que en caso de determine la vulneración de derechos se otorgue la más amplia protección constitucional, rompiendo la sujeción formalista del amparo para efectos, el cual, a juicio de esta institución, debería ser eliminado de la conciencia de las y los juzgadores democráticos.

³⁰ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord, Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

En particular, resulta esencial que las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan en cuenta que la resolución del amparo para efectos no sólo es contraria a la naturaleza propia del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, sino también a los estándares establecidos en términos del artículo 25 de la Convención Americana relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso rápido, adecuado y efectivo sencillo para la protección de sus derechos.

III.3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO

El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades del Estado, incluyendo a esta Corte Suprema, a interpretar todas las normas relativas a los derechos humanos de conformidad no sólo con la Constitución, sino también de conformidad con los tratados internacionales de la materia y de los que México sea Estado Parte, en el sentido de otorgar en todo tiempo la protección más amplia al individuo. De igual manera, el párrafo primero de dicho artículo incorpora a nuestro máximo ordenamiento todas las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano.

En razón de lo anterior, y aun cuando esta Suprema Corte ha sentado algunos precedentes respecto la efectividad de los recursos, consideramos necesario recurrir a los estándares internacionales, particularmente a aquellos fijados en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a fin de garantizar la protección más amplia para la persona.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³¹, consagra el derecho de todas las personas a un recurso rápido, sencillo y efectivo:

Artículo 25. Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

³¹ Ratificada por México el 24 de marzo de 1981

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), la noción de **efectividad del recurso** presenta dos aspectos: uno de carácter *normativo*, relacionado con la idoneidad del recurso y su capacidad para dar respuesta a la violación de derechos humanos; y el segundo de carácter *empírico*, relacionado con las condiciones que hacen posible que el recurso pueda cumplir con su objetivo.³²

En específico, la Coidh se ha pronunciado sobre estas condiciones de la siguiente manera:

- a) **Adecuados:** implica que el recurso sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida.³³ El análisis de este requisito debe situarse en el plano del diseño normativo del recurso.
- b) **Efectivos:** un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.³⁴ La condición de **efectividad**, se correlaciona necesariamente con la rapidez y sencillez del recurso,³⁵ condiciones que deben de existir de manera copulativa en todos los recursos.³⁶

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso vs. México, para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan

³² CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Septiembre, 2007.

³³ Corte IDH. Caso : Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.

³⁴ Corte IDH. Caso C. Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr.118.

³⁵ COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Año 2006, Número 5. Página 35.

³⁶ MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2003. P. 361

formalmente, sino que es preciso que tengan **efectividad** en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. Esta obligación implica que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.³⁷

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la interpretación del artículo 25 en relación con el artículo 8 de la Convención Americana deriva el derecho de acceso a la justicia que impone a los Estados la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), mismos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1).³⁸

Así las cosas, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano es constante al señalar que la garantía del acceso a la justicia implica suministrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos los recursos necesarios para alegar la afectación de sus derechos,³⁹ además, ha sido enfática al establecer que no basta con la sola existencia formal de recursos, sino que estos deben ser adecuados y efectivos para ~~reparar~~ la situación jurídica infringida.⁴⁰

En otras palabras, no resulta suficiente que un recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que es necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que tales recursos sean: 1) verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación y; 2) que puedan proporcionar una reparación.⁴¹

Ahora bien, en el caso concreto, las y los Ministros de esta Suprema Corte deben considerar que la *sentencia dictada para efectos* no cumpliría con los estándares anteriormente señalados, en tanto torna en ilusorio recurso de amparo directo en

³⁷ *Idem.*

³⁸ Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. México*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 21; Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. Brasil*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2006. Serie C No 149., párr. 175.

³⁹ Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No 5.

⁴⁰ Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. Ecuador*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Junio de 2005. Serie C No 129. Parr. 93.

⁴¹ Corte IDH. Caso *Castillo et al. vs. Surinam*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 129. Parr. 177.

revisión como instrumento de protección de derechos humanos.

Como indicamos, la **efectividad** de un recurso, implica la obligación de las autoridades de garantizar que el recurso sea realmente capaz de producir los resultados para los cuales fue creado, es decir, que pueda cumplir con su objeto.

En tal sentido, el amparo directo y el amparo directo en revisión fueron diseñados desde una perspectiva formalista propia de la época, como instrumentos capaces de producir dos resultados diferentes. Por una parte, ser concedidos sólo *para efectos* de subsanar los errores en el proceso o en un *sentido amplio de protección*, que se traduce en la total reparación de los derechos violentados por la autoridad.

El primero de estos resultados –amparo para efectos–, analizado bajo la lógica del juicio de amparo como máximo instrumento de protección de derechos humanos, convierte al amparo directo y máxime al amparo directo en revisión en recursos ilusorios para proteger la situación jurídica infringida, es decir, para proteger los derechos fundamentales del quejoso.

En lo que respecta al amparo directo en revisión, esto sucede debido a que, la concesión del amparo **para efectos**, tiene como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia, tras el análisis de una violación procesal –relacionada con aspectos de constitucionalidad– y al declarar la misma como fundada, regrese el expediente a la autoridad responsable para efectos de que la misma repare las violaciones que existieron en el proceso.

Tal situación, en realidad se traduce en la posibilidad que dentro de aquellos juicios, que por lo general llevan varios años de litigarse en primera y segunda instancia y luego ante un Tribunal Colegiado, exista otra violación procesal que varios meses después haga retornar el expediente a la Justicia Federal, provocando así que del mismo asunto deriven un número incierto de juicios de amparo; esto es lo que el Ministro Zaldívar ha llamado como: *el amparo ping pong*.

⁴²Dicha situación, por supuesto, implica que el juicio de amparo no sea, en términos del artículo 25, un recurso **rápido y sencillo** para la protección de derechos.

En este sentido, no basta con que el recurso de amparo directo en revisión tenga dentro de sus posibilidades el otorgamiento del amparo en un sentido pleno, sino que es necesario que el Tribunal, en caso de comprobar la violación a derechos humanos, realmente otorgue esta protección. De lo contrario, el propio Tribunal estaría dando pie a una cadena indefinida de juicios de amparo derivados de violaciones procesales, situación que además, retrasa, dificulta y sobrecarga la impartición de justicia en nuestro país, atentando contra lo señalado en los artículos 17 y 23 de nuestra Constitución en relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo breve y en el marco de tres instancias.

De igual manera, es necesario establecer que la tarea de garantizar la **efectividad** del recurso —en términos del artículo 25 de la Convención Americana— recae en esta Suprema Corte de Justicia y se traduce en permitir la máxima realización del recurso mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en el sentido más amplio de protección.

DE LA FEDERACIÓN
JUSTICIA DE LA NACIÓN
CASA 503

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo directo en revisión tiene como finalidad realizar un control respecto la interpretación de disposiciones constitucionales, lo cual inevitablemente se encuentra relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, toda vez que el conocimiento de este recurso se le reservó como una facultad exclusiva a la Suprema Corte para que, en su papel de Tribunal Constitucional, fuese el única que pudiese realizar un control de las normas constitucionales.

En el caso en concreto, y a juicio de esta institución de protección de los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional limitaría enormemente su papel como garante de derechos humanos si sólo se limita a realizar un análisis formal

⁴² ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. México, 2002.

respecto la interpretación de las normas por parte de la autoridad sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, máxime cuando la finalidad del propio recurso no es la obtención de un *control de constitucionalidad in abstracto*, sino conseguir la garantía y en su caso, la reparación de los derechos humanos violentados por una errónea interpretación y aplicación de preceptos constitucionales.

Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que el principio del *efecto útil* (*effete utile*) conlleva la necesidad de aplicar e interpretar las disposiciones con su objeto y fin, lo cual no sólo aplica respecto a las normas sustantivas de derechos humanos, sino también en relación con normas procesales.⁴³ En tal sentido, ordenar la concesión del amparo **para efectos** implicaría también contravenir el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, en tanto no se estaría garantizando el cumplimiento del objeto y fin del recurso, es decir, la concesión de un amparo que sólo ordene la corrección de errores en la aplicación de la ley o la Constitución pero que no resulte en la adecuada reparación a los derechos fundamentales de una persona contraviene el objeto y fin del juicio de amparo.

Por último, esta Comisión desea manifestar que esta Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente vinculada a ejercer un *control de convencionalidad*, que implica acatar y aplicar no sólo las disposiciones establecidas en dicha Convención, sino también las interpretaciones que de la misma, ha establecido la Corte Interamericana en los casos litigados contra el Estado mexicano.

En consecuencia, y debido a que el otorgamiento de un amparo para efectos no sólo contraviene el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, sino que también resulta incompatible con los estándares establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, en tanto convierte al juicio de amparo en un recurso ilusorio, es encargo de esta Suprema Corte de Justicia garantizar la mayor protección de la persona mediante el otorgamiento del amparo en el sentido más amplio posible.

⁴³ Corte IDH. Caso *Usmei vs. Colombia*. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosas. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C. No. 134. Párr. 106

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL

A continuación, se procederá a realizar un análisis relacionado con elementos fundamentales que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tomar en consideración al momento de analizar las siguientes cuestiones de constitucionalidad que tuvieron como consecuencia la vulneración de los derechos de la parte quejosa.

IV.1. Valoración de Prueba Ilícita

En el presente caso, la valoración de la prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos constituye un elemento fundamental en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de última instancia dentro del Estado. En este sentido, una Corte Suprema desarrolla, entre otras, la función fundamental de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de carácter inferior, características que pueden ser extendidas a toda Corte Suprema.⁴⁴

La sociedad ser el órgano jurisdiccional supremo garante de los derechos humanos y las libertades constitucionales, debe asegurar el máximo respeto posible a los derechos de toda persona procesada pues *«si se quiere una justicia eficiente, coherente, confiable y racionalmente orientada hacia el ordenado desarrollo del derecho, entonces, debe configurarse un modelo de corte suprema capaz de tender hacia estos valores y de realizar estas finalidades»*⁴⁵.

En tal entendido, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona sólo puede garantizarse en el marco del debido proceso legal. Dentro de dicho marco se ubica el derecho a la prueba que constituye una de las garantías fundamentales de toda persona pues forma parte esencial del derecho de acción y defensa, sin ella dentro de un proceso, los derechos humanos carecerían de sentido al no permitir a las partes acreditar por ningún medio disponible las

⁴⁴ Michelle Taruffo, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 205, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁵ Ibid, p. 225

aseveraciones fácticas que son el fundamento de sus pretensiones y defensas.⁴⁶ Así, debe considerarse que el derecho a la prueba abarca tanto el derecho de toda parte para ofrecer la prueba relevante que esté en su posesión como el derecho a que toda prueba sea debidamente considerada por el tribunal.⁴⁷

Ahora bien, el primer estándar de valoración de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, que traza los parámetros necesarios para que «la actividad probatoria respete cabalmente los derechos fundamentales, exigencia indispensable para aspirar a un Estado democrático de derecho»⁴⁸. Desde luego, en este punto hablamos del concepto de constitución en sentido amplio, reconocido por el artículo 1º, específicamente a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, de 2011.

En la Constitución se encuentra el derecho a probar y las directrices para determinar cuándo resulta necesaria la exclusión de medios de prueba que atentan contra los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, deban ser anulados o excluidos.⁴⁹ Por lo tanto, la prueba ilícita, al haberse obtenido en transgresión a diversos derechos fundamentales, conlleva su necesaria inutilización procesal. Es decir, la prohibición de su valoración en juicio por el tribunal sentenciador.⁵⁰

Desde esta perspectiva, este tribunal constitucional tiene el trabajo de analizar las pruebas que integran el presente caso, para advertir, en su caso, aquellas que fueron obtenidas violando derechos humanos y, bajo la lógica anteriormente expuesta. En caso de que la Primera Sala de este Tribunal Constitucional advierta una circunstancia como la relatada anteriormente, tiene la responsabilidad de dejar sin efectos toda aquella prueba que haya sido obtenida en el marco de violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, todos los sujetos del ordenamiento jurídico están obligados a respetar los derechos fundamentales de cualquier persona en todas sus actuaciones,

⁴⁶ Michelle Taruffo, La prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 79, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Constanancio Carrasco Daza, La prueba ilícita en material electoral. Reglas de exclusión diseñadas desde la Constitución, México, UNAM-IJ, p. 135

⁴⁹ Idem

⁵⁰ Manuel Miranda Estrampes, La Prueba Ilícita. La regla de exclusión probatoria y sus excepciones, Barcelona, Revista Catalana de Seguridad Pública, p. 138

incluyendo la búsqueda y ofrecimiento de pruebas.⁵¹ Ahora bien, el artículo 20 constitucional, apartado A fracción IX expresamente dispone que «Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula».

De lo anterior, se desprende un mandato constitucional directo, que como tal, debe ser aplicado por la Primera Sala de la SCJN. Ciertamente es que originariamente la admisión de la prueba compete a los jueces de instrucción; sin embargo, cuando un tribunal de amparo se pronuncia sobre el hecho de la existencia de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como aquellas reglas que integran el debido proceso legal, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros, dicha competencia originaria debe actuar de la manera más amplia bajo las directrices propias de un tribunal constitucional garantista.

Esto no significa que el tribunal de amparo pueda sustituir en cualquier caso la interpretación de los hechos que ha realizado el tribunal ordinario, sino que únicamente tiene el deber de hacerlo en los casos que el material probatorio para imputar responsabilidad a una persona se haya obtenido en un proceso desarrollado a través de violaciones a los derechos humanos, circunstancia en la cual, como se ha relatado con antelación, nada impide al mismo a resolver las cuestiones de fondo para asegurar la máxima protección de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que exigir la nulidad de una prueba ilícita constituye un derecho que se construye con base en la condición de que una sentencia debe ser la conclusión de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para que sea válida (art. 14 CPEUM), la obligación del juzgador de conducirse con imparcialidad (art. 17 CPEUM) y el derecho a una defensa adecuada (art. 20, B, f. VIII CPEUM).⁵²

En caso de que se adviertan elementos que invaliden las pruebas de un caso, las mismas deben ser anuladas del proceso, pues es clara la transgresión de los

⁵¹ Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV de agosto de 2011, p. 226, Registro No. 161221. En adelante: Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA.

⁵² Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 10ª época, Jurisprudencia, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, Registro No. 160509. En adelante: Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO.

derechos fundamentales en este supuesto. Cuando las pruebas de cargo con las cuales se pretende imputar la responsabilidad de una persona carecen de licitud, un tribunal debe dejar sin efectos dichos medios probatorios, sin la necesidad de retornar el asunto al Tribunal Colegiado implicado. De no ser así, se pone en grave riesgo el derecho a la defensa, pues este Alto Tribunal podría transgredir el derecho a la prueba al no declarar nulos los elementos probatorios obtenidos en el marco de violaciones a los derechos humanos, con lo que este Tribunal Supremo podría estar evaluando de manera errónea las pruebas afectadas.

Reforzando lo anterior, uno de los principios rectores de nuestro sistema penal consagra que toda persona, en especial aquellas a las que se les ha imputado la comisión de algún delito, tienen derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente. Este derecho a que se presuma la inocencia se encuentra reconocido en los artículos 14 y 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La presunción de inocencia supone un estándar constitucional que necesariamente debe ser superado en el proceso mediante las pruebas para que el juzgador pueda llegar a dictar una sentencia en la que condene a una persona. Este derecho desde una perspectiva multifactorial "tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso."⁵³

Particularmente para este caso, debemos centrar la atención en dos de los tres elementos, la presunción de inocencia se compone de: la regla de trato y la regla de juicio. La regla de trato supone que el acusado no sea considerado culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra;⁵⁴ mandato aplicable tanto a las situaciones procesales como extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato y la consideración de no haber sido el autor de un delito mientras no

⁵³ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 124.

⁵⁴ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, XXV de enero de 2007, p. 2295, Registro No. 173507. En adelante: Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

se demuestre la culpabilidad a través de medios probatorios conformes con los principios fundamentales de todo Estado constitucional de derecho.⁵⁶ Por otro lado, la regla de juicio significa que deben respetarse los principios rectores del debido proceso y de los estándares más altos de prueba en materia penal en el devenir de todas las etapas procesales.⁵⁶

En consecuencia, como fue señalado anteriormente, este alto tribunal tiene la encomienda de garantizar que la totalidad de las pruebas que pretenden demostrar la responsabilidad penal de una persona acusada hayan sido suministradas por el órgano de acusación cumpliendo con los estándares constitucionales y legales que requiere la licitud de la misma,⁵⁷ pues toda aquella prueba viciada carece de la integridad necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y por ende debe resultar inutilizable, sin necesidad de turnar el caso al Tribunal Colegiado implicado.

En el caso en comento, es fundamental que el tribunal constitucional analice el material probatorio para advertir aquél que ha sido afectado por violaciones a los derechos humanos de la persona acusada, y que por tanto provoque la falta de fiabilidad de estos medios de prueba. Esta cuestión impacta directamente en los derechos de la persona acusada, pues toda persona tiene el derecho a que en caso de ser condenada, su condena esté basada en evidencia sólida.

En otras palabras, la cuestión en el presente caso es lo referente a la prueba no solamente estriba en dilucidar si las pruebas son o no suficientes para condenar a la recurrente sino también en el hecho de que las violaciones previas a la valoración de las pruebas puedan tornar éstas nulas, y en consecuencia, inutilizables. En particular, las pruebas impugnadas por la parte quejosa fueron:⁵⁸

| PRUEBA | FECHA | COMENTARIOS |
|---|--|---|
| Victima Testigo 1 Hombre que fue rescatado en el el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: | Durante la primera declaración este testigo identificó a , como participe en su secuestro y quien le había dado de comer durante su cautiverio. Dichas |

⁵⁶ Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, XXY de mayo de 2007, p. 1186, Registro No. 172433. En adelante: Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁶ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁷ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁸ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, p. 140.

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 de marzo de 2006 • 30 de mayo de 2006 | manifestaciones fueron reiteradas en diversas ampliaciones de la declaración inicial. |
| <p>Victima Testigo 2</p> <p>Mujer madre de testigo víctima 3 que fue rescatada en el día del montaje televisivo.</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de diciembre de 2005 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 de febrero de 2006 • 15 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Respecto a las declaraciones y ampliaciones rendidas por este testigo es importante señalar que durante la primera declaración la testigo no identificó a como una de las personas que participaron en su secuestro, sino que fue hasta 3 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo que la testigo afirmó reconocer la voz de la inculpada. |
| <p>Victima Testigo 3</p> <p>Hijo menor de edad de víctima testigo 2 que fue rescatado en el día del montaje televisivo</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de febrero de 2006 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Durante la primera declaración, el menor no reconoció ni la voz ni el físico de y narró que quien le habías acaso sangre había sido un hombre identificado como No fue sino hasta después de la publicación de los videos y de pláticas con su madre que el menor de edad modificó sus declaraciones señalando el reconocimiento de una mujer con acento raro y piel |
| <p>Testigo 4</p> <p>Mujer que comparece días después de exhibidos los videos señalando que reconoce a como la mujer que acechaba en el mercado a Víctima testigo 2</p> | <p>Declaraciones ministeriales de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 de febrero de 2006 • 1 de marzo de 2006 | | En relación con esta testimonial vale la pena señalar que la mujer acudió voluntariamente a rendir su declaración 5 días después de que las autoridades reportaran la existencia de un montaje televisivo. Nunca participó en el momento en que fue detenida. |
| <p>Parte Informativo</p> <p>Parte Informativo</p> <p>A</p> | <p>Documentos de fecha 9 de diciembre de 2006 y 17 de enero de 2006.</p> | | Las propias autoridades reconocieron que habían existido errores en las fechas y horas de la detención de |

En caso de descartar el material probatorio, y si el tribunal constitucional advierte que el órgano de acusación carece de elementos para superar el estándar que significa la presunción de inocencia, debe actuar de manera garantista, resolviendo el fondo de la cuestión. Por tanto, los derechos que protegen al acusado (presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e imparcialidad del juzgador) tienen que prevalecer frente a las violaciones cometidas por la autoridad en la construcción de su acusación. Es necesario enfatizar que la evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales y bajo los lineamientos que establece la Constitución debe ser el sustento de cualquier acusación que tenga por finalidad la restricción a los derechos y libertades de toda persona.

En el caso motivo del presente *Amicus Curiae*, es fundamental que el tribunal constitucional analice si de la lectura del material probatorio del caso, es posible advertir vicios y violaciones a los derechos humanos de la hoy acusada (tales como el testimonio de personas que fueron parte de una escenificación ajena a la realidad y que pudiesen haber contaminado irremediablemente tales pruebas) a la luz de los lineamientos establecidos en la Constitución y diversos tratados internacionales.

Por todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, tiene en sus manos el resarcimiento de las graves violaciones a los derechos humanos a través del cumplimiento del mandato directo de la Constitución de declarar nula y por ende, inutilizable toda prueba obtenida en violación a los derechos humanos.

Tal como en casos anteriores de violaciones que producen una afectación total al derecho de defensa y al debido proceso de la persona inculpada,⁵⁹ y una vez adoptada la postura garantista del Amparo Directo en Revisión referida en el primer apartado de este documento, el tribunal constitucional tiene la responsabilidad de resolver en consecuencia.

IV. 2. El derecho a la notificación consular

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante "Convención de Viena")⁶⁰, en su artículo 36 impone a los Estados diversas obligaciones en caso de arrestar, detener o mantener en prisión preventiva a un extranjero. La principal de estas obligaciones es que se notifique a la representación consular de donde sea nacional el detenido o la detenida.

Además, tal instrumento señala que deberá informarse al detenido sin dilación que tiene derecho a que se le comunique a su consulado de su detención, y que pueden asistirlo legalmente. La notificación realizada debe hacerse sin demora, y

⁵⁹ Amparo en revisión .../2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en revisión .../2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar.

⁶⁰ Ratificado por el Estado mexicano el 19 de marzo de 1967.

luego de ello existe la obligación de permitir al funcionario consular comunicarse libremente con su nacional.

Si bien, la Convención de Viena no es un tratado de derechos humanos, ya que su función principal de acuerdo a su preámbulo "no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos"⁶¹. Lo cierto es que, el contenido del artículo 36 si consagra una norma de derechos humanos, ya que como lo ha considerado la Corte Interamericana, la titularidad del derecho a la notificación consular corresponde al individuo.⁶²

Lo anterior rompe con el esquema tradicional del Derecho Internacional consistente en derechos y obligaciones recíprocas entre Estados⁶³. Acorde con ello, la Corte Internacional de Justicia en el caso refirió que el contenido del artículo 36 de la Convención de Viena concede derechos a los individuos⁶⁴.

En estas circunstancias, resultan de especial relevancia con el artículo primero constitucional, cuya redacción no limita la protección a aquella otorgada en los tratados que tradicionalmente son de derechos humanos, sino que la expande a todos los tratados que sin importar su materia tengan alguna disposición que reconozca derechos humanos.

Por lo tanto, el derecho a la notificación consular es un derecho humano del que gozan todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, ya que está contenido en un tratado del que es parte el Estado.

Contenido del derecho a la notificación consular.

Es necesario identificar los diferentes momentos a que hace referencia el artículo

⁶¹ Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - adoptada el 24 de abril de 1963, entró en vigor el 19 de marzo de 1967 y fue ratificada por México el 16 de junio de 1965. Preámbulo, párrafo 4. Párr. 80.

⁶² Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 19 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 19 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶⁴ International Court of Justice, Case (Germany v. United States of America), I.C.J. Reports 2001, Judgment of 27 June 2001, párr. 77.

36 de la Convención de Viena con la finalidad de especificar los derechos del individuo. En primer lugar, no importa cuál sea la situación en que se encuentre una persona, la representación consular del Estado que envía (Estado del cual es nacional la persona privada de libertad) tiene el derecho de comunicarse con su nacional en cualquier momento.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) al establecer que de analizar el artículo 36.1.a de la Convención de Viena, a la luz del artículo 5, incisos a, e, i, de la misma Convención se desprende el derecho a la comunicación consular.⁶⁵ Para la Corte IDH el derecho a la comunicación consular tiene la siguiente finalidad:

[...] la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia⁶⁶.

El tercer derecho, y de especial importancia en el presente caso, es la notificación consular, que se desprende de los incisos b) y c) del artículo 36 de la Convención de Viena y consiste en avisar al Estado que envía que un nacional fue detenido, arrestado o puesto en prisión preventiva. La realización de este derecho exige el cumplimiento de tres prerrogativas a favor del individuo⁶⁷:

- a) A que se le notifiquen sus derechos, que son la notificación consular y la asistencia consular. Esta obligación ha sido interpretada como parte de los derechos que deben hacerse conocer al inculpado en caso de ser detenido conforme al artículo 7.4 de la Convención Americana⁶⁸.
- b) El acceso efectivo a la notificación consular.

65 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 1/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 79.

66 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 1/99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 80.

67 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 153.

68 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

c) El derecho a la asistencia consular. Al respecto, este derecho puede ser renunciado por el interesado.

El derecho a la notificación consular protege diferentes bienes jurídicos, ya que garantiza el acceso a la justicia. Es fundamental que ante las condiciones de desigualdad a las que se enfrenta un extranjero y el desconocimiento del sistema jurídico del país, se le permita a la representación consular de su Estado prestarle auxilio a fin de eliminar esas diferencias y tener un trato justo y equitativo ante los Tribunales en los que se encuentre.

Al respecto la Corte Interamericana ha resaltado que *«el cónsul puede asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de libertad»*⁶⁹

Resulta relevante aclarar que el derecho a la libertad personal no es un derecho que únicamente se refiera a la libertad física, por lo que la notificación consular también forma parte del derecho a la libertad personal, lo anterior que ha asentado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que versa sobre la necesidad de dar a conocer los derechos que tienen las y los detenidos, lo que constituye una prevención de conductas ilegales o arbitrarias⁷⁰.

En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que la obligación de informar al detenido de sus derechos sin demora no recae en que el extranjero lo solicite; así como tampoco se cumple si las autoridades del Estado que envía se enteran de la detención por otros medios⁷¹. Esta comunicación entre el detenido y la representación consular deberá hacerse sin demora; lo cual es

69 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

70 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 154; Corte IDH. Caso Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 92.

⁷¹ International Court of Justice, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, párr. 95.

congruente con el derecho de comunicarse con una tercera persona para que se le brinde apoyo.

Aunado a todo lo anterior, el derecho a la notificación consular debe ser útil, lo que a criterio de la Comisión de Derecho Internacional, quien preparó el texto final de la Convención de Viena, significa que no debe nulificarse por las leyes o regulación del Estado que recibe⁷². Este efecto útil debe traducirse en que la notificación consular, debe hacerse desde el mismo momento de la detención, y hasta antes de que el detenido rinda su primera declaración⁷³.

Por todo lo anterior, el acceso efectivo al derecho a la notificación consular constituye uno de los pilares del debido proceso, ya que de acuerdo al artículo 8.2.d de la Convención Americana toda persona tiene derecho a "ser asistida por un defensor". Es claro que la inobservancia u obstrucción del detenido para ejercer o informarse de sus derechos dentro de un proceso legal afecta gravemente sus garantías judiciales y en consecuencia es una violación a sus derechos humanos.

En el caso de estudio, es necesario tomar en consideración todas las posibles afectaciones que puedan producirse a la quejosa, como consecuencia de la afectación a tales derechos.

Independientemente del momento de la detención, las autoridades mexicanas tienen la obligación de comunicarse por todos los medios disponibles y sin dilación con el consulado antes de tomar la primera declaración. En el caso concreto, la parte quejosa se niega a reconocer su primera declaración --del 9 de diciembre de 2005-- pues aunque reconoce la firma que plasmó en esa declaración, sostiene

⁷² International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission*, 1961, vol. II, pág. 113.

⁷³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 106; así como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución /08 Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, Principio V.

⁷⁴ Corte IDH. Caso *Vs. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 157; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 129.

que fue presionada y forzada a firmar y a poner su huella, además de que no le permitieron leer su propia declaración, afectaciones derivadas de la omisión del Ministerio Público de obtener esta primera declaración de _____ in que ésta hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular⁷⁵

Es evidente que la falta de este requisito hace ilusoria la protección otorgada por la Convención de Viena. En este sentido, es fundamental reconocer que en virtud de las consideraciones anteriormente planteadas, el derecho a la notificación consular debe ser considerado como una obligación de resultado, y no de medio o comportamiento, por lo que las autoridades, tienen la obligación de asegurar el pleno cumplimiento del mismo en todo proceso penal en donde esté involucrada una persona que sea nacional de un Estado distinto al de la nacionalidad de dicha persona.

Por tanto, es necesario tener en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de reparaciones al debido proceso, la cuál ha determinado que todos los actos procesales guardan una estrecha relación cronológica, lógica y teleológica, estos actos están encaminados a la solución de una controversia por medio de una sentencia; sin embargo la validez de los actos procesales afecta la validez misma de la sentencia.⁷⁶ Es por ello que *"si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá."*⁷⁷

Las graves violaciones al debido proceso legal y a la libertad personal causadas por la negación y la falta de efectividad del derecho a la notificación consular deberían ser motivos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la nulidad de un procedimiento penal en contra de una persona, ya que el carácter inmediato y la importancia de contar con la representación

⁷⁵ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:
Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

⁷⁶ Corte IDH. Caso _____ y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 218.

⁷⁷ Corte IDH. Caso _____ y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 219; Corte IDH. Caso _____ Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de agosto de 2010, considerando 14.

consular de su país de origen afectan de forma definitiva la sentencia en contra de esa persona.

Como ha quedado establecido, es de crucial importancia que la o el funcionario consular pueda comunicarse libremente con el acusado antes de la primera declaración de éste, con el objetivo de salvaguardar sus intereses. En otras palabras, este acto previene las detenciones arbitrarias.

En consecuencia, la detención y posterior declaración de una persona carece de la validez necesaria para motivar una sentencia condenatoria en su contra particularmente cuando se torna ilusoria la notificación consular y en consecuencia se vulneran tanto el debido proceso como la libertad personal.



DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE LA JUSTICIA
Y ENERGÍA
PROCURADURÍA GENERAL
DE LA DEFENSA

❖
PETITORIO

Con base en todo lo expuesto, a esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respetuosamente solicitamos que:

PRIMERO: Tenga por recibido el presente escrito en calidad de *amicus curiae*

SEGUNDO: Considere los razonamientos antes expuestos a fin de garantizar la máxima protección de los derechos humanos de la persona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**

DR.



c.c.p.: Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Para su conocimiento.
Ministro José Ramón Cossío Díaz. Para su conocimiento
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para su conocimiento
Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Para su conocimiento

LGP/MJMG/R/S/bs



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENCIA

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

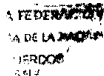
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011

QUEJOSA:

ASUNTO: AMICUS CURIAE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA LARREA

PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN



Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF)¹, comparezco ante esta SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente
documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión.

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIAS DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | 24 |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | |
| V. PETITORIO | 30 |



I. JUSTIFICACIÓN

El *amicus curiae* (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En nuestro sistema jurídico existen precedentes sobre la recepción y admisión de escritos de *amicus curiae* por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal. Asimismo, diversos tribunales internacionales reconocen esta figura jurídica como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares relevantes para la resolución de un caso, entre ellos se encuentra la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA LA EX YUGOSLAVIA y RUANDA, así como por la CORTE ESPECIAL PARA SIERRA LEONA.

En tal virtud, en nuestra actuación como *Amicus Curiae* se ofrecerán argumentos con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para su inminente fallo en relación con el caso al rubro citado.

Por último, se reitera que esta actuación tiene como interés la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, cuya labor permanente nos corresponde a todos y todas.

II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE

El principal interés de esta representación es mostrar a las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución del caso en estudio conlleva la necesidad de analizar los siguientes aspectos relacionados con la necesidad de asegurar que el juicio de amparo posibilite, en caso de advertir violaciones a los derechos humanos, la plena protección de éstos, asegurando la mayor protección de la persona, y en contrapartida, la falta de efectividad de una

sentencia dictada *sólo para determinados efectos* en el marco del juicio de amparo directo en revisión. En específico, se sostiene que:

- El otorgamiento de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* contraviene la naturaleza del juicio de amparo en tanto reduce los alcances de un recurso concebido para la protección de derechos humanos a la salvaguarda normativa del orden Constitucional.
- La concesión del amparo *sólo para determinados efectos* podría atentar contra la teleología e impedir la máxima realización del recurso, puesto que únicamente atendería a enmendar violaciones procesales sin ordenar la total reparación de los derechos violentados.
- La sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide a la quejosa el acceso a un recurso efectivo para reparar las violaciones a sus derechos humanos.
- La concesión de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* es contraria a la función jurisdiccional que las y los Ministros de esta Honorable Corte deben desempeñar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
- En caso de que el tribunal constitucional advierta violaciones a los derechos humanos, debe otorgar la mayor protección constitucional posible, resolviendo el fondo de la cuestión, más allá de las formalidades propias del amparo *sólo para determinados efectos*.



❖

III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Los debates planteados en medios de comunicación especializados, en foros de la sociedad civil, así como las discusiones suscitadas en el seno de este Máximo Tribunal en torno al presente caso, evidencian como uno de los principales temas para la resolución del presente asunto, la determinación de los alcances de la posible sentencia que

conceda el amparo a partir de la naturaleza de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa. Es decir, se ha identificado que el alcance de una posible sentencia que conceda el amparo está sujeto a la determinación de si las violaciones que se alegan son de carácter procedimental o sustancial. Así, en un esquema tradicional de cuño formalista, cuando existen violaciones de naturaleza procesal, el amparo se concedería *sólo para efectos* de subsanar la incorrecta aplicación e interpretación de la norma, mientras que por violaciones de naturaleza sustancial la sentencia se concedería de manera plena para subsanar todas las violaciones a derechos humanos.

En el caso concreto, resulta relevante guardar las precauciones necesarias para no reducir el análisis del asunto a la mera comprobación de violaciones de carácter procedimental que deriven en la concesión de un amparo *sólo para efectos* de subsanar los errores de la autoridad. Esta Comisión sostiene que la sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* limita los alcances del recurso e impide su realización como máximo instrumento de protección de los derechos fundamentales. Además, contraviene los estándares internacionales relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso adecuado y efectivo para subsanar violaciones a derechos humanos, puesto que no garantiza una reparación integral de los derechos que se alegan violados. En este contexto, se presentan los argumentos que sostienen que la figura de *amparo para efectos* no debe ser considerada por las y los Ministros de este Honorable Tribunal Constitucional al momento de dictar sentencia del caso en estudio, y que en caso de advertir violaciones a los derechos humanos de la hoy quejosa, debe conceder la más amplia protección constitucional:

III.1 EL AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO

En primer lugar, y para sostener que la concesión del amparo *para determinados efectos* es contraria a la teleología del juicio de amparo, es necesario exponer de manera breve la naturaleza jurídica del recurso en conocimiento de este Honorable Tribunal.

El amparo directo es el medio de impugnación que tiene por objeto revisar las resoluciones de los Tribunales del Estado para determinar si las mismas han sido

dictadas conforme a derecho o si tienen vicios que impliquen contravenciones a algún mandato constitucional.²

Desde los primeros momentos de su configuración, el amparo directo se caracterizó por la enérgica oposición de los constituyentes respecto a su establecimiento, ya que consideraban que éste nulificaría la administración de justicia local y comprometería la soberanía de los Estados, así como el prestigio de sus órganos judiciales.³ Por tal motivo, las personas que participaron en los debates, decidieron que, a fin de garantizar que no cualquier sentencia emitida por los órganos judiciales locales fuese revisada por tribunales federales, resultaba necesario limitar el objeto del juicio de amparo directo.⁴

Esta limitación, consistió en que los tribunales federales conocerían de las sentencias dictadas en la justicia local, sólo cuando los tribunales locales en sentencias definitivas, hubieren incurrido en violaciones a las leyes del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y que trascendieran al resultado del fallo; o cuando éstos hubiesen cometido violaciones en las sentencias o laudos definitivos.⁵ En otras palabras, establecieron que – de manera similar al *recurso de casación* – el amparo directo cumpliría con una doble función, a saber: 1) permitiría realizar impugnaciones de fondo sobre violaciones a los derechos de las personas;⁶ y 2) realizar una función de control sobre la aplicación incorrecta de una norma procesal.⁷

En este orden de ideas, es posible afirmar que la finalidad y el objeto del juicio de amparo directo es condicionar la validez y sujetar el contenido de las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, al cumplimiento del orden jurídico constitucional, en particular al respeto de los derechos humanos.⁸ En tal sentido, la propia Ley de amparo establece que la sentencia que conceda el amparo «*tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al*

² CASTILLO DEL VALLE, Alberto. *Ley de Amparo comentada*. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

³ Exposición de motivos, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la constitución política de los estados unidos mexicanos*, Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta No. 352., México, D.F., a 19 de marzo de 2009. pp.6.

⁴ Ibid.

⁵ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

⁶ Idem.

⁷ León Dorantes, Romeo. *El Juicio de amparo*. Tercera Edición. Editorial José Caciña. México, 1957.

⁸ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija»⁹

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que el amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, cuando existen impugnaciones ya sea procesales o materiales que requieran de interpretación constitucional, la facultad que se otorgó al Poder Judicial Federal para conocer sobre sentencias definitivas es restringida, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer al respecto.¹⁰

Cuando de la resolución dictada en amparo directo se pudiese advertir que existió por parte del Tribunal Colegiado, ya sea, la interpretación directa de un precepto de la Constitución; que subyace un problema de constitucionalidad planteado desde la demanda inicial, o bien, que el propio Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre alguno de estos dos temas¹¹, se cuenta con la posibilidad de interponer el denominado amparo directo en revisión.

Este amparo directo en revisión, del cual sólo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra regulado en los artículos 107, fracción IX de nuestra Constitución¹², así como en el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo¹³ y 21, fracción III, inciso a), de

⁹ Artículo 80 de la Ley de Amparo.

¹⁰ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 1/2009, Sentencia del día 2 de mayo de 2010. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión 1/2007. Quejosos . Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

¹³ Ley de Amparo. Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...) V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁴ como un medio de impugnación excepcional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo.¹⁵ De manera adicional, este recurso es considerado como un medio de impugnación excepcional, debido a que, por regla general, las resoluciones en juicios de amparo directo emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten ningún recurso, a menos que, como se ha señalado, se presenten las excepciones ya señaladas.¹⁶

Como es posible apreciar, los requisitos de procedencia del recurso de revisión persiguen como principal finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete definitivo de la Constitución, sea en última instancia quien determine si una norma se ajusta a la misma, o bien, quien fije el alcance y sentido jurídico de las disposiciones constitucionales.¹⁷

De esta manera, resulta evidente que el objeto con el que se promueve un recurso de revisión en el amparo directo estribaría en la búsqueda de obtener una sentencia que revoque o modifique la resolución recurrida, y que por tanto, los únicos efectos que debería llegar a producir, en caso de ser favorable para la parte quejosa, sería conceder la protección de la Justicia de la Unión en sentido pleno, tal y como lo establece la propia Ley de Amparo al mencionar la finalidad y efectos que debería tener una sentencia de amparo.

No obstante, a través de la práctica, el Poder Judicial desarrolló una fórmula ampliamente aceptada pero con un grave cuestionamiento estructural, que es el otorgamiento de esta protección sólo para determinados efectos. De esta manera, y dependiendo de si el amparo directo en revisión versa sobre impugnaciones de fondo o procesales, la sentencia dictada, bajo este esquema planteado, podría llegar a los siguientes resultados:

¹⁴ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)

¹⁵ AZUELA GÜITRON, Mariano. "Revisión en Amparo Directo". Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2009.

¹⁶ SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión. 2007. Quejosos. Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹⁷ REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno: III, febrero de 1996. -Tesis: 2a./J. 3/96. Página: 218

- 1) Si del análisis se desprende que existe una violación a un derecho fundamental, cuya trasgresión afectó de manera grave al quejoso, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión se tendría que conceder de **manera plena**.¹⁸ En este sentido, y tratándose de procesos penales, las violaciones graves a los derechos humanos del procesado, en especial, a la defensa adecuada y al debido proceso, llegaría a tener por efectos la inmediata libertad de la persona procesada.¹⁹
- 2) Sin embargo, cuando el análisis y la resolución versaran sobre impugnaciones procesales, la concesión del amparo se otorgaría solo **para efectos**, es decir, su alcance será únicamente decretar la nulidad de lo actuado y reenviar a la autoridad responsable para la reposición del procedimiento. Lo anterior, debido a que, en este esquema, se considera que un Tribunal Colegiado de Circuito —autoridad en principio competente para conocer del juicio de amparo directo— no tiene jurisdicción plena respecto a la controversia, por lo que la sentencia que otorgue la protección federal sería dictada **para efectos** de invalidar lo actuado por la autoridad responsable y para que en su caso, ésta dicte una nueva resolución en que se repare el error cometido.²⁰

El presente *amicus curiae*, aclarará precisamente cómo uno de los alcances que puede llegar a producir la sentencia dictada en el amparo directo en revisión —conceder el amparo **para efectos**— además de resultar contraria a la naturaleza propia del recurso de amparo y a los estándares internacionales de los recursos judiciales, no tiene cabida en las soluciones posibles que las y los juzgadores pueden adoptar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

III.2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

A continuación, y a efectos de exponer cómo el amparo para efectos no debería tener cabida en la conciencia de las y los juzgadores —en especial de un Tribunal

¹⁸ Algunos antecedentes sobre asuntos en que esta Primera Sala consideró que los efectos restitutorios de la sentencia no podrían consistir en otros que no fueran la inmediata libertad del procesado son: amparo de amparo en revisión /2008, amparo directo en revisión /2008, amparo directo /2010, amparo directo /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo en revisión /2010, amparo en revisión /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo directo en revisión /2010, amparo en revisión /2011, amparo en revisión /2011, amparo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011, amparo directo en revisión /2011 y amparo directo en revisión /2011.

¹⁹ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:

Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

²⁰ CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

Constitucional—, es necesario referirnos al papel que desempeñan dentro del marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En el modelo tradicional del Estado de Derecho, el papel de las y los jueces como órganos sujetos a la primacía de la ley se limitaba a la realización de una función técnica de aplicación de la ley, sin importar cual hubiese sido su contenido.²¹ No obstante, como consecuencia de llamada *segunda revolución en la historia jurídica* —que transformó al Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derecho— esta idea evolucionó. Dicha «revolución» tuvo como principal característica el establecimiento de constituciones rígidas que permitieron la integración del Estado de Derecho a través de la sujeción de la ley por parte de todos los poderes al Derecho y a la Constitución.²²

Sin embargo, esta sujeción —a diferencia del modelo tradicional de Estado de Derecho—, pasó a fundarse no en las formas y procedimientos de creación de leyes, sino en el contenido de las mismas. Es decir, bajo el surgimiento de este nuevo modelo del constitucionalismo o garantismo, la sujeción a la ley se modificó siendo ahora una sujeción no a la letra de la misma (formal), sino que debe atenderse a que la ley sea válida conforme a la Constitución y tratados. (material).²³

Desde esta perspectiva, la validez se concibe ya no como un concepto asociado a la mera existencia formal de una norma, sino como una sujeta al contenido de la misma, que debe estar ligado a la coherencia de sus significados con la Constitución, donde, además la valoración de esta coherencia le corresponderá al propio juzgador.²⁴ De esta manera, la interpretación judicial se convierte precisamente en un juicio sobre la ley misma, ya que le corresponde a las y los juzgadores la responsabilidad de elegir cuáles son los significados válidos de la ley, esto es, significados compatibles con las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales.²⁵

21 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función Judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

22 FERRAJOLI, Luigi. *Sobre los Derechos Fundamentales*. Revista Cuestiones Constitucionales. Número 15. Diciembre, 2006. P. 114.

23 OROZCO Hernández, Jesus J. *La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* en "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2003, número 18. P. 45.

24 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 27.

25 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 26.

Así pues, el constitucionalismo se erige como un sistema de vínculos sustanciales, prohibiciones y obligaciones impuestas precisamente por los principios inscritos, por lo general, en la primera parte de las Constituciones,²⁶ donde las y los juzgadores no pueden sujetarse a la ley de manera incondicionada y acrítica, sino que como consecuencia de la sujeción *material*, tienen la obligación de interpretar en sentido constitucional todas aquellas leyes que consideren inválidas.²⁷

Aunado a lo anterior, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho reconoce los principios como un componente esencial del orden jurídico e incorpora a los derechos fundamentales como parte de los mismos, cambiando así la relación entre el juez y la ley, pues mediante la sujeción a la Constitución se le asigna a la jurisdicción una función de garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad por parte del poder público.²⁸

En este sentido, es evidente que la función jurisdiccional, si bien puede estar relacionada con aspectos de legalidad, en ningún momento puede desprenderse de su principal objeto, es decir, garantizar los derechos fundamentales como contenido *material* de las normas constitucionales. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho los derechos fundamentales se erigen como normas "*sustanciales*" que determinan el contenido y los límites del resto de normas y decisiones que integran un Estado; constituyen lo que Ferrajoli llama la *esfera de lo indecible*.²⁹

Bajo este orden de ideas, y a la luz de una visión de carácter garantista, se debe tener en cuenta que la interpretación de los preceptos constitucionales se desarrollará en el marco del juicio de amparo activado para la salvaguarda de los derechos de la persona, y no así para la protección exclusivamente normativa del orden constitucional. Es decir, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a establecer criterios unitarios sobre la interpretación de la Constitución, en su carácter de

26 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

27 OROZCO Hernández, Jesús J. Ob cit. P. 49.

28 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. P. 25.

29 FERRAJOLI, Luigi. *Teoría de la Democracia. Dos Perspectivas comparadas*. Primera Edición. México, 2001. P.16.

Tribunal Constitucional también tiene como principal función la de ser garante de los derechos las personas, especialmente, en el marco del juicio de amparo.³⁰

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no existe duda respecto a que la procedencia del recurso de revisión se determinó en atención a que la defensa de la quejosa cuestionó no sólo la interpretación del sentido y alcance que el Tribunal Colegiado realizó de los siguientes preceptos constitucionales, sino también las violaciones a derechos humanos que de ellas se derivaron:

| Rubro | Precepto Constitucional | Determinación del Tribunal Colegiado |
|--|---|---|
| Principio de buena fe ministerial | Artículo 21 constitucional | El Tribunal Colegiado consideró que el montaje televisivo no violó esta garantía, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención. |
| Significado del término "sin demora" para efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público | Artículo 16 constitucional | El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término "inmediatamente" o "sin demora", dicha situación debe evaluarse en cada caso. |
| Violación al derecho de notificación consular | Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares | La afectación a este precepto vició el procedimiento, el Tribunal desentendió el principio de supremacía constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no está obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asesorado por su Consulado para tomarle su declaración. |
| Principio de Congruencia y Exhaustividad | Artículo 17 | En la valoración de la prueba, no se tomaron en consideración aquellas que aportó la recurrente en las primeras instancias. |
| Principio de presunción de inocencia | Artículo 20 | Según el Tribunal Colegiado, no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su exposición en los medios ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible impedir que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. |

Fuente: elaboración propia.

Por tales motivos, esta Comisión solicita a las y los Ministros de esta Suprema Corte que el análisis de constitucionalidad no se limite a la protección del orden constitucional, sino que se realice con la finalidad de constatar las posibles afectaciones a los derechos humanos, en lo general, y al debido proceso en lo particular, para que en caso de determine la vulneración de derechos se otorgue la más amplia protección constitucional, rompiendo la sujeción formalista del amparo para efectos, el cual, a juicio de esta institución, debería ser eliminado de la conciencia de las y los juzgadores democráticos.

³⁰ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

En particular, resulta esencial que las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan en cuenta que la resolución del amparo para efectos no sólo es contraria a la naturaleza propia del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, sino también a los estándares establecidos en términos del artículo 25 de la Convención Americana relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso rápido, adecuado y efectivo sencillo para la protección de sus derechos.

III.3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO

El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades del Estado, incluyendo a esta Corte Suprema, a interpretar todas las normas relativas a los derechos humanos de conformidad no solo con la Constitución, sino también de conformidad con los tratados internacionales de la materia y de los que México sea Estado Parte, en el sentido de otorgar en todo tiempo la protección más amplia al individuo. De igual manera, el párrafo primero de dicho artículo incorpora a nuestro máximo ordenamiento todas las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano.

En razón de lo anterior, y aun cuando esta Suprema Corte ha sentado algunos precedentes respecto la efectividad de los recursos, consideramos necesario recurrir a los estándares internacionales, particularmente a aquellos fijados en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a fin de garantizar la protección más amplia para la persona.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³¹, consagra el derecho de todas las personas a un recurso rápido, sencillo y efectivo:

Artículo 25. Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

³¹ Ratificada por México el 24 de marzo de 1981

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la noción de **efectividad del recurso** presenta dos aspectos: uno de carácter *normativo*, relacionado con la idoneidad del recurso y su capacidad para dar respuesta a la violación de derechos humanos; y el segundo de carácter *empírico*, relacionado con las condiciones que hacen posible que el recurso pueda cumplir con su objetivo.³²

En específico, la CoIDH se ha pronunciado sobre estas condiciones de la siguiente manera:

- a) **Adecuados:** implica que el recurso sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida.³³ El análisis de este requisito debe situarse en el plano del diseño normativo del recurso.
- b) **Efectivos:** un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.³⁴ La condición de **efectividad**, se correlaciona necesariamente con la rapidez y sencillez del recurso,³⁵ condiciones que deben de existir de manera copulativa en todos los recursos.³⁶

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *vs. México*, para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan

³² CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Septiembre, 2007.

³³ Corte IDH. Caso *Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.

³⁴ Corte IDH. Caso *Vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr.118.

³⁵ COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Año 2006, Número 5. Página 35.

³⁶ MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2003. P. 361

formalmente, sino que es preciso que tengan **efectividad** en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. Esta obligación implica que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.³⁷

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la interpretación del artículo 25 en relación con el artículo 8 de la Convención Americana deriva el derecho de acceso a la justicia que impone a los Estados la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), mismos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1).³⁸

Así las cosas, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano es constante al señalar que la garantía del acceso a la justicia implica suministrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos los recursos necesarios para alegar la afectación de sus derechos,³⁹ además, ha sido enfática al establecer que no basta con la sola existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.⁴⁰

En otras palabras, no resulta suficiente que un recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que es necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que tales recursos sean: 1) verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación y; 2) que puedan proporcionar una reparación.⁴¹

Ahora bien, en el caso concreto, las y los Ministros de esta Suprema Corte deben considerar que la *sentencia dictada para efectos* no cumpliría con los estándares anteriormente señalados, en tanto torna en ilusorio recurso de amparo directo en

³⁷ *Idem.*

³⁸ Corte IDH. Caso y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 21; Corte IDH. Caso vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2006. Serie C No 149., párr. 175.

³⁹ Corte IDH. Caso vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No 5.

⁴⁰ Corte IDH. Caso vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Junio de 2005. Serie C No 129. Párr. 93.

⁴¹ Corte IDH. Caso vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 129. Párr. 177.

revisión como instrumento de protección de derechos humanos.

Como indicamos, la **efectividad** de un recurso, implica la obligación de las autoridades de garantizar que el recurso sea realmente capaz de producir los resultados para los cuales fue creado, es decir, que pueda cumplir con su objeto.

En tal sentido, el amparo directo y el amparo directo en revisión fueron diseñados desde una perspectiva formalista propia de la época, como instrumentos capaces de producir dos resultados diferentes. Por una parte, ser concedidos sólo *para efectos* de subsanar los errores en el proceso o en un *sentido amplio de protección*, que se traduce en la total reparación de los derechos violentados por la autoridad.

El primero de estos resultados —amparo para efectos—, analizado bajo la lógica del juicio de amparo como máximo instrumento de protección de derechos humanos, convierte al amparo directo y máxime al amparo directo en revisión en recursos ilusorios para proteger la situación jurídica infringida, es decir, para proteger los derechos fundamentales del quejoso.

En lo que respecta al amparo directo en revisión, esto sucede debido a que, la concesión del amparo **para efectos**, tiene como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia, tras el análisis de una violación procesal —relacionada con aspectos de constitucionalidad— y al declarar la misma como fundada, regrese el expediente a la autoridad responsable para efectos de que la misma repare las violaciones que existieron en el proceso.

Tal situación, en realidad se traduce en la posibilidad que dentro de aquellos juicios, que por lo general llevan varios años de litigarse en primera y segunda instancia y luego ante un Tribunal Colegiado, exista otra violación procesal que varios meses después haga retornar el expediente a la Justicia Federal, provocando así que del mismo asunto deriven un número incierto de juicios de amparo; esto es lo que el Ministro Zaldívar ha llamado como: *el amparo ping pong*.

⁴²Dicha situación, por supuesto, implica que el juicio de amparo no sea, en términos del artículo 25, un recurso **rápido y sencillo** para la protección de derechos.

En este sentido, no basta con que el recurso de amparo directo en revisión tenga dentro de sus posibilidades el otorgamiento del amparo en un sentido pleno, sino que es necesario que el Tribunal, en caso de comprobar la violación a derechos humanos, realmente otorgue esta protección. De lo contrario, el propio Tribunal estaría dando pie a una cadena indefinida de juicios de amparo derivados de violaciones procesales, situación que además, retrasa, dificulta y sobrecarga la impartición de justicia en nuestro país atentando contra lo señalado en los artículos 17 y 23 de nuestra Constitución en relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo breve y en el marco de tres instancias.

De igual manera, es necesario establecer que la tarea de garantizar la **efectividad** del recurso, en términos del artículo 25 de la Convención Americana— recae en esta Suprema Corte de Justicia y se traduce en permitir la máxima realización del recurso mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en el sentido más amplio de protección.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo directo en revisión tiene como finalidad realizar un control respecto la interpretación de disposiciones constitucionales, lo cual inevitablemente se encuentra relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, toda vez que el conocimiento de este recurso se le reservó como una facultad exclusiva a la Suprema Corte para que, en su papel de Tribunal Constitucional, fuese el única que pudiese realizar un control de las normas constitucionales.

En el caso en concreto, y a juicio de esta institución de protección de los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional limitaría enormemente su papel como garante de derechos humanos si sólo se limita a realizar un análisis formal

⁴² ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. México, 2002.

respecto la interpretación de las normas por parte de la autoridad sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, máxime cuando la finalidad del propio recurso no es la obtención de un *control de constitucionalidad in abstracto*, sino conseguir la garantía y en su caso, la reparación de los derechos humanos violentados por una errónea interpretación y aplicación de preceptos constitucionales.

Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que el principio del *efecto útil* (*effete utile*) conlleva la necesidad de aplicar e interpretar las disposiciones con su objeto y fin, lo cual no sólo aplica respecto a las normas sustantivas de derechos humanos, sino también en relación con normas procesales.⁴³ En tal sentido, ordenar la concesión del amparo **para efectos** implicaría también contravenir el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, en tanto no se estaría garantizando el cumplimiento del objeto y fin del recurso, es decir, la concesión de un amparo que sólo ordene la corrección de errores en la aplicación de la ley o la Constitución pero que no resulte en la adecuada reparación a los derechos fundamentales de una persona que tiene el objeto y fin del juicio de amparo.

Por último, esta Comisión desea manifestar que esta Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente vinculada a ejercer un *control de convencionalidad*, que implica acatar y aplicar no sólo las disposiciones establecidas en dicha Convención, sino también las interpretaciones que de la misma, ha establecido la Corte Interamericana en los casos litigados contra el Estado mexicano.

En consecuencia, y debido a que el otorgamiento de un amparo para efectos no sólo contraviene el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, sino que también resulta incompatible con los estándares establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, en tanto convierte al juicio de amparo en un recurso ilusorio, es encargo de esta Suprema Corte de Justicia garantizar la mayor protección de la persona mediante el otorgamiento del amparo en el sentido más amplio posible.

⁴³ Corte IDH. Caso vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Cosas. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. Serie C. No. 134. Párr. 106

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL

A continuación, se procederá a realizar un análisis relacionado con elementos fundamentales que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tomar en consideración al momento de analizar las siguientes cuestiones de constitucionalidad que tuvieron como consecuencia la vulneración de los derechos de la parte quejosa.

IV.1. Valoración de Prueba Ilícita

En el presente caso, la valoración de la prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos constituye un elemento fundamental en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de última instancia dentro del Estado. En este sentido, una Corte Suprema desarrolla, entre otras, la función fundamental de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de carácter inferior, características que pueden ser extendidas a toda Corte Suprema.⁴⁴

La solemnidad del órgano jurisdiccional supremo garante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, debe asegurar el máximo respeto posible a los derechos de toda persona procesada pues *«si se quiere una justicia eficiente, coherente, confiable y racionalmente orientada hacia el ordenado desarrollo del derecho, entonces, debe configurarse un modelo de corte suprema capaz de tender hacia estos valores y de realizar estas finalidades»*⁴⁵.

En tal entendido, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona sólo puede garantizarse en el marco del debido proceso legal. Dentro de dicho marco se ubica el derecho a la prueba que constituye una de las garantías fundamentales de toda persona pues forma parte esencial del derecho de acción y defensa, sin ella dentro de un proceso los derechos humanos carecerían de sentido al no permitir a las partes acreditar por ningún medio disponible las

⁴⁴ Michelle Taruffo, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 205, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michelle-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁵ Ibid, p. 225

aseveraciones fácticas que son el fundamento de sus pretensiones y defensas.⁴⁶ Así, debe considerarse que el derecho a la prueba abarca tanto el derecho de toda parte para ofrecer la prueba relevante que esté en su posesión como el derecho a que toda prueba sea debidamente considerada por el tribunal.⁴⁷

Ahora bien, el primer estándar de valoración de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, que traza los parámetros necesarios para que «la actividad probatoria respete cabalmente los derechos fundamentales, exigencia indispensable para aspirar a un Estado democrático de derecho»⁴⁸. Desde luego, en este punto hablamos del concepto de constitución en sentido amplio, reconocido por el artículo 1º, específicamente a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, de 2011.

En la Constitución se encuentra el derecho a probar y las directrices para determinar cuándo resulta necesaria la exclusión de medios de prueba que atentan contra los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, deban ser anulados o excluidos.⁴⁹ Por lo tanto, la prueba ilícita, al haberse obtenido en transgresión a diversos derechos fundamentales, conlleva su necesaria inutilización procesal. Es decir, la prohibición de su valoración en juicio por el tribunal sentenciador.⁵⁰

Desde esta perspectiva, este tribunal constitucional tiene el trabajo de analizar las pruebas que integran el presente caso, para advertir, en su caso, aquellas que fueron obtenidas violando derechos humanos y, bajo la lógica anteriormente expuesta. En caso de que la Primera Sala de este Tribunal Constitucional advierta una circunstancia como la relatada anteriormente, tiene la responsabilidad de dejar sin efectos toda aquella prueba que haya sido obtenida en el marco de violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, todos los sujetos del ordenamiento jurídico están obligados a respetar los derechos fundamentales de cualquier persona en todas sus actuaciones,

⁴⁶ Michelle Taruffo, La prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 79, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Constanancio Carrasco Daza, La prueba ilícita en material electoral. Reglas de exclusión diseñadas desde la Constitución, México, UNAM-ILJ, p. 135

⁴⁹ Idem

⁵⁰ Manuel Miranda Estrampes, La Prueba Ilícita. La regla de exclusión probatoria y sus excepciones, Barcelona, Revista Catalana de Seguridad Pública, p. 138

incluyendo la búsqueda y ofrecimiento de pruebas.⁵¹ Ahora bien, el artículo 20 constitucional, apartado A fracción IX expresamente dispone que «Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula».

De lo anterior, se desprende un mandato constitucional directo, que como tal, debe ser aplicado por la Primera Sala de la SCJN. Ciertamente es que originariamente la admisión de la prueba compete a los jueces de instrucción; sin embargo, cuando un tribunal de amparo se pronuncia sobre el hecho de la existencia de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como aquellas reglas que integran el debido proceso legal, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros, dicha competencia originaria debe actuar de la manera más amplia bajo las directrices propias de un tribunal constitucional garantista.

Esto no significa que el tribunal de amparo pueda sustituir en cualquier caso la interpretación de los hechos que ha realizado el tribunal ordinario, sino que únicamente tiene el deber de hacerlo en los casos que el material probatorio para imputar responsabilidad a una persona se haya obtenido en un proceso desarrollado a través de violaciones a los derechos humanos, circunstancia en la cual, como se ha relatado con antelación, nada impide al mismo a resolver las cuestiones de fondo para asegurar la máxima protección de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que exigir la nulidad de una prueba ilícita constituye un derecho que se construye con base en la condición de que una sentencia debe ser la conclusión de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para que sea válida (art. 14 CPEUM), la obligación del juzgador de conducirse con imparcialidad (art. 17 CPEUM) y el derecho a una defensa adecuada (art. 20 B, f. VIII CPEUM).⁵²

En caso de que se adviertan elementos que invaliden las pruebas de un caso, las mismas deben ser anuladas del proceso, pues es clara la transgresión de los

⁵¹ Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV de agosto de 2011, p. 226, Registro No. 161221. En adelante: Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA.

⁵² Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 10ª época, Jurisprudencia, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, Registro No. 160509. En adelante: Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO.

derechos fundamentales en este supuesto. Cuando las pruebas de cargo con las cuales se pretende imputar la responsabilidad de una persona carecen de licitud, un tribunal debe dejar sin efectos dichos medios probatorios, sin la necesidad de retornar el asunto al Tribunal Colegiado implicado. De no ser así, se pone en grave riesgo el derecho a la defensa, pues este Alto Tribunal podría transgredir el derecho a la prueba al no declarar nulos los elementos probatorios obtenidos en el marco de violaciones a los derechos humanos, con lo que este Tribunal Supremo podría estar evaluando de manera errónea las pruebas afectadas.

Reforzando lo anterior, uno de los principios rectores de nuestro sistema penal consagra que toda persona, en especial aquellas a las que se les ha imputado la comisión de algún delito, tienen derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente. Este derecho a que se presuma la inocencia se encuentra reconocido en los artículos 14 y 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La presunción de inocencia supone un estándar constitucional que necesariamente debe ser superado en el proceso mediante las pruebas para que el juzgador pueda llegar a dictar una sentencia en la que condene a una persona. Este derecho desde una perspectiva multifactorial "tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso."⁵³

Particularmente para este caso, debemos centrar la atención en dos de los tres elementos, la presunción de inocencia se compone de: la regla de trato y la regla de juicio. La regla de trato supone que el acusado no sea considerado culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra;⁵⁴ mandato aplicable tanto a las situaciones procesales como extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato y la consideración de no haber sido el autor de un delito mientras no

⁵³ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 124.

⁵⁴ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, XXV de enero de 2007, p. 2295, Registro No. 173507. En adelante: Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

se demuestre la culpabilidad a través de medios probatorios conformes con los principios fundamentales de todo Estado constitucional de derecho.⁵⁵ Por otro lado, la regla de juicio significa que deben respetarse los principios rectores del debido proceso y de los estándares más altos de prueba en materia penal en el devenir de todas las etapas procesales.⁵⁶

En consecuencia, como fue señalado anteriormente, este alto tribunal tiene la encomienda de garantizar que la totalidad de las pruebas que pretenden demostrar la responsabilidad penal de una persona acusada hayan sido suministradas por el órgano de acusación cumpliendo con los estándares constitucionales y legales que requiere la licitud de la misma,⁵⁷ pues toda aquella prueba viciada carece de la integridad necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y por ende debe resultar inutilizable, sin necesidad de turnar el caso al Tribunal Colegiado implicado.

En el caso en comento, es fundamental que el tribunal constitucional analice el material probatorio para advertir aquél que ha sido afectado por violaciones a los derechos humanos de la persona acusada, y que por tanto provoque la falta de fiabilidad de estos medios de prueba. Esta cuestión impacta directamente en los derechos de la persona acusada, pues toda persona tiene el derecho a que en caso de ser condenada, su condena esté basada en evidencia sólida.

En otras palabras, la cuestión en el presente caso en lo referente a la prueba no solamente estriba en dilucidar si las pruebas son o no suficientes para condenar a la recurrente sino también en el hecho de que las violaciones previas a la valoración de las pruebas puedan tomar éstas nulas, y en consecuencia, inutilizables. En particular, las pruebas impugnadas por la parte quejosa fueron:⁵⁸

| PRUEBA | FECHA | COMENTARIOS |
|---|--|---|
| Victima Testigo 1 Hombre que fue rescatado en el el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: | Durante la primera declaración este testigo identificó a como partícipe en su secuestro y quien le había dado de comer durante su cautiverio. Dichas |

⁵⁵ Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, XXY de mayo de 2007, p. 1186, Registro No. 172433. En adelante: Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁶ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁷ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁸ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 140.

| | | | |
|--|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 de marzo de 2006 • 30 de mayo de 2006 | manifestaciones fueron reiteradas en diversas ampliaciones de la declaración inicial. |
| <p>Victima Testigo 2</p> <p>Mujer madre de testigo víctima 3 que fue rescatada en el día del montaje televisivo.</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de diciembre de 2005 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 de febrero de 2006 • 15 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | <p>Respecto a las declaraciones y ampliaciones rendidas por este testigo es importante señalar que durante la primera declaración la testigo no identificó a como una de las personas que participaron en su secuestro, sino que fue hasta 3 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo que la testigo afirmó reconocer la voz de la inculpada.</p> |
| <p>Victima Testigo 3</p> <p>Hijo menor de edad de víctima testigo 2 que fue rescatado en el día del montaje televisivo</p> | <p>Declaración ministerial de fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 de febrero de 2006 <p>Ampliaciones a la declaración de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | <p>Durante la primera declaración, el menor no reconoció ni la voz ni el físico de y narró que quien le había acoso sangre había sido un hombre identificado como . No fue sino hasta después de la publicación de los videos y de pláticas con su madre que el menor de edad modificó sus declaraciones señalando el reconocimiento de una mujer con acento raro y piel .</p> |
| <p>Testigo 4</p> <p>Mujer que comparece días después de exhibidos los videos señalando que reconoce a como la mujer que acechaba en el mercado a Víctima testigo 2</p> | <p>Declaraciones ministeriales de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 de febrero de 2006 • 1 de marzo de 2006 | | <p>En relación con esta testimonial vale la pena señalar que la mujer acudió voluntariamente a rendir su declaración 5 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo. Nunca participó en el momento en que fue detenida.</p> |
| <p>Parte Informativo</p> <p>Parte Informativo</p> | <p>Documentos de fecha 9 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006.</p> | | <p>Las propias autoridades reconocieron que habían existido errores en las horas de la detención de</p> |

En caso de descartar el material probatorio, y si el tribunal constitucional advierte que el órgano de acusación carece de elementos para superar el estándar que significa la presunción de inocencia, debe actuar de manera garantista, resolviendo el fondo de la cuestión. Por tanto, los derechos que protegen al acusado (presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e imparcialidad del juzgador) tienen que prevalecer frente a las violaciones cometidas por la autoridad en la construcción de su acusación. Es necesario enfatizar que la evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales y bajo los lineamientos que establece la Constitución debe ser el sustento de cualquier acusación que tenga por finalidad la restricción a los derechos y libertades de toda persona.

En el caso motivo del presente *Amicus Curiae*, es fundamental que el tribunal constitucional analice si de la lectura del material probatorio del caso, es posible advertir vicios y violaciones a los derechos humanos de la hoy acusada (tales como el testimonio de personas que fueron parte de una escenificación ajena a la realidad y que pudiesen haber contaminado irremediablemente tales pruebas) a la luz de los lineamientos establecidos en la Constitución y diversos tratados internacionales.

Por todo lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, tiene en sus manos el resarcimiento de las graves violaciones a los derechos humanos a través del cumplimiento del mandato directo de la Constitución de declarar nula y por ende, inutilizable toda prueba obtenida en violación a los derechos humanos.

Tal como en casos anteriores de violaciones que producen una afectación total al derecho de defensa y al debido proceso de la persona inculpada,⁵⁹ y una vez adoptada la postura garantista del Amparo Directo en Revisión referida en el primer apartado de este documento, el tribunal constitucional tiene la responsabilidad de resolver en consecuencia.

IV. 2. El derecho a la notificación consular

La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (en adelante "Convención de Viena")⁶⁰, en su artículo 36 impone a los Estados diversas obligaciones en caso de arrestar, detener o mantener en prisión preventiva a un extranjero. La principal de estas obligaciones es que se notifique a la representación consular de donde sea nacional el detenido o la detenida.

Además, tal instrumento señala que deberá informarse al detenido sin dilación que tiene derecho a que se le comunique a su consulado de su detención, y que pueden asistirlo legalmente. La notificación realizada debe hacerse sin demora, y

⁵⁹ Amparo en revisión .../2008. Ministra Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar. Resuelto el 6 de mayo de 2009. Aclaración de sentencia en el amparo en revisión .../2008. Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Jorge Ordoñez Escobar.

⁶⁰ Ratificado por el Estado mexicano el 19 de marzo de 1967

luego de ello existe la obligación de permitir al funcionario consular comunicarse libremente con su nacional.

Si bien, la Convención de Viena no es un tratado de derechos humanos, ya que su función principal de acuerdo a su preámbulo "no es beneficiar a particulares, sino garantizar a las oficinas consulares el eficaz desempeño de sus funciones en nombre de sus Estados respectivos"⁶¹. Lo cierto es que, el contenido del artículo 36 si consagra una norma de derechos humanos, ya que como lo ha considerado la Corte Interamericana, la titularidad del derecho a la notificación consular corresponde al individuo.⁶²

Lo anterior rompe con el esquema tradicional del Derecho Internacional consistente en derechos y obligaciones recíprocas entre Estados⁶³. Acorde con ello, la Corte Internacional de Justicia en el caso *refirió* que el contenido del artículo 36 de la Convención de Viena concede derechos a los individuos⁶⁴.

En estas circunstancias, resultan de especial relevancia con el artículo primero constitucional, cuya redacción no limita la protección a aquélla otorgada en los tratados que tradicionalmente son de derechos humanos, sino que *se expande* a todos los tratados que sin importar su materia tengan alguna disposición que reconozca derechos humanos.

Por lo tanto, el derecho a la notificación consular es un derecho humano del que gozan todas las personas bajo la jurisdicción del Estado mexicano, ya que está contenido en un tratado del que es parte el Estado.

Contenido del derecho a la notificación consular.

Es necesario identificar los diferentes momentos a que hace referencia el artículo

⁶¹ Convención de Viena sobre Relaciones Consulares - adoptada el 24 de abril de 1963, entró en vigor el 19 de marzo de 1967 y fue ratificada por México el 16 de junio de 1965. Preámbulo, párrafo 4. Párr. 80.

⁶² Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 19 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- 19 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 82.

⁶⁴ International Court of Justice, *Case (Germany v. United States of America)*, I.C.J. Reports 2001, Judgment of 27 June 2001, párr. 77.

36 de la Convención de Viena con la finalidad de especificar los derechos del individuo. En primer lugar, no importa cuál sea la situación en que se encuentre una persona, la representación consular del Estado que envía (Estado del cual es nacional la persona privada de libertad) tiene el derecho de comunicarse con su nacional en cualquier momento.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) al establecer que de analizar el artículo 36.1.a de la Convención de Viena, a la luz del artículo 5, incisos a, e, i, de la misma Convención se desprende el derecho a la comunicación consular.⁶⁵ Para la Corte IDH el derecho a la comunicación consular tiene la siguiente finalidad:

[...] la norma que consagra la comunicación consular tiene un doble propósito: reconocer el derecho de los Estados de asistir a sus nacionales a través de las actuaciones del funcionario consular y, en forma paralela, reconocer el derecho correlativo de que goza el nacional del Estado que envía para acceder al funcionario consular con el fin de procurar dicha asistencia⁶⁶.

El tercer derecho, y de especial importancia en el presente caso, es la notificación consular, que se desprende de los incisos b) y c) del artículo 36 de la Convención de Viena y consiste en avisar al Estado que envía que un nacional fue detenido, arrestado o puesto en prisión preventiva. La realización de este derecho exige el cumplimiento de tres prerrogativas a favor del individuo⁶⁷:

- a) A que se le notifiquen sus derechos, que son la notificación consular y la asistencia consular. Esta obligación ha sido interpretada como parte de los derechos que deben hacerse conocer al inculcado en caso de ser detenido conforme al artículo 7.4 de la Convención Americana⁶⁸.
- b) El acceso efectivo a la notificación consular.

65 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 79.

66 Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 80.

67 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 153.

68 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

- c) El derecho a la asistencia consular. Al respecto, este derecho puede ser renunciado por el interesado.

El derecho a la notificación consular protege diferentes bienes jurídicos, ya que garantiza el acceso a la justicia. Es fundamental que ante las condiciones de desigualdad a las que se enfrenta un extranjero y el desconocimiento del sistema jurídico del país, se le permita a la representación consular de su Estado prestarle auxilio a fin de eliminar esas diferencias y tener un trato justo y equitativo ante los Tribunales en los que se encuentre.

Al respecto la Corte Interamericana ha resaltado que «el cónsul puede asistir al detenido en diversos actos de defensa, como el otorgamiento o contratación de patrocinio letrado, la obtención de pruebas en el país de origen, la verificación de las condiciones en que se ejerce la asistencia legal y la observación de la situación de privación de libertad»⁶⁹

Resulta relevante aclarar que el derecho a la libertad personal no es un derecho que únicamente se refiera a la libertad física, por lo que la notificación consular también forma parte del derecho a la libertad personal, lo anterior ha sido asentado en el artículo 7.4 de la Convención Americana, que versa sobre la necesidad de dar a conocer los derechos que tienen las y los detenidos, lo que constituye una prevención de conductas ilegales o arbitrarias⁷⁰.

En el mismo sentido, la Corte Internacional de Justicia ha establecido que la obligación de informar al detenido de sus derechos sin demora no recae en que el extranjero lo solicite; así como tampoco se cumple si las autoridades del Estado que envía se enteran de la detención por otros medios⁷¹. Esta comunicación entre el detenido y la representación consular deberá hacerse sin demora; lo cual es

69 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 155.

70 Corte IDH. Caso Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 154; Corte IDH. Caso Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr.

92.
⁷¹ International Court of Justice, (Republic of Guinea v. Democratic Republic of the Congo), Judgment of 30 November 2010, párr. 95.

congruente con el derecho de comunicarse con una tercera persona para que se le brinde apoyo.

Aunado a todo lo anterior, el derecho a la notificación consular debe ser útil, lo que a criterio de la Comisión de Derecho Internacional, quien preparó el texto final de la Convención de Viena, significa que no debe nulificarse por las leyes o regulación del Estado que recibe⁷². Este efecto útil debe traducirse en que la notificación consular, debe hacerse desde el mismo momento de la detención, y hasta antes de que el detenido rinda su primera declaración⁷³.

Por todo lo anterior, el acceso efectivo al derecho a la notificación consular constituye uno de los pilares del debido proceso, ya que de acuerdo al artículo 8.2.d de la Convención Americana toda persona tiene derecho a "ser asistida por un defensor". Es claro que la inobservancia u obstrucción del detenido para ejercer o informarse de sus derechos dentro de un proceso legal afecta gravemente sus garantías judiciales y en consecuencia es una violación a sus derechos humanos.

En el caso de estudio, es necesario tomar en consideración todas las posibles afectaciones que puedan producirse a la quejosa, como consecuencia de la afectación a tales derechos.

Independientemente del momento de la detención, las autoridades mexicanas tienen la obligación de comunicarse por todos los medios disponibles y sin dilación con el consulado antes de tomar la primera declaración. En el caso concreto, la parte quejosa se niega a reconocer su primera declaración --del 9 de diciembre de 2005-- pues aunque reconoce la firma que plasmó en esa declaración, sostiene

⁷² International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission*, 1961, vol. II, pág. 113.

⁷³ Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 106; así como Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Resolución 1/08 *Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas*, Principio V.

⁷⁴ Corte IDH. Caso *Vs. Panamá*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie C No. 218, párr. 157; Corte IDH. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC- /99 del 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 129.

que fue presionada y forzada a firmar y a poner su huella, además de que no le permitieron leer su propia declaración, afectaciones derivadas de la omisión del Ministerio Público de obtener esta primera declaración de sin que ésta hubiese podido comunicarse con algún funcionario consular⁷⁵

Es evidente que la falta de este requisito hace ilusoria la protección otorgada por la Convención de Viena. En este sentido, es fundamental reconocer que en virtud de las consideraciones anteriormente planteadas, el derecho a la notificación consular debe ser considerado como una obligación de resultado, y no de medio o comportamiento, por lo que las autoridades, tienen la obligación de asegurar el pleno cumplimiento del mismo en todo proceso penal en donde esté involucrada una persona que sea nacional de un Estado distinto al de la nacionalidad de dicha persona.

Por tanto, es necesario tener en cuenta la línea jurisprudencial de la Corte IDH en materia de reparaciones al debido proceso, la cuál ha determinado que los actos procesales guardan una estrecha relación cronológica, lógica y teleológica, estos actos están encaminados a la solución de una controversia por medio de una sentencia; sin embargo la validez de los actos procesales afecta la validez misma de la sentencia.⁷⁶ Es por ello que *"si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá."*⁷⁷

Las graves violaciones al debido proceso legal y a la libertad personal causadas por la negación y la falta de efectividad del derecho a la notificación consular deberían ser motivos suficientes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare la nulidad de un procedimiento penal en contra de una persona, ya que el carácter inmediato y la importancia de contar con la representación

⁷⁵ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011. QUEJOSA Y RECURRENTE:

Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

⁷⁶ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 218.

⁷⁷ Corte IDH. Caso y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C No. 52, párr. 219; Corte IDH. Caso Vs. Perú. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 27 de agosto de 2010, considerando 14.

consular de su país de origen afectan de forma definitiva la sentencia en contra de esa persona.

Como ha quedado establecido, es de crucial importancia que la o el funcionario consular pueda comunicarse libremente con el acusado antes de la primera declaración de éste, con el objetivo de salvaguardar sus intereses. En otras palabras, este acto previene las detenciones arbitrarias.

En consecuencia, la detención y posterior declaración de una persona carece de la validez necesaria para motivar una sentencia condenatoria en su contra particularmente cuando se torna ilusoria la notificación consular y en consecuencia se vulneran tanto el debido proceso como la libertad personal.



❖
PETITORIO

Con base en todo lo expuesto, a esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN respetuosamente solicitamos que:

PRIMERO: Tenga por recibido el presente escrito en calidad de *amicus curiae*

SEGUNDO: Considere los razonamientos antes expuestos a fin de garantizar la máxima protección de los derechos humanos de la persona.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN**



DR.

c.c.p.: Ministro Jorge Marlo Pardo Rebolledo. Para su conocimiento.
Ministro José Ramón Cossío Díaz. Para su conocimiento
Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para su conocimiento
Ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Para su conocimiento

LGP/MJMG/R/S/gbs



**COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL DISTRITO FEDERAL**

P R E S I D E N C I A

México, D.F., a 17 de enero de 2013.

**AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN
517/2011**

QUEJOSA:

ASUNTO: AMICUS CURIAE

**MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR
LELO DE LA LARREA**

**PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA DE
JUSTICIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN**

Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL (CDHDF)¹, comparezco ante esta SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (SCJN) con el fin de allegar el presente documento **AMICUS CURIAE**, promovido por esta Comisión.

¹ Organismo público autónomo creado en virtud del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

| CONTENIDO | PÁGINA |
|---|--------|
| I. JUSTIFICACIÓN | 3 |
| II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE | 3 |
| | 4 |
| III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 5 |
| III. 1. AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO | |
| III. 2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO | 9 |
| III. 3. SOBRE LAS SENTENCIAS DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO | 12 |
| IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL | 17 |
| | 18 |
| IV. 1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ILÍCITA | 24 |
| IV. 2. EL DERECHO A LA NOTIFICACIÓN CONSULAR | |
| V. PETITORIO | 30 |



I. JUSTIFICACIÓN

El *amicus curiae* (amigo de la corte o amigo del tribunal) es la opinión jurídica y voluntaria que ofrecen terceros ante un Tribunal para colaborar con la resolución de un proceso.

En nuestro sistema jurídico existen precedentes sobre la recepción y admisión de escritos de *amicus curiae* por la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, lo cual refleja la transparencia en el trabajo del Máximo Tribunal. Asimismo, diversos tribunales internacionales reconocen esta figura jurídica como una herramienta disponible al juzgador para ayudar a clarificar criterios y estándares relevantes para la resolución de un caso, entre ellos se encuentra la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, LA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA, el TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, los TRIBUNALES PENALES INTERNACIONALES PARA LA EX YUGOSLAVIA y RUANDA, así como por la CORTE ESPECIAL PARA SIERRA LEONA.

En tal virtud, en nuestra actuación como *Amicus Curiae* se ofrecerán argumentos con la finalidad de allegar a este Honorable Tribunal elementos jurídicos de utilidad para su inminente fallo en relación con el caso al rubro citado.

Por último, se reitera que esta actuación tiene como interés la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en tanto conciencia jurídica y ética de la humanidad, cuya labor permanente nos corresponde a todos y todas.

II. OBJETO DEL AMICUS CURIAE

El principal interés de esta representación es mostrar a las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que la resolución del caso en estudio conlleva la necesidad de analizar los siguientes aspectos relacionados con la necesidad de asegurar que el juicio de amparo posibilite, en caso de advertir violaciones a los derechos humanos, la plena protección de éstos, asegurando la mayor protección de la persona, y en contrapartida, la falta de efectividad de una

sentencia dictada *sólo para determinados efectos* en el marco del juicio de amparo directo en revisión. En específico, se sostiene que:

- El otorgamiento de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* contraviene la naturaleza del juicio de amparo en tanto reduce los alcances de un recurso concebido para la protección de derechos humanos a la salvaguarda normativa del orden Constitucional.
- La concesión del amparo *sólo para determinados efectos* podría atentar contra la teleología e impedir la máxima realización del recurso, puesto que únicamente atendería a enmendar violaciones procesales sin ordenar la total reparación de los derechos violentados.
- La sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que impide a la quejosa el acceso a un recurso efectivo para reparar las violaciones a sus derechos humanos.
- La concesión de la sentencia de amparo *sólo para determinados efectos* es contraria a la función jurisdiccional que las y los Ministros de este Honorable Corte deben desempeñar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.
- En caso de que el tribunal constitucional advierta violaciones a los derechos humanos, debe otorgar la mayor protección constitucional posible, resolviendo el fondo de la cuestión, más allá de las formalidades propias del amparo *sólo para determinados efectos*.



III. LA CONCESIÓN DEL AMPARO SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS EN EL MARCO DE UN ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Los debates planteados en medios de comunicación especializados, en foros de la sociedad civil, así como las discusiones suscitadas en el seno de este Máximo Tribunal en torno al presente caso, evidencian como uno de los principales temas para la resolución del presente asunto, la determinación de los alcances de la posible sentencia que

conceda el amparo a partir de la naturaleza de los conceptos de violación alegados por la parte quejosa. Es decir, se ha identificado que el alcance de una posible sentencia que conceda el amparo está sujeto a la determinación de si las violaciones que se alegan son de carácter procedimental o sustancial. Así, en un esquema tradicional de cuño formalista, cuando existen violaciones de naturaleza procesal, el amparo se concedería *sólo para efectos* de subsanar la incorrecta aplicación e interpretación de la norma, mientras que por violaciones de naturaleza sustancial la sentencia se concedería de manera plena para subsanar todas las violaciones a derechos humanos.

En el caso concreto, resulta relevante guardar las precauciones necesarias para no reducir el análisis del asunto a la mera comprobación de violaciones de carácter procedimental que deriven en la concesión de un amparo *sólo para efectos* de subsanar los errores de la autoridad. Esta Comisión sostiene que la sentencia de amparo dictada *sólo para determinados efectos* limita los alcances del recurso e impide su realización como máximo instrumento de protección de los derechos fundamentales. Además, contraviene los estándares internacionales relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso adecuado y efectivo para subsanar violaciones a derechos humanos, puesto que no garantiza una reparación integral de los derechos que se alegan violentados. En este contexto, se presentan los argumentos que sostienen que la figura del *amparo para efectos* no debe ser considerada por las y los Ministros de este Honorable Tribunal Constitucional al momento de dictar sentencia del caso en estudio, y que en caso de advertir violaciones a los derechos humanos de la hoy quejosa, debe conceder la más amplia protección constitucional:

III.1 EL AMPARO DIRECTO EN EL SISTEMA MEXICANO

En primer lugar, y para sostener que la concesión del amparo *para determinados efectos* es contraria a la teleología del juicio de amparo, es necesario exponer de manera breve la naturaleza jurídica del recurso en conocimiento de este Honorable Tribunal.

El amparo directo es el medio de impugnación que tiene por objeto revisar las resoluciones de los Tribunales del Estado para determinar si las mismas han sido

dictadas conforme a derecho o si tienen vicios que impliquen contravenciones a algún mandato constitucional.²

Desde los primeros momentos de su configuración, el amparo directo se caracterizó por la enérgica oposición de los constituyentes respecto a su establecimiento, ya que consideraban que éste nulificaría la administración de justicia local y comprometería la soberanía de los Estados, así como el prestigio de sus órganos judiciales.³ Por tal motivo, las personas que participaron en los debates, decidieron que, a fin de garantizar que no cualquier sentencia emitida por los órganos judiciales locales fuese revisada por tribunales federales, resultaba necesario limitar el objeto del juicio de amparo directo.⁴

Esta limitación, consistió en que los tribunales federales conocerían de las sentencias dictadas en la justicia local, sólo cuando los tribunales locales en sentencias definitivas, hubieren incurrido en violaciones a las leyes del procedimiento que afectaran las defensas del quejoso y que trascendieran al resultado del fallo; o cuando éstos hubiesen cometido violaciones en las sentencias o laudos definitivos.⁵ En otras palabras, establecieron que – de manera similar al *recurso de casación* – el amparo directo cumpliría con una doble función, a saber: 1) permitiría realizar impugnaciones de fondo sobre violaciones a los derechos de las personas;⁶ y 2) realizar una función de control sobre la aplicación incorrecta de una norma procesal.⁷

En este orden de ideas, es posible afirmar que la finalidad y el objeto del juicio de amparo directo es condicionar la validez y sujetar el contenido de las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio, al cumplimiento del orden jurídico constitucional, en particular al respeto de los derechos humanos.⁸ En tal sentido, la propia Ley de amparo establece que la sentencia que conceda el amparo *«tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al*

² CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

³ Exposición de motivos, *Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la constitución política de los estados unidos mexicanos*, Grupo Parlamentario del PRI, Gaceta No. 352., México, D.F., a 19 de marzo de 2009.pp.6.

⁴ Ibid.

⁵ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

⁶ Idem.

⁷ León Dorantes, Romeo. El Juicio de amparo. Tercera Edición. Editorial José Caciña. México, 1957.

⁸ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija»⁹

Bajo este orden de ideas, es necesario puntualizar que el amparo directo es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, cuando existen impugnaciones ya sea procesales o materiales que requieran de interpretación constitucional, la facultad que se otorgó al Poder Judicial Federal para conocer sobre sentencias definitivas es restringida, ya que sólo la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer al respecto.¹⁰

Cuando de la resolución dictada en amparo directo se pudiese advertir que existió por parte del Tribunal Colegiado, ya sea, la interpretación directa de un precepto de la Constitución; que subyace un problema de constitucionalidad planteado desde la demanda inicial; o bien, que el propio Tribunal Colegiado omitió pronunciarse sobre alguno de estos dos temas, se cuenta con la posibilidad de interponer el denominado amparo directo en revisión.

Este amparo directo en revisión, del cuál sólo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra regulado en los artículos 107 fracción IX de nuestra Constitución¹², así como en el artículo 83, fracción V de la Ley de Amparo¹³ y 21, fracción III, inciso a), de

⁹ Artículo 80 Ley de Amparo.

¹⁰ NATARÉN NANDAYAPA, Carlos. "Breves reflexiones sobre las funciones del amparo para efectos y las propuestas de su reforma" en *La ciencia del derecho procesal constitucional. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio*. Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2008.

¹¹ Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión /2009, Sentencia del día 2 de mayo de 2010. Ponente: Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión /2007. Quejosos . Ministro Ponente Sergio Vals Hernández.

¹² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras;

¹³ Ley de Amparo. Artículo 83.- Procede el recurso de revisión: (...)V.- Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación¹⁴ como un medio de impugnación excepcional contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo.¹⁵ De manera adicional, este recurso es considerado como un medio de impugnación excepcional, debido a que, por regla general, las resoluciones en juicios de amparo directo emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten ningún recurso, a menos que, como se ha señalado, se presenten las excepciones ya señaladas.¹⁶

Como es posible apreciar, los requisitos de procedencia del recurso de revisión persiguen como principal finalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intérprete definitivo de la Constitución, sea en última instancia quien determine si una norma se ajusta a la misma, o bien, quien fije el alcance y sentido jurídico de las disposiciones constitucionales.¹⁷

De esta manera, resulta evidente que el objeto con el que se promueve un recurso de revisión en el amparo directo estribaría en la búsqueda de obtener una sentencia que revoque o modifique la resolución recurrida, y que por tanto, los únicos efectos que debería llegar a producir, en caso de ser favorable para la parte quejosa, sería conceder la protección de la Justicia de la Unión en sentido pleno, tal y como lo establece la propia Ley de Amparo al mencionar la finalidad y efectos que debería tener una sentencia de amparo.

No obstante, a través de la práctica, el Poder Judicial desarrolló una fórmula ampliamente aceptada pero con un grave cuestionamiento estructural, que es el otorgamiento de esta protección sólo para determinados efectos. De esta manera, y dependiendo, si el amparo directo en revisión versa sobre impugnaciones de fondo o procesales, la sentencia dictada, bajo este esquema planteado, podría llegar a los siguientes resultados:

¹⁴ Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas: (...) III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito:

a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el Presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el Jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional; (...)

¹⁵ AZUELA GÜITRON, Mariano. "Revisión en Amparo Directo". Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2009.

¹⁶ SCJN. Primera Sala. Amparo Directo en Revisión. 2007. Quejosos

Ministro Ponente

Sergio Vals Hernández.

¹⁷ REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS DE SU PROCEDENCIA. Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: III, febrero de 1996. -Tesis: 2a./J. 3/96. Página: 218

1) Si del análisis se desprende que existe una violación a un derecho fundamental, cuya trasgresión afectó de manera grave al quejoso, la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión se tendría que conceder de **manera plena**.¹⁸ En este sentido, y tratándose de procesos penales, las violaciones graves a los derechos humanos del procesado, en especial, a la defensa adecuada y al debido proceso, llegaría a tener por efectos la inmediata libertad de la persona procesada.¹⁹

2) Sin embargo, cuando el análisis y la resolución versaran sobre impugnaciones procesales, la concesión del amparo se otorgaría solo **para efectos**, es decir, su alcance será únicamente decretar la nulidad de lo actuado y reenviar a la autoridad responsable para la reposición del procedimiento. Lo anterior, debido a que, en este esquema, se considera que un Tribunal Colegiado de Circuito —autoridad en principio competente para conocer del juicio de amparo directo— no tiene jurisdicción plena respecto a la controversia, por lo que la sentencia que otorgue la protección federal sería dictada para efectos de invalidar lo actuado por la autoridad responsable y para que en su caso, esta dicte una nueva resolución en que se repare el error cometido.²⁰

El presente *amicus curiae*, aclarará precisamente cómo uno de los alcances que puede llegar a producir la sentencia dictada en el amparo directo en revisión —conceder el amparo ~~para efectos~~— además de resultar contraria a la naturaleza propia del recurso de amparo y a los estándares internacionales de los recursos judiciales, no tiene cabida en las soluciones posibles que las y los juzgadores pueden adoptar en el marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

III.2. SOBRE EL PAPEL DE LAS Y LOS JUZGADORES EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

A continuación, y a efectos de exponer cómo el amparo para efectos no debería tener cabida en la conciencia de las y los juzgadores —en especial de un Tribunal

[illegible]

¹⁹ AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 517/2011, QUEJOSA Y RECURRENTE: Proyecto del MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

²⁰ CASTILLO DEL VALLE, Alberto. Ley de Amparo comentada. Ediciones Jurídicas Alama. Décima Edición. México, 2008. página 708.

Constitucional—, es necesario referirnos al papel que desempeñan dentro del marco de un auténtico Estado Constitucional y Democrático de Derecho.

En el modelo tradicional del Estado de Derecho, el papel de las y los jueces como órganos sujetos a la primacía de la ley se limitaba a la realización de una función técnica de aplicación de la ley, sin importar cual hubiese sido su contenido.²¹ No obstante, como consecuencia de llamada *segunda revolución en la historia jurídica* —que transformó al Estado de Derecho en Estado Constitucional de Derecho— esta idea evolucionó. Dicha «revolución» tuvo como principal característica el establecimiento de constituciones rígidas que permitieron la integración del Estado de Derecho a través de la sujeción de la ley por parte de todos los poderes al Derecho y a la Constitución.²²

Sin embargo, esta sujeción —a diferencia del modelo tradicional de Estado de Derecho—, pasó a fundarse no en las formas y procedimientos de creación de leyes, sino en el contenido de las mismas. Es decir, bajo el surgimiento de este nuevo modelo del constitucionalismo o garantismo, la sujeción a la ley se modificó siendo ahora una sujeción no a la letra de la misma (formal), sino que debe atenderse a que la ley sea válida conforme a la Constitución y tratados. (material).²³

Desde esta perspectiva, la validez se concibe ya no como un concepto asociado a la mera existencia formal de una norma, sino como una sujeta al contenido de la misma, que debe estar ligado a la coherencia de sus significados con la Constitución, donde además la valoración de esta coherencia le corresponderá al propio juzgador.²⁴ De esta manera, la interpretación judicial se convierte precisamente en un juicio sobre la ley misma, ya que le corresponde a las y los juzgadores la responsabilidad de elegir cuáles son los significados válidos de la ley, esto es, significados compatibles con las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales.²⁵

21 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

22 FERRAJOLI, Luigi. *Sobre los Derechos Fundamentales*. Revista Cuestiones Constitucionales. Número 15. Diciembre, 2006. P. 114.

23 OROZCO Hernández, Jesus J. *La función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación* en "Justicia Electoral". Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 2003, número 18. P. 45.

24 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 27.

25 FERRAJOLI, Luigi. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. Editorial Trotta. Cuarta Edición. Madrid, 2004. P. 26.

Así pues, el constitucionalismo se erige como un sistema de vínculos sustanciales, prohibiciones y obligaciones impuestas precisamente por los principios inscritos, por lo general, en la primera parte de las Constituciones,²⁶ donde las y los juzgadores no pueden sujetarse a la ley de manera incondicionada y acrítica, sino que como consecuencia de la sujeción *material*, tienen la obligación de interpretar en sentido constitucional todas aquellas leyes que consideren inválidas.²⁷

Aunado a lo anterior, el Estado Constitucional y Democrático de Derecho reconoce los principios como un componente esencial del orden jurídico e incorpora a los derechos fundamentales como parte de los mismos, cambiando así la relación entre el juez y la ley, pues mediante la sujeción a la Constitución se le asigna a la jurisdicción una función de garantía de los derechos fundamentales de las personas frente a las violaciones de cualquier nivel de legalidad por parte del poder público.²⁸

En este sentido, es evidente que la función jurisdiccional, si bien puede estar relacionada con aspectos de legalidad, en ningún momento puede desprenderse de su principal objeto, es decir, garantizar los derechos fundamentales como contenido *material* de las normas constitucionales. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho los derechos fundamentales se erigen como normas "*sustanciales*" que determinan el contenido y los límites del resto de normas y decisiones que integran un Estado, ~~constituyen~~ lo que Ferrajoli llama la *esfera de lo indecible*.²⁹

Bajo este orden de ideas, y a la luz de una visión de carácter garantista, se debe tener en cuenta que la interpretación de los preceptos constitucionales se desarrollará en el marco del juicio de amparo activado para la salvaguarda de los derechos de la persona, y no así para la protección exclusivamente normativa del orden constitucional. Es decir, si bien es cierto que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra obligada a establecer criterios unitarios sobre la interpretación de la Constitución, en su carácter de

26 FERRAJOLI, Luigi. *El papel de la Función judicial en el Estado de Derecho* en "Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional de Derecho". Primera Edición. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Universidad Nacional Autónoma de México. México, 2005.

27 OROZCO Hernández, Jesús J. Ob cit. P. 49.

28 FERRAJOLI, Luigi. Ob. Cit. *Derechos y Garantías. La ley del más débil*. P. 25.

29 FERRAJOLI, Luigi. *Teoría de la Democracia. Dos Perspectivas comparadas*. Primera Edición. México, 2001. P.16.

Tribunal Constitucional también tiene como principal función la de ser garante de los derechos las personas, especialmente, en el marco del juicio de amparo.³⁰

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso no existe duda respecto a que la procedencia del recurso de revisión se determinó en atención a que la defensa de la quejosa cuestionó no sólo la interpretación del sentido y alcance que el Tribunal Colegiado realizó de los siguientes preceptos constitucionales, sino también las violaciones a derechos humanos que de ellas se derivaron:

| Rubro | Precepto Constitucional | Determinación del Tribunal Colegiado |
|--|---|---|
| Principio de buena fe ministerial | Artículo 21 constitucional | El Tribunal Colegiado consideró que el montaje televisivo no violó esta garantía, toda vez que el montaje no se utilizó como prueba en contra de la quejosa, además que, aún y de existir mala fe en tales hechos, ello no resultaría imputable a las autoridades que llevaron a cabo la detención. |
| Significado del término "sin demora" para efectos de la puesta a disposición de los detenidos ante el Ministerio Público | Artículo 16 constitucional | El Tribunal Colegiado señaló que no es posible medir en horas y minutos el término "inmediatamente" o "sin demora", dicha situación debe evaluarse en cada caso. |
| Violación al derecho de notificación consular | Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares | La afectación a este precepto vició el procedimiento, el Tribunal desentendió el principio de supremacía constitucional. El Tribunal Colegiado de Circuito consideró que el Ministerio Público no está obligado a esperar a que un extranjero se encuentre asistido por su Consulado para tomarle su declaración. |
| Principio de Congruencia y Exhaustividad | Artículo 17 | En la valoración de la prueba no se tomaron en consideración aquellas que aportó la recurrente en las primeras instancias. |
| Principio de presunción de inocencia | Artículo 20 | Según el Tribunal Colegiado, no se violó el derecho a la presunción de inocencia de la quejosa en atención a que ni su deposición en los medios ni los videos de la escenificación ajena a la realidad fueron considerados como pruebas en su contra. Además, es imposible que las víctimas de un delito se enteren de lo que se transmite en los medios de comunicación. |

Fuente: elaboración propia.

Por tales motivos, esta Comisión solicita a las y los Ministros de esta Suprema Corte que el análisis de constitucionalidad no se limite a la protección del orden constitucional, sino que se realice con la finalidad de constatar las posibles afectaciones a los derechos humanos, en lo general, y al debido proceso en lo particular, para que en caso de determine la vulneración de derechos se otorgue la más amplia protección constitucional, rompiendo la sujeción formalista del amparo para efectos, el cual, a juicio de esta institución, debería ser eliminado de la conciencia de las y los juzgadores democráticos.

³⁰ Luna Ramos, Margarita. "Federalismo Judicial: la procedencia del amparo directo contra sentencias de tribunales judiciales locales en materia de derechos humanos" en *El juicio de amparo. A 160 años de la primera sentencia*. Cord. Ferrer Mac-Gregor. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México, 2011.

En particular, resulta esencial que las y los Ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengan en cuenta que la resolución del amparo para efectos no sólo es contraria a la naturaleza propia del juicio de amparo como instrumento de protección de derechos humanos, sino también a los estándares establecidos en términos del artículo 25 de la Convención Americana relacionados con el derecho de todas las personas a acceder a un recurso rápido, adecuado y efectivo sencillo para la protección de sus derechos.

III.3. SOBRE LAS SENTENCIA DE AMPARO PARA DETERMINADOS EFECTOS Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE UN RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO

El artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades del Estado, incluyendo a esta Corte Suprema, a interpretar todas las normas relativas a los derechos humanos de conformidad no sólo con la Constitución, sino también de conformidad con los tratados internacionales de la materia y de los que México sea Estado Parte, en el sentido de otorgar en todo tiempo la protección más amplia al individuo. De igual manera, el párrafo primero de dicho artículo incorpora a nuestro máximo ordenamiento todas las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por el Estado mexicano.

En razón de lo anterior, y aun cuando esta Suprema Corte ha sentado algunos precedentes respecto la efectividad de los recursos, consideramos necesario recurrir a los estándares internacionales, particularmente a aquellos fijados en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a fin de garantizar la protección más amplia para la persona.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³¹, consagra el derecho de todas las personas a un recurso rápido, sencillo y efectivo:

Artículo 25. Protección Judicial.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos

³¹ Ratificada por México el 24 de marzo de 1981

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

Según la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), la noción de **efectividad del recurso** presenta dos aspectos: uno de carácter *normativo*, relacionado con la idoneidad del recurso y su capacidad para dar respuesta a la violación de derechos humanos; y el segundo de carácter *empírico*, relacionado con las condiciones que hacen posible que el recurso pueda cumplir con su objetivo.³²

En específico, la CoIDH se ha pronunciado sobre estas condiciones de la siguiente manera:

- a) **Adecuados:** implica que el recurso sea idóneo para proteger la situación jurídica infringida.³³ El análisis de este requisito debe situarse en el plano del diseño normativo del recurso.
- b) **Efectivos:** un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.³⁴ La condición de **efectividad**, se correlaciona necesariamente con la rapidez y sencillez del recurso,³⁵ condiciones que deben de existir de manera copulativa en todos los recursos.³⁶

Según lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso *vs. México*, para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan

³² CIDH. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA/Ser.LV/II.129. El Acceso a la Justicia como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estudio de los Estándares Fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Septiembre, 2007.

³³ Corte IDH. Caso *vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.

4.

³⁴ Corte IDH. Caso *vs. México*. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184. Párr.118.

³⁵ COURTIS, Christian. El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Revista del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Año 2006, Número 5. Página 35.

³⁶ MEDINA QUIROGA, Cecilia. La Convención Americana: Teoría y jurisprudencia. Centro de Derechos Humanos. Facultad de Derecho. Universidad de Chile. 2003. P. 361

formalmente, sino que es preciso que tengan **efectividad** en los términos del mismo, es decir, que den resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya sea en la Convención, en la Constitución o en la ley. Esta obligación implica que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.³⁷

Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que de la interpretación del artículo 25 en relación con el artículo 8 de la Convención Americana deriva el derecho de acceso a la justicia que impone a los Estados la obligación de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), mismos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1).³⁸

Así las cosas, la jurisprudencia del Tribunal Interamericano es constante al señalar que la garantía del acceso a la justicia implica suministrar a las víctimas de violaciones a derechos humanos los recursos necesarios para alegar la afectación de sus derechos,³⁹ además, ha sido enfática al establecer que no basta con la sola existencia formal de recursos, sino que éstos deben ser adecuados y efectivos para remediar la situación jurídica infringida.⁴⁰

En otras palabras, no resulta suficiente que un recurso esté previsto en la Constitución o en la ley, sino que es necesario que los Estados adopten las medidas necesarias para garantizar que tales recursos sean: 1) verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación y; 2) que puedan proporcionar una reparación.⁴¹

Ahora bien, en el caso concreto, las y los Ministros de esta Suprema Corte deben considerar que la *sentencia dictada para efectos* no cumpliría con los estándares anteriormente señalados, en tanto torna en ilusorio recurso de amparo directo en

³⁷ Idem.

³⁸ Corte IDH. Caso y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 21; Corte IDH. Caso vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Julio de 2006. Serie C No 149., párr. 175.

³⁹ Corte IDH. Caso vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No 5.

⁴⁰ Corte IDH. Caso vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de Junio de 2005. Serie C No 129. Párr. 93.

⁴¹ Corte IDH. Caso vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No 129. Párr. 177.

revisión como instrumento de protección de derechos humanos.

Como indicamos, la **efectividad** de un recurso, implica la obligación de las autoridades de garantizar que el recurso sea realmente capaz de producir los resultados para los cuales fue creado, es decir, que pueda cumplir con su objeto.

En tal sentido, el amparo directo y el amparo directo en revisión fueron diseñados desde una perspectiva formalista propia de la época, como instrumentos capaces de producir dos resultados diferentes. Por una parte, ser concedidos sólo *para efectos* de subsanar los errores en el proceso o en un *sentido amplio de protección*, que se traduce en la total reparación de los derechos violentados por la autoridad.

El primero de estos resultados —amparo para efectos—, analizado bajo la lógica del juicio de amparo como máximo instrumento de protección de derechos humanos, convierte al amparo directo y máxime al amparo directo en revisión en recursos ilusorios para proteger la situación jurídica infringida, es decir, para proteger los derechos fundamentales del quejoso.

En lo que respecta al amparo directo en revisión, esto sucede debido a que, la concesión del amparo **para efectos**, tiene como consecuencia que la Suprema Corte de Justicia, tras el análisis de una violación procesal —relacionada con aspectos de constitucionalidad— y al declarar la misma como fundada, regrese el expediente a la autoridad responsable para efectos de que la misma repare las violaciones que existieron en el proceso.

Tal situación, en realidad se traduce en la posibilidad que dentro de aquellos juicios, que por lo general llevan varios años de litigarse en primera y segunda instancia y luego ante un Tribunal Colegiado, exista otra violación procesal que varios meses después haga retornar el expediente a la Justicia Federal, provocando así que del mismo asunto deriven un número incierto de juicios de amparo; esto es lo que el Ministro Zaldívar ha llamado como: *el amparo ping pong*.

⁴²Dicha situación, por supuesto, implica que el juicio de amparo no sea, en términos del artículo 25, un recurso **rápido y sencillo** para la protección de derechos.

En este sentido, no basta con que el recurso de amparo directo en revisión tenga dentro de sus posibilidades el otorgamiento del amparo en un sentido pleno, sino que es necesario que el Tribunal, en caso de comprobar la violación a derechos humanos, realmente otorgue esta protección. De lo contrario, el propio Tribunal estaría dando pie a una cadena indefinida de juicios de amparo derivados de violaciones procesales, situación que además, retrasa, dificulta y sobrecarga la impartición de justicia en nuestro país atentando contra lo señalado en los artículos 17 y 23 de nuestra Constitución en relación con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo breve y en el marco de tres instancias.

De igual manera, es necesario establecer que la ~~tarea~~ **tarea** de garantizar la **efectividad** del recurso —en términos del artículo 25 de la Convención Americana— recae en esta Suprema Corte de Justicia y se traduce en permitir la máxima realización del recurso mediante el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia de la Unión en el sentido más amplio de protección.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que el amparo directo en revisión tiene como finalidad realizar un control respecto la interpretación de disposiciones constitucionales, lo cual inevitablemente se encuentra relacionado con la garantía de los derechos fundamentales, toda vez que el conocimiento de este recurso se le reservó como una facultad exclusiva a la Suprema Corte para que, en su papel de Tribunal Constitucional, fuese el única que pudiese realizar un control de las normas constitucionales.

En el caso en concreto, y a juicio de esta institución de protección de los derechos fundamentales, este Tribunal Constitucional limitaría enormemente su papel como garante de derechos humanos si sólo se limita a realizar un análisis formal

⁴² ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo. Hacia una nueva ley de amparo. Instituto de Investigaciones Jurídicas. Primera Edición. México, 2002.

respecto la interpretación de las normas por parte de la autoridad sin entrar a conocer sobre el fondo del asunto, máxime cuando la finalidad del propio recurso no es la obtención de un *control de constitucionalidad in abstracto*, sino conseguir la garantía y en su caso, la reparación, de los derechos humanos violentados por una errónea interpretación y aplicación de preceptos constitucionales.

Cabe recordar que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también determinó que el principio del *efecto útil* (*effete utile*) conlleva la necesidad de aplicar e interpretar las disposiciones con su objeto y fin, lo cual no sólo aplica respecto a las normas sustantivas de derechos humanos, sino también en relación con normas procesales.⁴³ En tal sentido, ordenar la concesión del amparo **para efectos** implicaría también contravenir el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, en tanto no se estaría garantizando el cumplimiento del objeto y fin del recurso, es decir, la concesión de un amparo que sólo ordene la corrección de errores en la aplicación de la ley o la Constitución pero que no resulte en la adecuada reparación a los derechos fundamentales de una persona ~~contra~~ ^{que} ~~viene~~ ^{se} el objeto y fin del juicio de amparo.

Por último, esta Comisión desea manifestar que esta Suprema Corte de Justicia se encuentra legalmente vinculada a ejercer un *control de convencionalidad*, que implica acatar y aplicar no sólo las disposiciones establecidas en dicha Convención, sino también las interpretaciones que de la misma, ha establecido la Corte Interamericana en los casos litigados contra el Estado mexicano.

En consecuencia, y debido a que el otorgamiento de un amparo para efectos no sólo contraviene el principio del **efecto útil** del juicio de amparo, sino que también resulta incompatible con los estándares establecidos en el artículo 25 de la Convención Americana, en tanto convierte al juicio de amparo en un recurso ilusorio, es encargo de esta Suprema Corte de Justicia garantizar la mayor protección de la persona mediante el otorgamiento del amparo en el sentido más amplio posible.

⁴³ Corte IDH. Caso

y Cosas. Sentencia de 15 de Septiembre de 2005. vs. Colombia. Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones

Serie C. No. 134. Párr. 106

IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE NO PUEDEN ESCAPAR AL ANÁLISIS DE UN JUZGADOR CONSTITUCIONAL

A continuación, se procederá a realizar un análisis relacionado con elementos fundamentales que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación podría tomar en consideración al momento de analizar las siguientes cuestiones de constitucionalidad que tuvieron como consecuencia la vulneración de los derechos de la parte quejosa.

IV.1. Valoración de Prueba Ilícita

En el presente caso, la valoración de la prueba obtenida mediante violaciones a derechos humanos constituye un elemento fundamental en la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal de última instancia dentro del Estado. En este sentido, una Corte Suprema desarrolla, entre otras, la función fundamental de asegurar la potencial uniformidad de la jurisprudencia, tanto propia como de los órganos jurisdiccionales de carácter inferior, características que pueden ser extendidas a toda Corte Suprema.⁴⁴

La SCJN al ser el órgano jurisdiccional supremo garante de los derechos humanos y las garantías constitucionales, debe asegurar el máximo respeto posible a los derechos de toda persona procesada pues *«si se quiere una justicia eficiente, coherente, confiable y racionalmente orientada hacia el ordenado desarrollo del derecho, entonces, debe configurarse un modelo de corte suprema capaz de tender hacia estos valores y de realizar estas finalidades»*⁴⁵.

En tal entendido, el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda persona sólo puede garantizarse en el marco del debido proceso legal. Dentro de dicho marco se ubica el derecho a la prueba que constituye una de las garantías fundamentales de toda persona pues forma parte esencial del derecho de acción y defensa, sin ella dentro de un proceso, los derechos humanos carecerían de sentido al no permitir a las partes acreditar por ningún medio disponible las

⁴⁴ Michelle Taruffo, La Prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 205, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁵ Ibid, p. 225

aseveraciones fácticas que son el fundamento de sus pretensiones y defensas.⁴⁶ Así, debe considerarse que el derecho a la prueba abarca tanto el derecho de toda parte para ofrecer la prueba relevante que esté en su posesión como el derecho a que toda prueba sea debidamente considerada por el tribunal.⁴⁷

Ahora bien, el primer estándar de valoración de la prueba en nuestro ordenamiento jurídico es la Constitución, que traza los parámetros necesarios para que «la actividad probatoria respete cabalmente los derechos fundamentales, exigencia indispensable para aspirar a un Estado democrático de derecho»⁴⁸. Desde luego, en este punto hablamos del concepto de constitución en sentido amplio, reconocido por el artículo 1º, específicamente a partir de la reforma constitucional en derechos humanos, de 2011.

En la Constitución se encuentra el derecho a probar y las directrices para determinar cuándo resulta necesaria la exclusión de medios de prueba que atentan contra los derechos humanos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico y, por ende, deban ser anulados o excluidos.⁴⁹ Por lo tanto, la prueba ilícita, al haberse obtenido en transgresión a diversos derechos fundamentales, conlleva su necesaria inutilización procesal. Es decir, la prohibición de su valoración en juicio por el tribunal sentenciador.⁵⁰

Desde esta perspectiva, este tribunal constitucional tiene el trabajo de analizar las pruebas que integran el presente caso, para advertir, en su caso, aquellas que fueron obtenidas violando derechos humanos y, bajo la lógica anteriormente expuesta. En caso de que la Primera Sala de este Tribunal Constitucional advierta una circunstancia como la relatada anteriormente, tiene la responsabilidad de dejar sin efectos toda aquella prueba que haya sido obtenida en el marco de violaciones a los derechos fundamentales.

Asimismo, todos los sujetos del ordenamiento jurídico están obligados a respetar los derechos fundamentales de cualquier persona en todas sus actuaciones,

⁴⁶ Michelle Taruffo, La prueba, Artículos y Conferencias, Editorial Metropolitana, p. 79, disponible en <http://letrujil.files.wordpress.com/2012/01/la-prueba-michele-taruffo.pdf> (página consultada el 01 de agosto de 2012)

⁴⁷ Idem

⁴⁸ Constanancio Carrasco Daza, La prueba ilícita en material electoral. Reglas de exclusión diseñadas desde la Constitución, México, UNAM-IIJ, p. 135

⁴⁹ Idem

⁵⁰ Manuel Miranda Estrampes, La Prueba Ilícita, La regla de exclusión probatoria y sus excepciones, Barcelona, Revista Catalana de Seguridad Pública, p. 138

incluyendo la búsqueda y ofrecimiento de pruebas.⁵¹ Ahora bien, el artículo 20 constitucional, apartado A fracción IX expresamente dispone que «*Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula*».

De lo anterior, se desprende un mandato constitucional directo, que como tal, debe ser aplicado por la Primera Sala de la SCJN. Ciertamente es que originariamente la admisión de la prueba compete a los jueces de instrucción; sin embargo, cuando un tribunal de amparo se pronuncia sobre el hecho de la existencia de violaciones a derechos humanos consagrados en la Constitución, tales como aquellas reglas que integran el debido proceso legal, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, entre otros, dicha competencia originaria debe actuar de la manera más amplia bajo las directrices propias de un tribunal constitucional garantista.

Esto no significa que el tribunal de amparo pueda sustituir en cualquier caso la interpretación de los hechos que ha realizado el tribunal ordinario, sino que únicamente tiene el deber de hacerlo en los casos que el material probatorio para imputar responsabilidad a una persona se haya obtenido en un proceso desarrollado a través de violaciones a los derechos humanos, circunstancia en la cual, como se ha relatado con antelación, nada impide al mismo a resolver las cuestiones de fondo para asegurar la máxima protección de los derechos humanos.

Aunado a lo anterior, esta Corte ha establecido que exigir la nulidad de una prueba ilícita constituye un derecho que se construye con base en la condición de que una sentencia debe ser la conclusión de un proceso en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento para que sea válida (art. 14 CPEUM), la obligación del juzgador de conducirse con imparcialidad (art. 17 CPEUM) y el derecho a una defensa adecuada (art. 20, B, f. VIII CPEUM).⁵²

En caso de que se adviertan elementos que invaliden las pruebas de un caso, las mismas deben ser anuladas del proceso, pues es clara la transgresión de los

⁵¹ Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA. LAS PRUEBAS OBTENIDAS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, VIOLANDO DERECHOS FUNDAMENTALES, NO SURTEN EFECTO ALGUNO, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV de agosto de 2011, p. 226, Registro No. 161221. En adelante: Primera Sala, PRUEBA ILÍCITA.

⁵² Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, 10ª época, Jurisprudencia, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, diciembre de 2011, Tomo 3, p. 2057, Registro No. 160509. En adelante: Primera sala, PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO.

derechos fundamentales en este supuesto. Cuando las pruebas de cargo con las cuales se pretende imputar la responsabilidad de una persona carecen de licitud, un tribunal debe dejar sin efectos dichos medios probatorios, sin la necesidad de retornar el asunto al Tribunal Colegiado implicado. De no ser así, se pone en grave riesgo el derecho a la defensa, pues este Alto Tribunal podría transgredir el derecho a la prueba al no declarar nulos los elementos probatorios obtenidos en el marco de violaciones a los derechos humanos, con lo que este Tribunal Supremo podría estar evaluando de manera errónea las pruebas afectadas.

Reforzando lo anterior, uno de los principios rectores de nuestro sistema penal consagra que toda persona, en especial aquellas a las que se les ha imputado la comisión de algún delito, tienen derecho a no sufrir una condena a menos que su responsabilidad penal haya quedado demostrada plenamente. Este derecho a que se presuma la inocencia se encuentra reconocido en los artículos 14 y 20 apartado B fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).

La presunción de inocencia supone un estándar constitucional que necesariamente debe ser superado en el proceso mediante las pruebas que el juzgador pueda llegar a dictar una sentencia en la que condene a una persona. Este derecho desde una perspectiva multifactorial "tiene, básicamente, un triple significado: como regla de tratamiento respecto al individuo, como regla probatoria y como regla de juicio o estándar probatorio en el proceso."⁵³

Particularmente para este caso, debemos centrar la atención en dos de los tres elementos, la presunción de inocencia se compone de: la regla de trato y la regla de juicio. La regla de trato supone que el acusado no sea considerado culpable hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra;⁵⁴ mandato aplicable tanto a las situaciones procesales como extraprocesales y constituye el derecho a recibir el trato y la consideración de no haber sido el autor de un delito mientras no

⁵³ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 124.

⁵⁴ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, XXV de enero de 2007, p. 2295, Registro No. 173507. En adelante: Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

se demuestre la culpabilidad a través de medios probatorios conformes con los principios fundamentales de todo Estado constitucional de derecho.⁵⁵ Por otro lado, la regla de juicio significa que deben respetarse los principios rectores del debido proceso y de los estándares más altos de prueba en materia penal en el devenir de todas las etapas procesales.⁵⁶

En consecuencia, como fue señalado anteriormente, este alto tribunal tiene la encomienda de garantizar que la totalidad de las pruebas que pretenden demostrar la responsabilidad penal de una persona acusada hayan sido suministradas por el órgano de acusación cumpliendo con los estándares constitucionales y legales que requiere la licitud de la misma,⁵⁷ pues toda aquella prueba viciada carece de la integridad necesaria para desvirtuar el principio de presunción de inocencia y por ende debe resultar inutilizable, sin necesidad de turnar el caso al Tribunal Colegiado Implicado.

En el caso en comento, es fundamental que el tribunal constitucional analice el material probatorio para advertir aquél que ha sido afectado por violaciones a los derechos humanos de la persona acusada, y que por tanto provoque la falta de fiabilidad de estos medios de prueba. Esta cuestión impacta directamente en los derechos de la persona acusada, pues toda persona tiene el derecho a que en caso de ser condenada, su condena esté basada en evidencia sólida.

En otras palabras, la cuestión en el presente caso en lo referente a la prueba no solamente estriba en dilucidar si las pruebas son o no suficientes para condenar a la recurrente sino también en el hecho de que las violaciones previas a la valoración de las pruebas puedan tornar éstas nulas, y en consecuencia, inutilizables. En particular, las pruebas impugnadas por la parte quejosa fueron:⁵⁸

| PRUEBA | FECHA | COMENTARIOS |
|---|--|--|
| Victima Testigo 1 Hombre que fue rescatado en el el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: | Durante la primera declaración este testigo identificó a como partcipe en su secuestro y quien le habia dado de comer durante su cautiverio. Dichas |

⁵⁵ Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, ALCANCES DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL, 9ª época, Tesis Aislada, Semanario judicial de la federación y su Gaceta, XXY de mayo de 2007, p. 1186, Registro No. 172433. En adelante: Segunda Sala, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁶ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁷ Cuarto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

⁵⁸ SCJN, Proyecto de Amparo Directo en Revisión 517/2011, Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, p. 140.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • 2 de marzo de 2006 • 30 de mayo de 2006 | manifestaciones fueron reiteradas en diversas ampliaciones de la declaración inicial. |
| Víctima Testigo 2 Mujer madre de testigo víctima 3 que fue rescatada en el día del montaje televisivo. | Declaración ministerial de fecha: <ul style="list-style-type: none"> • 9 de diciembre de 2005 Ampliaciones a la declaración de fechas: <ul style="list-style-type: none"> • 8 de febrero de 2006 • 15 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Respecto a las declaraciones y ampliaciones rendidas por este testigo es importante señalar que durante la primera declaración la testigo no identificó a como una de las personas que participaron en su secuestro, sino que fue hasta 3 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo que la testigo afirmó reconocer la voz de la inculpada. |
| Víctima Testigo 3 Hijo menor de edad de víctima testigo 2 que fue rescatado en el día del montaje televisivo | Declaración ministerial de fecha: <ul style="list-style-type: none"> • 9 de febrero de 2006 Ampliaciones a la declaración de fechas: <ul style="list-style-type: none"> • 14 de febrero de 2006 • 7 de junio de 2006 | | Durante la primera declaración, el menor no reconoció ni la voz ni el físico de y narró que quien le había acoso sangre había sido un hombre identificado como No fue sino hasta después de la publicación de los videos y de pláticas con su madre que el menor de edad modificó sus declaraciones señalando el reconocimiento de una mujer con acento raro y piel |
| Testigo 4 Mujer que comparece días después de exhibidos los videos señalando que reconoce a como la mujer que acechaba en el mercado a Víctima testigo 2 | Declaraciones ministeriales de fechas: <ul style="list-style-type: none"> • 10 de febrero de 2006 • 1 de marzo de 2006 | | En relación con esta testimonial vale la pena señalar que la mujer acudió voluntariamente a rendir su declaración 5 días después de que las autoridades reconocieron la existencia de un montaje televisivo, nunca participó en el momento en que fue detenida. |
| Parte Informativo | Documentos de fecha 9 de diciembre de 2005 y 17 de enero de 2006. | | Las propias autoridades reconocieron que habían existido errores en las fechas y horas de la detención de |
| Parte Informativo | | | |

En caso de descartar el material probatorio, y si el tribunal constitucional advierte que el órgano de acusación carece de elementos para superar el estándar que significa la presunción de inocencia, debe actuar de manera garantista, resolviendo el fondo de la cuestión. Por tanto, los derechos que protegen al acusado (presunción de inocencia, debido proceso, defensa adecuada e imparcialidad del juzgador) tienen que prevalecer frente a las violaciones cometidas por la autoridad en la construcción de su acusación. Es necesario enfatizar que la evidencia sólida y fiable, obtenida con apego a los derechos fundamentales y bajo los lineamientos que establece la Constitución debe ser el sustento de cualquier acusación que tenga por finalidad la restricción a los derechos y libertades de toda persona.